EL DERECHO A DEFENDER DERECHOS

Juntanzas para la protección y exigencia de garantías

INFORME ANUAL 2025

Insistir en la paz en medio de la violencia

Situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario desde los territorios colombianos



Insistir en la paz en medio de la violencia
Situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario desde los territorios colombianos

Edición del contenido
La edición del contenido de esta publicación fue realizada de manera colectiva por la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU) y las organizaciones que integran la Juntanza para la Protección y Exigencia de Garantías:

Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU)
Asociación para la Promoción Social Alternativa – MINGA
Programa Somos Defensores
Corporación Jurídica Libertad
Civil Rights Defenders

Consultoría
Sergio Arboleda
Juan Esteban Arenas Pérez
Carlos Yasset Osorio Puerta
Cristian Castaño
Observatorio de DDHH y DIH – Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU)

Edición y revisión de estilo
Sofía Villa Múnera
Ilustración, diseño y diagramación
Camila Bolívar Manzano

ISBN
ISBN

Cómo citar esta publicación
Asociación para la Promoción Social Alternativa – MINGA. (2026). Insistir en la paz en medio de la violencia: Situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario desde los territorios colombianos. Bogotá D. C., Colombia.

Primera edición
Bogotá D. C., Colombia
Julio de 2026

Descargo de responsabilidad
La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo de la Unión Europea, en el marco del proyecto El Derecho a Defender Derechos: juntanzas para la protección y exigencia de garantías, coordinado por la Asociación para la Promoción Social Alternativa – MINGA. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU) y de la Juntanza para la Protección y Exigencia de Garantías, integrada por la Asociación para la Promoción Social Alternativa – MINGA, el Programa Somos Defensores, la Corporación Jurídica Libertad y Civil Rights Defenders y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.

Derechos de autor
© Asociación para la Promoción Social Alternativa – MINGA, 2026.
Esta publicación fue elaborada en el marco de la Juntanza para la Protección y Exigencia de Garantías, bajo la coordinación de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU).

Copyleft ⓒ Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación para fines educativos, pedagógicos, académicos, de investigación y de incidencia, siempre que se cite adecuadamente la fuente, no se altere su contenido y no se utilice con fines comerciales.

Con apoyo de:

INTRODUCCIÓN

El presente informe es un ejercicio de construcción colectiva liderado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), la Asociación Minga, el Programa Somos Defensores y la Corporación Jurídica Libertad que busca visibilizar y denunciar las graves violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas en Colombia durante enero y septiembre de 2025.

El documento busca proporcionar una comprensión profunda de la complejidad multidimensional del riesgo que siguen teniendo las personas defensoras de DD.HH., la permanencia de las graves violaciones de DD.HH. y crisis humanitaria que sufren los diferentes territorios del país, permitiendo al lector no solo conocer las cifras, sino entender las lógicas de control territorial, las alianzas entre actores y la sistematicidad de las agresiones que configuran un escenario de riesgo extremo para la vida y la democracia. Es fundamental abordar el informe con esta amplitud para trascender del simple reporte de hechos y ofrecer un análisis que conecte la deuda histórica del Estado con las nuevas dinámicas de violencia.

La estructura del documento guía al lector desde el contexto general hasta las acciones específicas necesarias para revertir la crisis. En primer lugar, se presenta un análisis de los contextos regionales, lo cual es indispensable para entender las particularidades históricas, geográficas y económicas que hacen de cada territorio un escenario de disputa. En segundo lugar, se desarrolla un bloque dedicado al análisis detallado de la información cuantitativa y cualitativa sobre las violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH, permitiendo identificar patrones de victimización y responsabilidades de los actores armados y estatales. Finalmente, el documento cierra con un acápite de conclusiones y recomendaciones, que funciona como una hoja de ruta política y jurídica exigiendo al Estado colombiano la adopción de medidas transformadoras que aborden las causas estructurales del conflicto, fortalezcan la justicia y transformen el paradigma de protección, de uno individual a uno colectivo y comunitario.

El análisis se centra en regiones y territorios clave de la geografía nacional, comenzando por el departamento de Antioquia, donde se expone la situación de

subregiones como el Nordeste, Bajo Cauca y el Suroeste, marcadas por la hegemonía paramilitar y los conflictos socioambientales derivados de megaproyectos mineros.

La región Nororiental es otro foco de atención, con un análisis del departamento de Arauca, donde persiste una guerra triangular entre el ELN, las disidencias de las FARC y la Fuerza Pública. El Magdalena Medio, caracterizado por la bonanza del oro ilegal y los monocultivos; y el Catatumbo, que enfrenta una de las escaladas de violencia más graves por la ofensiva del ELN contra el Frente 33.

Asimismo, el informe incorpora la región Centro, con énfasis en Bogotá, Cundinamarca, Tolima y Huila. En este territorio se evidencian procesos de expansión y consolidación de estructuras criminales, disputas por el control territorial y de economías ilícitas, reconfiguración de actores armados y persistencia de riesgos para las comunidades, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos. El análisis permite, además, identificar las particularidades que adquieren estas dinámicas en la capital del país y en los departamentos que conforman su entorno regional, así como los impactos derivados de la débil presencia integral del Estado y de la persistencia de factores estructurales asociados a la violencia.

También se analiza Suroccidente colombiano, incluyendo Cauca, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y Risaralda, territorios con alta biodiversidad y presencia de comunidades étnicas que sufren el impacto de la reconfiguración del conflicto en enclaves cocaleros como el Cañón del Micay y Tumaco.

Finalmente, se aborda la región Caribe, cubriendo sus ocho departamentos y analizando el control territorial del Clan del Golfo y su disputa con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en zonas costeras y portuarias estratégicas para el tráfico transnacional.



En estos territorios se observaron temas transversales que definen la crisis humanitaria actual. Asimismo, se analiza la connivencia y responsabilidad de la Fuerza Pública, exponiendo denuncias sobre la falta de acción ofensiva contra ciertos grupos armados y la presunta colaboración de militares en la expansión del paramilitarismo, lo que profundiza la desconfianza institucional y la impunidad.

El eje central del análisis son las obligaciones internacionales del Estado colombiano de respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Este enfoque es crucial porque permite evaluar la responsabilidad estatal no solo por acción directa, sino por su omisión o negligencia deliberada en la protección de las comunidades y en la investigación de crímenes internacionales. Más allá del reporte de los hechos documentados, se analizó la respuesta institucional efectiva para prevenir, proteger y mitigar las vulneraciones, así como la responsabilidad de disponer de recursos administrativos y judiciales idóneos que aseguren la garantía y protección judicial de los derechos humanos (CADH, 1969, Art. 8 y 25). Estas obligaciones se encuentran relacionadas con la responsabilidad internacional del Estado colombiano de investigar, judicializar y sancionar las graves violaciones a los DD.HH. y crímenes internacionales.

Asimismo, se incorpora un robusto enfoque de género e interseccional, el cual es una necesidad prioritaria para comprender que la violencia contra las mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas no es accesoria, sino que busca castigar la autonomía y la participación política en espacios tradicionalmente masculinizados. Este lente permite identificar patrones específicos como la violencia vicaria, donde se ataca a los hijos para herir a las lideresas, y la sevicia en crímenes contra la población trans, entendiendo estos actos como mecanismos de control social.

Finalmente, el informe se sustenta en el reconocimiento del Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional (Sentencia SU-546/23), lo que obliga a realizar un seguimiento estricto a la respuesta estatal frente al riesgo que enfrentan las personas defensoras de DD.HH., evaluando si las medidas de protección son efectivas o si, por el contrario, existe una desarticulación institucional que perpetúa la impunidad.



UNA MIRADA A LOS ASPECTOS GENERALES

El panorama de los derechos humanos en Colombia durante 2025 se define por lo que denominan un *"nuevo ciclo"* o *"tercer ciclo"* de la violencia, caracterizado por un complejo entramado de rupturas y continuidades tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Este ciclo no representa una simple prolongación del conflicto histórico, sino una reconfiguración profunda donde la reincorporación de las antiguas FARC-EP dejó vacíos territoriales que el Estado no logró ocupar con institucionalidad, permitiendo la expansión y disputa feroz entre nuevos actores armados como el Clan del Golfo, el ELN y diversas facciones de las disidencias (EMC y Segunda Marquetalia).

Esta dinámica ha generado un escenario de guerra multipolar y fragmentada donde el control territorial ya no obedece exclusivamente a disputas ideológicas, sino a la dominación de economías estratégicas y el control social sobre la población civil. La violencia en este ciclo se manifiesta como un caleidoscopio de interacciones y alianzas volátiles que involucran no solo a grupos ilegales, sino también denuncias persistentes de connivencia con sectores de la Fuerza Pública y la influencia de intereses empresariales y extractivos.

Lo anterior ha llevado a la persecución de procesos comunitarios y sociales, en los cuales incluso se ha instrumentalizado el sistema judicial para criminalizar la protesta y la defensa del territorio, como sucedió en Antioquia con la persecución a los "11 de Jericó",

donde líderes campesinos fueron judicializados por oponerse a proyectos de minería transnacional. El segundo caso fue en El Carmen de Viboral, donde hubo abuso del derecho penal para silenciar a colectivos feministas y así favorecer intereses económicos particulares bajo una apariencia de legalidad.

En los territorios, los nuevos actores armados se disputan la tenencia de la tierra y el control de corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería. En subregiones como el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, así como en el Sur de Bolívar, la minería ilegal y artesanal de oro se ha consolidado como un motor principal de la confrontación, especialmente ante el aumento histórico de los precios internacionales del mineral. De igual manera, los enclaves cocaleros en el Catatumbo,



el Cañón del Micay y el Putumayo continúan siendo centros de gravedad del conflicto, donde se observa una mayor especialización industrial de la cadena productiva y una disputa encarnizada por los corredores estratégicos que conectan estas zonas con los puertos del Caribe y el Pacífico para la salida de narcóticos y armas.

Estas regiones, marcados históricamente por el abandono estatal y altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), son hoy escenarios donde grupos armados suplantan las funciones del Estado, imponiendo tributos, regulando la vida cotidiana y administrando una gobernanza criminal que erosiona el tejido social y la autonomía de las comunidades.

En cuanto a la situación de las personas defensoras de derechos humanos, se analizaron las agresiones, el contexto de violencia y las infracciones al DIH que afectan tanto a quienes ejercen esta labor como a la ciudadanía en general, con el propósito de evaluar la respuesta estatal y su correspondencia con las obligaciones y responsabilidades internacionales del Estado colombiano. Los hallazgos evidencian un patrón sistemático de agresiones orientado a desarticular procesos organizativos, con especial afectación

al campesinado, que concentra el 46 % de las vulneraciones registradas en Antioquia. Esta situación contrasta con su reconocimiento formal como población de especial protección, pues en la práctica continúa siendo uno de los sectores más expuestos y deslegitimados.

Un hallazgo común en todas las regiones analizadas es que la violencia no es aleatoria, sino que responde a una lógica de control político, social y económico vinculada a la explotación de bienes comunes y el manejo de rutas de tráfico, que castiga sistemáticamente a los sectores más vulnerables y persigue a los líderes y lideresas sociales que defienden los derechos de las comunidades. Adicionalmente, las violencias documentadas revelan un entramado de poder que se ensaña especialmente sobre los cuerpos de las mujeres y las poblaciones diversas. La violencia contra las lideresas no es accidental; busca castigar la ocupación de espacios políticos y comunitarios tradicionalmente masculinizados.

Se han identificado marcas de género específicas como la violencia vicaria, donde se amenaza o ataca a los hijos para herir y silenciar a las madres defensoras. El informe destaca con especial gravedad la sevicia transfóbica manifestada en transfeminicidios como los de Fernanda Domicó y Sara Millerey, crímenes que trascienden el asesinato físico para buscar una aniquilación simbólica de la identidad de género mediante la tortura y la exposición pública del horror.

Paralelamente, la niñez y la juventud son víctimas de una instrumentalización sistemática bajo la modalidad de “semilleros” o “cachorros”, donde los grupos armados vinculan a menores me-

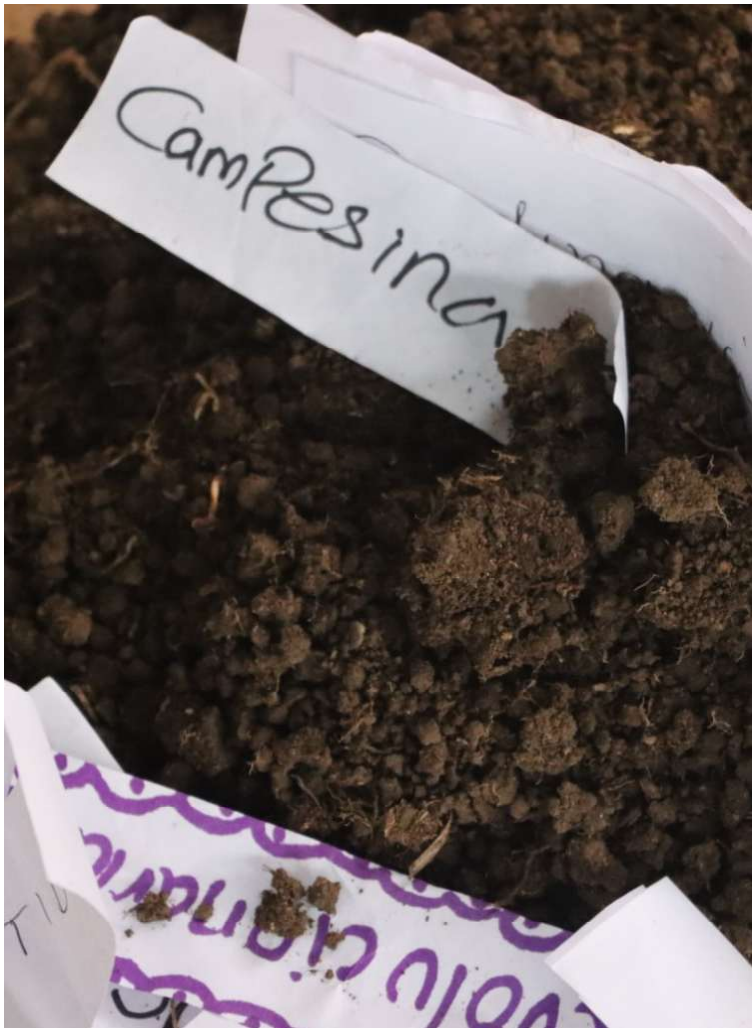


diante coacción emocional, inducción al consumo de sustancias o falsas ofertas de empleo para labores de inteligencia, sicariato y explotación sexual, rompiendo así los relevos generacionales del tejido comunitario.

Por otro lado, la población civil en las regiones de Antioquia, el Catatumbo, Arauca y el Suroccidente padece infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, siendo utilizada frecuentemente como escudo humano en medio de confrontaciones indiscriminadas. El uso de medios ilícitos como minas antipersonales y el empleo de drones con explosivos ha generado crisis humanitarias marcadas por confinamientos masivos y desplazamientos forzados de miles de personas que huyen del terror cotidiano.

Frente a este escenario, la respuesta del Estado colombiano es calificada como deficiente, desarticulada y cómplice. Se denuncian operativos militares con uso desproporcionado de la fuerza que resultan en la muerte de civiles, como el caso de la lideresa María Mariela Monsalve en Ituango, y una persistente "operación de brazos caídos" donde la Fuerza Pública parece observar la confrontación entre grupos ilegales sin intervenir para proteger a los ciudadanos.

La impunidad estructural, que rara vez alcanza a los autores intelectuales de los crímenes, y la falta de garantías reales para el retorno de los desplazados, configuran un escenario de desamparo que obliga a las organizaciones sociales a mantener su labor de resistencia en condiciones de riesgo extremo.




ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

Conforme al propósito del actual informe, se construyó un contexto del departamento de Antioquia con el fin de señalar los antecedentes de las agresiones abordadas con un enfoque interseccional y territorial, profundizando en las categorías que desarrolla el Derecho Internacional Público sobre la calificación de las conductas incorporadas en este documento.

El departamento de Antioquia, al noroccidente de Colombia, comprende 125 municipios y nueve subregiones: Suroeste, Occidente, Urabá, Valle de Aburrá, Oriente, Magdalena Medio, Norte, Nordeste y Bajo Cauca. Gran parte del territorio está en la cordillera de los Andes y se extiende hacia el mar Caribe. Limita al norte con Córdoba y Bolívar, al occidente con Chocó, al sur con Risaralda y Caldas, y al oriente con Bolívar, Santander y Boyacá. Posee una diversidad natural y biocultural notable, con formaciones como el Nudo del Paramillo, la Serranía de San Lucas, los Farallones del Citará y el Golfo de Urabá, y una historia económica marcada por la extracción de bienes comunes (especialmente oro).

Esa riqueza natural y la presencia de corredores estratégicos para tráfico de drogas, armas y contrabando han convertido a varias subregiones en espacios codiciados por actores armados ilegales. Siguiendo al Centro de Memoria Histórica, las violencias que se instalaron en Córdoba, Chocó y Antioquia "se fueron reciclando y reconfigurando en el tiempo, determinando la conformación de estructuras armadas de diverso carácter que, a su vez, sirvieron de base para la constitución de otras organizaciones y con ello de nuevas espirales de conflictividad. En este sentido se sucedieron ejércitos privados, esquemas de autodefensas, grupos insurgentes, estructuras contrainsurgentes y servicios de seguridad privada, ante el precario control estatal sobre los territorios y su parcialidad hacia ciertos actores y procesos, los cuales incidieron en el mantenimiento de situaciones de violación de DD.HH." (CNMH, 2022, p.52).

Desde finales de los años sesenta se asentaron insurgencias como las FARC-EP, el ELN y el EPL. A partir de los setenta, ganaderos, terratenientes, empresarios y comerciantes promovieron un modelo de desarrollo extractivista y, en numerosos casos, recurrieron a la persecución de procesos comunitarios para proteger intereses económicos. De esta manera, estos sectores apoyados

y articulados con actores políticos y, en considerables ocasiones, con miembros de la fuerza pública, impulsaron y financiaron la creación de grupos de autodefensa que, bajo el argumento de protegerse de las extorsiones y robos de la insurgencia, fueron responsables de graves vulneraciones a los Derechos Humanos, así como de crímenes de lesa humanidad.

Así, en la década de 1970 y 1980 se crearon distintos grupos de autodefensa dentro de los que destacaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), las Autodefensas de Puerto Boyacá, así como también grupos como el grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), entre otros. La Brigada XIV y varios batallones del Ejército se constituyen como un elemento fundamental en la consolidación de estas alianzas, adoptando marcos contrainsurgentes que habían empezado a tomar la doctrina militar a nivel mundial.

Durante los años 80 y 90 la confrontación entre insurgencia, ejército y paramilitares se intensificó, financiada por estos sectores empresariales y terratenientes, además del auge del narcotráfico, lo que degradó la guerra y expandió la "guerra sucia" contra la población civil (Comisión de la Verdad, s.f.) Esta confrontación infundió temor y zozobra y marcó una violencia sociopolítica que perdura en el tiempo y que ha dejado como principales víctimas a las comunidades y los procesos organizativos y de resistencia, quienes enfrentaron persecución y exterminio, por medio de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, estigmatización y masacres.

En la segunda mitad de los 90 las estructuras paramilitares y de autodefensa se unificaron en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo cual dio como resultado un proyecto militar de alcance nacional, responsable de una escalada de violencia sociopolítica que favoreció la imposición y el desarrollo de proyectos extractivistas ligados a intereses económicos de las élites locales y regionales. En este sentido, investigaciones y acciones judiciales como el allanamiento al Parqueadero Padilla en el centro de Medellín en 1998, revelaron nexos entre empresarios, terratenientes y ganaderos. Allí se hallaron estatutos de las AUC, creadas un año antes, así como libros contables, consignaciones bancarias, cheques y otros que permitieron identificar a 423 personas naturales y 58 personas jurídicas que financiaban a las estructuras de esta organización en distintas zonas (Salinas Plaza,

2025) (Rutas del Conflicto, 2020).

Pese a lo anterior, el Estado Colombiano incumplió su deber de investigar, juzgar y sancionar; incurriendo en una negligencia deliberada que permitió el fortalecimiento y permanencia de las AUC hasta su desmovilización. La mayoría de estos casos terminaron en la impunidad y en los pocos que llegaron a la justicia ordinaria, las sanciones fueron mínimas. Esto evidencia la estrecha alianza entre sectores económicos y políticos con el proyecto contrainsurgente, así como la relación entre agentes estatales y estructuras paramilitares en la ejecución de este plan de exterminio.

Tras la desmovilización formal de las AUC en 2006, el control paramilitar no desapareció. Por el contrario, surgieron estructuras post desmovilización que conservaron sus mecanismos operativos, muchos de los cuales persisten en los territorios y se expresan en el actual Clan del Golfo, que retomó el control de negocios ilícitos (Comisión de la Verdad, 2022).

Esto evidencia que la desmovilización de las AUC operó como una cortina de humo, permitiendo que sus estructuras mantuvieran el control territorial, de rutas y negocios, y dieran paso a su reconfiguración sin alterar la dinámica del conflicto en el departamento. Así, el dominio paramilitar se mantiene de forma hegemónica, mientras grupos como las disidencias de las FARC y el ELN expanden su presencia en zonas históricas, especialmente en el Norte, Nordeste, Bajo Cauca y algunas áreas del Suroeste en límites con Chocó.

La firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016 generó una nueva disputa por los vacíos territoriales dejados tras su desmovilización. La insuficiente implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), sumado al abandono estatal histórico, facilitó la intensificación del conflicto en subregiones como Bajo Cauca, Norte y Nordeste. El Estado colombiano no logró cumplir el propósito central del Acuerdo: ocupar esos territorios mediante oferta institucional e infraestructura que respondiera a las deudas históricas con las comunidades.

Por el contrario, la falta de voluntad institucional y las dinámicas impuestas por actores armados que ejercen poder de facto en distintas zonas han obstaculizado la materialización del Acuerdo Final. En este escenario, el departamento ha enfrentado una escalada del conflicto especialmente en



municipios donde la disputa entre el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, ELN y Ejército Nacional ha puesto a la población civil en medio de una crisis humanitaria.

Desplazamientos masivos, confinamientos, homicidios selectivos, amenazas y masacres configuran los repertorios de violencia que padecen a diario las comunidades y sus líderes. A esto se suman formas de control social como restricciones a la movilidad en caminos veredales e intervaredales en horas de la noche, prohibiciones sobre el uso de determinadas prendas, y la exigencia de permisos para recibir visitas de familiares o amistades externas a las veredas. En este contexto, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, así como las organizaciones sociales, son quienes cargan con los mayores riesgos al desarrollar su labor en medio de estas situaciones.

DINÁMICAS DEL CONFLICTO EN ANTIOQUIA

El primer semestre de 2025 continuó la crisis humanitaria y de derechos humanos profundamente arraigada, reflejo de los patrones estructurales de violencia que persisten en el país.

La disputa territorial, la expansión del paramilitarismo, la expansión y fraccionamiento de grupos de disidentes y la débil respuesta institucional mantienen a las comunidades en un escenario de alta vulnerabilidad. La violencia no es aleatoria: responde a una lógica de control político, social y económico que cas-

tiga a quienes defienden la tierra, el agua y la vida. Las amenazas, desplazamientos, judicializaciones y homicidios selectivos recaen con especial crudeza sobre el campesinado, las mujeres, los pueblos indígenas y los liderazgos comunitarios.

Se evidencia, además, una alarmante tendencia a la instrumentalización del sistema judicial para obstaculizar y criminalizar la labor de defensa de derechos, mientras persiste la impunidad para los victimarios. La convergencia de intereses entre actores armados, sectores empresariales e instituciones del Estado perpetúa un ciclo de violencia que el marco institucional ha sido incapaz de contener.

El fracaso de la política de Paz Total y la decisión del Gobierno Nacional de retomar los bombardeos y nombrar a un militar como Ministro de Defensa dan cuenta de la complejidad de violencia que se vive en el país y las consecuencias para la garantía de la vida y derechos de las comunidades que conviven en los territorios en disputa (CJL, 2025).

ANÁLISIS GENERAL DEL CONTEXTO DE DERECHOS HUMANOS EN ANTIOQUIA

De acuerdo con el sistema de monitoreo y documentación de la Corporación Jurídica Libertad, entre los meses de enero y septiembre del 2025 se registraron **95 casos** con **165 vulneraciones a los derechos humanos** contra líderes y lideresas sociales. Este informe incluye el análisis de dichas afectaciones, junto con las infracciones graves al DIH, las cuales recayeron principalmente sobre la población civil sin roles de liderazgo.

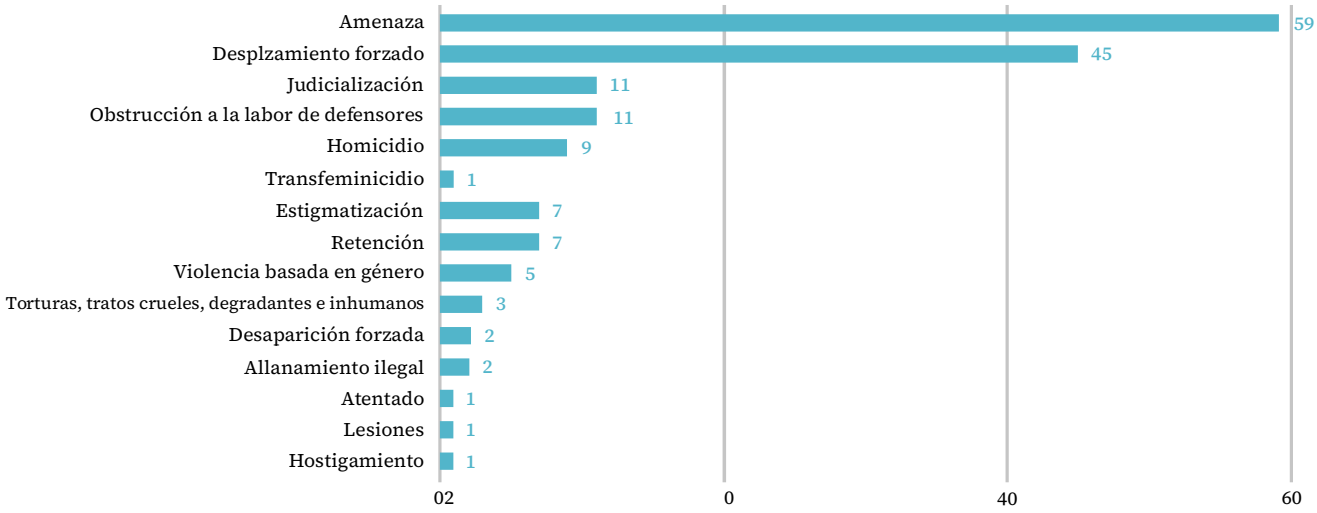
Al observar la distribución por sectores y territorios, se evidencia que el **campesinado** es el grupo con mayor número de vulneraciones **(46%)**. Este dato refleja, sobre todo, una contradicción estructural: mientras este es reconocido como sujeto de especial protección constitucional y de derechos colectivos, en la práctica sigue siendo uno de los sectores de liderazgos más expuestos, desprotegidos y deslegitimados.

En cuanto a la dimensión territorial, el Nordeste antioqueño, especialmente el municipio de **Anorí**, concentra la mayor cantidad de agresiones por municipio, seguido por el Valle de Aburrá (principalmente Medellín) y el Suroes-

te (Jericó), donde se presentan alarmantes crisis humanitarias debido a la fuerte presencia de actores armados ilegales que se disputan el control del territorio por intereses económicos, y donde no existen garantías por parte del Estado para el ejercicio del liderazgo y la defensa de derechos.

La siguiente gráfica, de elaboración propia, muestra la distribución de las agresiones contra los liderazgos sociales en el departamento:

Figura 1. Tipos de agresiones contra liderazgos sociales en 2025 en Antioquia



Es necesario distinguir las vulneraciones a DDHH y las infracciones graves al DIH. En el primer caso, se parte de la premisa de que únicamente los Estados pueden violar los DDHH, ya sea de manera directa o indirecta a través de particulares que actúan con su apoyo, tolerancia o aquiescencia. En este contexto, se incluyen las acciones del sector público, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y grupos paramilitares como el Clan del Golfo, este último es el mayor responsable de las agresiones registradas (52%) en el periodo analizado. En el segundo, las infracciones graves al DIH son los delitos graves cometidos por grupos armados, tanto estatales como irregulares, contra los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional de 1977, como son la desaparición forzada, la torutura, las ejecuciones extrajudiciales, entre otros.

Dentro de los casos analizados también se identifican importan-

tes afectaciones cometidas por empresas y actores privados. Dos ejemplos emblemáticos de este año son, por un lado, la Hacienda Monteverde ubicada en Turbo, a nombre de la empresa Todo Tiempo, donde familias reclamantes de tierras han denunciado amenazas de muerte, hostigamientos, apropiaciones indebidas de predios y ataques a su privacidad. Por otro lado, está el caso conocido como **"Los 11 de Jericó"**, campesinos judicializados por ejercer su legítimo derecho a la manifestación y a la defensa del territorio frente a la transnacional AngloGold Ashanti, señalada por múltiples vulneraciones ambientales y daños directos a las comunidades locales. Estos casos serán analizados posteriormente.

Referente a las modalidades de agresión, como se puede observar en la figura 1, la amenaza constituye la principal vulneración con 59 casos, derivando en el 73% de las ocasiones en desplazamientos forzados (43 casos). De acuerdo con el Boletín Semestral sobre la Situación Humanitaria y del nivel de riesgo a Defensores y defensoras de Derechos Humanos en Antioquia de la Corporación Jurídica Libertad (CJL, 2025), estas responden a dos propósitos centrales:

1. Intimidar a quienes ejercen liderazgo para que cedan a las pretensiones del victimario e incidir en los procesos organizativos, ya sea fragmentándolos o reforzando el control territorial.

2. Forzar el desplazamiento de liderazgos, debilitando el tejido comunitario y el fortalecimiento organizativo. En estos casos, aunque no siempre se exige explícitamente abandonar el territorio, el impacto emocional es tal que obliga a la per-



sona a salvaguardar su vida de esa manera.

Dentro del análisis de estos casos individuales se configuran además las amenazas colectivas. En el marco de los combates persistentes entre actores ilegales en el municipio de Anorí, el 10 de abril de 2025, el Clan del Golfo difundió un panfleto con 32 nombres de líderes campesinos y presidentes de JAC para amenazarlos con atentar contra su vida. Esta situación ha generado múltiples desplazamientos forzados, que se suman a la gravísima crisis humanitaria que ha venido atravesando el municipio desde el año pasado con la avanzada paramilitar en el territorio.

A finales de abril se registraron seis hechos en Urabá, debido a que María Teresa Moreno, heredera de la empresa Todo Tiempo que figura como propietaria de la hacienda Monteverde, amenazó e intimidó a familias reclamantes en proceso de restitución. Moreno, acompañada de sus trabajadores armados con fusiles, ha sido señalada de imponer linderos arbitrarios para apropiarse de terrenos restituidos y de prohibir a los legítimos propietarios registrar lo sucedido con sus celulares.

Según Rutas del Conflicto (2025), la Hacienda Monteverde se consolidó en la década de 1990, aprovechando el contexto de incursión paramilitar en Urabá para adquirir tierras mediante ventas forzadas a precios injustos. Un caso representativo es el de la familia de Rosa Villadiego, obligada a vender sus predios a Luis Fabio Moreno Ruiz, mayor accionista de Todo Tiempo, y a Gabriel Jaime Sierra, exrepresentante de Palmas de Curvaradó, condenado en 2014 por desplazamiento y despojo de tierras, además de delitos ambientales y concierto para delinquir. Sierra también integró la Asociación Ganaderos de Urabá Grande, que contó con directivos condenados por vínculos con el paramilitarismo.

De esta manera, numerosas familias fueron forzadas por negociantes de la empresa para vender sus tierras a un precio por debajo del costo real para supuestamente no tener problemas con los paramilitares, y así arrebataron miles de hectáreas a los labriegos, que han utilizado para la ganadería, el cultivo de palma y, hoy en día, el turismo. Desde el 2015 se han emitido cinco sentencias de restitución de tierras por parte del Tribunal Superior de Antioquia, quien ha reconocido estas vulneraciones por parte de Todo Tiempo (Rutas del Conflicto, 2025).

Ese mismo año, la Fundación Forjando Futuros denunció ante la justicia que 14 familias que intentaban retornar a Monteverde

fueron atacadas por unos 80 hombres armados que destruyeron sus viviendas e impidieron el acceso a sus tierras. Posteriormente, campesinos de la Asociación Tierra y Paz fueron agredidos durante una protesta pacífica con rifles de paintball, gas pimienta y tábanos eléctricos por trabajadores de la finca. Desde entonces, líderes, reclamantes de tierras e incluso sus abogados representantes han sufrido amenazas sistemáticas (Forjando Futuros, 2025). Pese a que las familias han interpuesto al menos tres denuncias ante la Fiscalía por amenazas de muerte, estas no han tenido resultados.

Sumado a esto, se ha evidenciado una tendencia nacional de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de desescalar los esquemas de seguridad de líderes y lideresas sin un análisis riguroso del nivel de riesgo, emitiendo decisiones carentes de motivación y, con ello, incumpliendo sus deberes constitucionales. La protección a líderes sociales no puede resolverse de forma arbitraria ni meramente administrativa, esta requiere rigurosidad técnica, enfoque diferencial y garantías efectivas de participación.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo (2023) mediante Alerta Temprana 019-2023 alertó sobre los riesgos que sufren los defensores y las defensoras de derechos humanos, recomendando distintas acciones a las entidades del Estado para prevenir y proteger las agresiones contra esta población.

De la misma manera, la Corte Constitucional (2023) mediante la Sentencia SU-546 evidenció y declaró el Estado de Cosas Inconstitucional frente a la situación de garantías y protección para líderes, lideresas y defensores de derechos humanos y realizó un llamado al Estado Colombiano para generar acciones preventivas y de protección que garanticen la labor de defensa de los derechos humanos.

Pese a lo anterior, **existe una desarticulación interinstitucional para prevenir las agresiones** y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, que se evidencia en el actual desescalamiento de medidas de protección y su poca efectividad.

La disputa por la tenencia de la tierra, marcada por alianzas entre sectores empresariales y grupos paramilitares en connivencia con la fuerza pública, que impide el derecho legítimo de las víctimas a la restitución de su tierra y al retorno a sus territorios, continúa siendo un factor de alto riesgo para organizaciones y comunidades más cuando las empresas actúan en completa impunidad, y los líderes y lideresas siguen des-



protegidos en contextos de alto riesgo (CJL, 2025).

Por su parte, en la **subregión del Bajo Cauca**, particularmente en el municipio de El Bagre, se observa una sistematicidad en las amenazas por parte del Clan del Golfo a tres autoridades indígenas que habilitaron un refugio humanitario en el marco de los desplazamientos forzados por enfrentamientos entre actores armados ilegales, y por esto han sido intimidados y forzados a desplazarse. Esta no es la primera vez que los líderes son vulnerados de esta manera, en años pasados han tenido similares situaciones, lo que genera impactos acumulativos cada vez más graves sobre sus proyectos de vida y de comunidad, sus economías, el tejido familiar y las prácticas culturales y colectivas.

Las amenazas en varios casos se expanden hacia las familias directamente. Para los casos de dos mujeres lideresas sociales se presentó **violencia vicaria**, pues se intimidó específicamente a hijos e hijas para afectarlas en el marco de su liderazgo.

Cinco casos más conforman amenazas colectivas, uno hacia la Mesa de DDHH del Valle de Aburrá, por medio de un afiche digital puesto en la red social X que hablaba de las condolencias por el fallecimiento del proceso. Esta organización lleva diez años de liderazgo y ha sido perseguida y excluida de espacios políticos por parte de la Alcaldía de Federico Gutiérrez.

Los otros cuatro casos corresponden a **líderes estudiantiles** y manifestantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid quienes, haciendo ejercicio de su rol, fueron

amenazados mediante pintas atemorizantes con sus nombres al interior de un aula, por medio de chats y personalmente por parte de una persona extraña.

Por otra parte, la judicialización arbitraria y la obstrucción a la labor de defensa de derechos se registró en 11 casos correspondientes a los ya mencionados **"11 de Jericó"** (Ortuño López, 2025). Se trata de once campesinos de entre 44 y 85 años, la mitad de ellos integrantes de Juntas de Acción Comunal (JAC), judicializados y perseguidos por protestar legítimamente contra las agresiones hacia el agua y el territorio del municipio por parte de la transnacional AngloGold Ashanti, que es una de las mineras de oro más grandes del mundo, desde su filial Minera de Cobre Quebradona. Estas personas han sido acusadas de hurto agravado, secuestro simple y lesiones personales. Incluso la Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento privativas de la libertad, pero no fueron concedidas (Rutas del Conflicto, 2024).

Los cargos presentados en contra de los líderes son historias tergiversadas de sucesos en los que la minera es la que actúa ilegalmente. Así, desde el 2015 AngloGold Ashanti ha ejecutado exploraciones sin previa consulta, y en el 2022 y 2023 fueron denunciadas instalaciones de plataformas mineras sin contar con licencia ambiental y actuando de manera clandestina; la respuesta de la comunidad ha sido las movilizaciones sociales y plantones en nombre de la defensa del territorio.

Todo esto demuestra una cooptación de las autoridades por parte de la empresa, constituyendo un abuso del derecho penal para criminalizar la protesta, desplazar a los líderes de sus labores, y ejecutar sus exploraciones sin obstáculos ni consecuencias, lo que supone el desconocimiento de Tratados Internacionales que ha suscrito el Estado colombiano, en particular el Acuerdo de Escazú, que establece obligaciones claras en materia de acceso a la información, participación pública, justicia ambiental y protección de quienes defienden derechos ambientales (CJL, 2025).

Al respecto, la Defensoría del Pueblo rechazó la judicialización (2025), instando a que la justicia analice el caso dentro del marco del conflicto socioambiental que suponen los proyectos mineros en los territorios, valorando la trayectoria de defensa de quienes son imputados, la ausencia de violencia previa y los principios de proporcionalidad y protección de la protesta pacífica. Además, refirió que el derecho penal no debería ser utilizado como herramienta de represión



ante la protesta, que antes el Estado debe garantizar un entorno seguro para quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Este episodio conecta con un patrón regional: **defender el territorio expone a riesgos reales como asesinatos, desapariciones, intimidación y acoso judicial**, y alimenta dinámicas de violencia promovidas por intereses empresariales y económicos que, a menudo, se articulan con actores estatales o criminales. Sumado a esto, en Jericó, la estrategia empresarial de financiar obras y actividades locales ha fragmentado la comunidad, generando estigmatización y debilitado la cohesión social, pero también ha motivado solidaridad nacional e internacional con las y los defensores que, de manera pacífica y diversa, protegen la naturaleza.

En 2025 se registraron **9 homicidios y un transfeminicidio** de líderes y lideresas sociales en el departamento. Las víctimas fueron 3 docentes y sindicalistas afiliados a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), 4 líderes y lideresas comunitarios, un defensor de DDHH y de la minería ancestral, un líder juvenil y defensor de DDHH afro y una lideresa trans e indígena. Sus nombres son: Esteban Raigoza Castañeda, Dianys Valderrama Tuberquia y Yeimar Gamboa Yepes en la región de Urabá; Jorge Enrique Cano Jaramillo y Jaime Alonso Gallego Gómez en el Nordeste; Martín Acevedo Quiceno, en el Valle De Aburrá; José Francisco Romero en el Magdalena Medio, William Arnulfo Marín Amaya en el Bajo Cauca, Fernanda Domicó en el Occidente y María Mariela Monsalve en el Norte.

Aunque de la mayoría de casos (6 homicidios y el transfeminici-

dio) por ahora se desconocen los responsables, pueden considerarse de carácter político dado el rol de liderazgo de las víctimas y los contextos en los que ocurrieron los hechos. Esto apunta a una posible persecución política e intencionalidad de afectar los procesos organizativos, la defensa del territorio y el ejercicio de la libre determinación de las identidades. En cuanto a los asesinatos restantes, los de Jaime Gallego y William Marín fueron perpetrado por el Clan del Golfo y el de María Mariela Monsalve, fue cometido por el Ejército Nacional en Ituango. Estos hechos serán ampliados a continuación.

William Marín había sido citado por el Clan del Golfo a una falsa reunión y cuando se dirigían a ella fue asesinado. Por su parte, Jaime Gallego, fue desaparecido forzadamente cuando se dirigía a una reunión a la que había sido citado por los ilegales y posteriormente fue asesinado. Este mismo modus operandi se repite en varios casos documentados de amenazas y desplazamientos forzados contra otros líderes y lideresas originados por llamadas y citaciones de este tipo.

Únicamente para el caso de Jaime Gallego, gracias a la presión de las comunidades y organizaciones sociales **se ha capturado al principal responsable del crimen**: alias "Máximo", cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo. Este individuo, quien cuenta con dos sentencias condenatorias por porte ilegal de armas, actualmente se encuentra en prisión preventiva por este proceso. Ha sido imputado por los delitos agravados de secuestro, homicidio y hurto; sin embargo, aún no se ha considerado la discusión sobre la desaparición forzada ni el agravante por su condición de defensor de derechos humanos. El detenido no aceptó responsabilidad y decidió ir a juicio.

Es necesario anotar que las investigaciones frente a las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos generalmente se estancan en etapa indagatoria y, cuando hay avances significativos, se logra determinar únicamente a los autores materiales del hecho, pero no a los autores intelectuales. Esto supone impunidad puesto que mientras no se logre avanzar en estas investigaciones, se van a seguir presentando dichas agresiones y homicidios que pueden seguir siendo planeadas por las mismas personas o grupos.

Así pues, la decisión de Arboleda Garcés de no aceptar responsabilidad es una estrategia utilizada para perpetuar la impunidad y proteger a los autores intelectua-

les, lo cual genera afectaciones psicosociales en la familia y las organizaciones sociales.

En general, se observan patrones de victimización y concentración territorial, pues 8 de los 10 casos ocurrieron en zonas rurales de las 6 subregiones mencionadas, donde los liderazgos suelen tener incidencia directa en comunidades campesinas e indígenas (CJL, 2025). En varios de estos territorios se enfrentan emergencias humanitarias derivadas de la agudización del conflicto armado y de una respuesta institucional del Estado limitada o, en ocasiones, inexistente, lo que incrementa el riesgo para la labor de líderes y lideresas, derivando en estos homicidios y en el transfeminicidio registrado.

La creciente disputa territorial entre grupos armados ilegales y la expansión del paramilitarismo, en particular del Clan del Golfo, ha colocado en el centro del conflicto a líderes y lideresas, así como a organizaciones sociales, JAC y resguardos indígenas. Estas comunidades son sistemáticamente estigmatizadas y objeto de acusaciones de colaboración o afinidad con un bando u otro. Mientras que las disidencias señalan a los líderes y lideresas de colaborar con el Clan del Golfo, éste los acusa de estar vinculados con disidencias o con el ELN.

Dichas acusaciones, reforzadas en muchos casos por actuaciones o discursos estigmatizantes de actores o funcionarios del sector público y por la Fuerza Pública (CJL, 2025), han derivado en **amenazas, hostigamientos y, en varios casos, en retenciones ilegales** por parte de los grupos armados, como mecanismo de intimidación y control sobre los procesos comunitarios y de defensa de derechos.

El control territorial que ejerce el Clan del Golfo agrava esta situación, mediante tácticas de coerción como restricciones a la libre locomoción y la prohibición de relacionarse con instituciones del Estado como las Personerías o con agencias internacionales, bajo la amenaza de ser declarados “delatores” y convertidos en objetivos militares.

En medio de este clima de intimidación, se registraron hechos graves como la **desaparición forzada** del líder social **Dairo León**



Isaza, **de Puerto Berrío**, cuyo paradero sigue siendo desconocido. Isaza había denunciado actos de corrupción relacionados con la alcaldía de su municipio, lo que refuerza la hipótesis de represalias vinculadas a su labor de denuncia pública. Asimismo, se documentó un atentado contra la vida de un líder indígena en el municipio de Bello, beneficiario de medidas de protección de la UNP y hermano de un dirigente del partido MAIS.

Estas condiciones hacen que la documentación y el análisis de las vulneraciones sean en extremo difíciles: muchas comunidades viven bajo hipervigilancia constante, con prohibiciones de ciertas prendas, control sobre sus desplazamientos e inspección de celulares. Bajo el terror cotidiano, las comunidades no pueden expresarse con libertad ni denunciar plenamente lo que ocurre en sus territorios, esto, aunado con la ausencia de medidas contundentes por parte del Estado no solo perpetúa estas violencias, sino que lo hace responsable por acción u omisión en su deber de proteger a la población líder y garantizar sus derechos (CJL, 2025).

CRISIS HUMANITARIA Y AFECTACIONES A LA POBLACIÓN CIVIL

Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) corresponden específicamente a hechos dentro del conflicto armado interno, particularmente en escenarios de disputa territorial entre el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN, en los que también actúa el Ejército Nacional.

Lo anterior ha derivado en **combates y campos minados** que han dejado como escudo humano a la población civil protegida por el DIH, lo que ha causado mutilaciones y muertes. Además, han sido objeto de amenazas, confinamientos y restricción de la movilidad, limitaciones en el acceso a servicios básicos, daños a bienes privados y públicos, retenciones, desplazamientos forzados de decenas de familias y líderes y lideresas sociales, además de homicidios selectivos y masacres.

De manera particular, estos **hechos de violencia**, relacionados con infracciones al DIH, se han concentrado en tres subregiones del departamento: **Norte, Nordeste y Bajo Cauca**. Allí, la disputa territorial entre el Clan del Golfo, ELN, disidencias del Estado Mayor de Bloque y Frentes (EMBF), así



como la Fuerza Pública que hace presencia a través de la Séptima División del Ejército, el Comando Aéreo de Combate N°5, la Fuerza Naval Caribe y los batallones fluviales N°16 y 17; han generado diversas afectaciones humanitarias en contra de la población civil.

Estas tres subregiones constituyen la denominada "media luna", un corredor estratégico que conecta el Oriente con el Occidente del país, con salida al mar en el Urabá Antioqueño, subregión con control hegemónico del Clan del Golfo. Este sector no solo constituye un corredor estratégico, sino que existe presencia de accidentes naturales de gran importancia e interés para los grupos armados, como lo son la Serranía de San Lucas y el Nudo del Paramillo, con una gran biodiversidad natural, afluentes hídricos y explotación minera activa (oro, cobre y otros minerales). De manera que no solo representa un corredor estratégico para el tráfico, sino que además existen grandes rentas legales e ilegales importantes para la financiación de estos grupos.

De este modo, el Clan del Golfo ha buscado expandirse desde el Sur Bolívar hacia estas tres subregiones. Basta recordar que desde 2020, organizaciones sociales en el departamento advirtieron sobre el denominado "Plan Mil", una estrategia de este grupo armado ilegal para movilizar mil hombres hacia el municipio de Ituango para hacerse con su control. Lo anterior es debido a que allí se encuentra el Nudo del Paramillo, que permite la movilidad hacia el Urabá Antioqueño, pero también hacia el departamento de Córdoba.

Así, **la avanzada que ha realizado el Clan del Golfo** hacia territorios controlados por otros actores, principalmente ELN y el EMBF ha agudizadola conflictividad armada y social. En esta avanzada, las más afectadas han sido las comunidades quienes han tenido que

sufrir desplazamiento masivo e individual con falta de garantías por parte de las instituciones estatales.

Pese a las alertas tempranas realizadas por organizaciones sociales en el municipio de Anorí, Amalfi, Segovia y el núcleo veredal de Raudal, correspondiente al municipio de Valdivia, se ha consumado el **desplazamiento de más de 1.000 personas**. De manera particular entre enero y septiembre de 2025 se desplazaron alrededor de 800 personas en el municipio de Segovia, de igual forma en los municipios de Anorí y Amalfi se han desplazado alrededor de 100 familias y en el núcleo veredal de raudal se presentó el desplazamiento de 150 familias.

Estos desplazamientos se encuentran relacionados con hechos de confrontación en donde la población civil queda confinada y con prácticas de control social impuestas por los grupos armados. Lo anterior, poniendo de presente que el confinamiento de poblaciones no tiene como única causa la confrontación, sino también el control social por medio de restricciones a la movilidad impuestas por estos actores. Como ejemplo, en el municipio de **Anorí** se ha presentado el **confinamiento de veredas** en donde el Clan del Golfo impide a los pobladores movilizarse hacia el casco urbano y solamente puede movilizarse una persona por familia a realizar compra de víveres y medicamentos. Así mismo, en el núcleo veredal de Raudal, los confinamientos llevaron a que en el mes de septiembre las familias tomaran la decisión de desplazarse debido a la falta de víveres y medicamentos para subsistir.

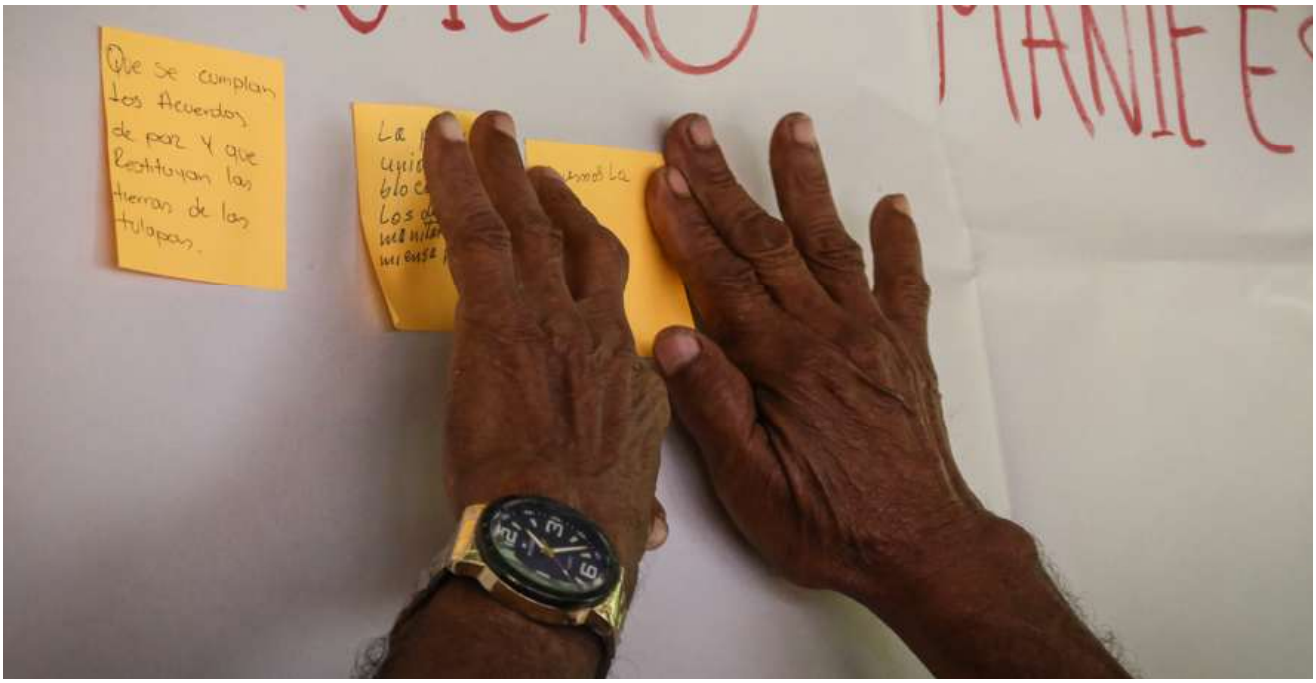
Lo anterior evidencia que el riesgo para las poblaciones no es solamente la confrontación entre distintos actores. En algunas subregiones, en donde existe control hegemónico por parte de un actor armado, se han impuesto otros tipos de control social como la **vigilancia de líderes sociales, restricción de ingreso a veredas** y corregimientos para población civil que no son pobladores, **minado de campos**, libertad de acción de las organizaciones sociales y otras restricciones a derechos fundamentales (CJL, 2025).

En la denominada “media luna” se agudizan los controles sociales pues se evidencia restricción y control de ingreso de alimentos y medicamentos, restricción en la vestimenta de pobladores y personas que se movilizan en distintas veredas y corregimientos, así como revisión y escaneo de teléfonos celulares a la población civil. En algunos casos, el Clan del Golfo ha amenazado a pobla-

dores impidiendo que se realicen las denuncias de estos hechos en las distintas instituciones estatales (personería, defensoría, fiscalía, etc.); en otros casos, la cooptación institucional que han realizado los grupos armados lleva a que la población civil no denuncie este tipo de afectaciones.

De igual manera, se han presentado afectaciones contra bienes civiles y personas protegidas por parte de los actores armados, ejemplo de ello es que en junio en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi hizo presencia el **Clan del Golfo** quienes se **tomaron la escuela veredal** generando una grave infracción al DIH. Así mismo, en julio en zona rural de Tarazá un proyectil impactó una iglesia, en medio de una confrontación en área poblada, e hirió a un joven con discapacidad cognitiva. El responsable de estos hechos fue el Ejército Nacional.

Por su parte, la **instalación de Minas Antipersona** por parte de distintos actores armados ha generado afectaciones a la población civil. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, 71 personas resultaron heridas o fallecidas por artefactos explosivos instalados en potreros, caminos de arriería y bordes de vías, así como en distintas zonas rurales del departamento. Esto no solo ha visto afectadas labores como la arriería y el mototaxismo, sino que además ha implicado que pobladores tengan una mayor restricción a la hora del cultivo y la disposición de animales para el pastoreo, lo que limita su subsistencia.



En este mismo sentido, es preocupante la **agudización del conflicto en la subregión del Suroeste**. Allí existe una avanzada por parte del Clan del Golfo que se disputa el territorio con bandas locales, como el 20 de Julio, o articuladas a las estructuras de La Oficina del Valle de Aburrá, como La Terraza. Durante el segundo semestre de 2025, la subregión ha vivido un aumento desmedido de la violencia que ha implicado el homicidio de personas, la imposición de restricciones a la movilidad y la confrontación directa entre Clan del Golfo y Ejército Nacional. Esto último ha sucedido de manera particular en los municipios de Támesis y Jericó, así como otras zonas de influencia del megaproyecto Quebradona de AngloGold Ashanti, a su vez que en municipios como Andes, Hispania y Ciudad Bolívar.

Lo anterior es preocupante debido a que, de manera particular, en el municipio de Jericó existe un conflicto socioambiental en donde campesinos y líderes del corregimiento de Palocabildo han resistido a la imposición de este megaproyecto por las afectaciones ambientales y sociales que ocasiona. Máxime, en un contexto de persecución judicial y cooptación institucional que busca que los campesinos mengüen sus acciones de organización y resistencia frente al megaproyecto.

Estos hechos y afectaciones han sido ampliamente denunciados por la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, organizaciones sociales e instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con el sistema de Monitoreo de Riesgos unificados de la JEP, las organizaciones sociales han presentado 444 acciones urgentes entre enero y septiembre de 2025, y 546 hechos de afectación. De igual manera, las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo dan cuenta de los riesgos y la situación humanitaria y de conflicto en distintas zonas del departamento.

Pese a estas alertas, **la respuesta institucional ha sido deficiente**, ya que no se han materializado acciones efectivas de prevención y protección que reduzcan la conflictividad y garanticen la permanencia en el territorio de las comunidades. Frente a estas acciones efectivas la respuesta desde el Ministerio de Defensa ha sido que no existen las garantías de seguridad para llevar a cabo acciones como el desminado humanitario y/o militar. De igual manera, la respuesta de la Gobernación de Antioquia ha sido que no cuenta con la capacidad ni recursos para atender la situación y culpó de esta falta de capacidad al Gobierno Nacional, pese a que

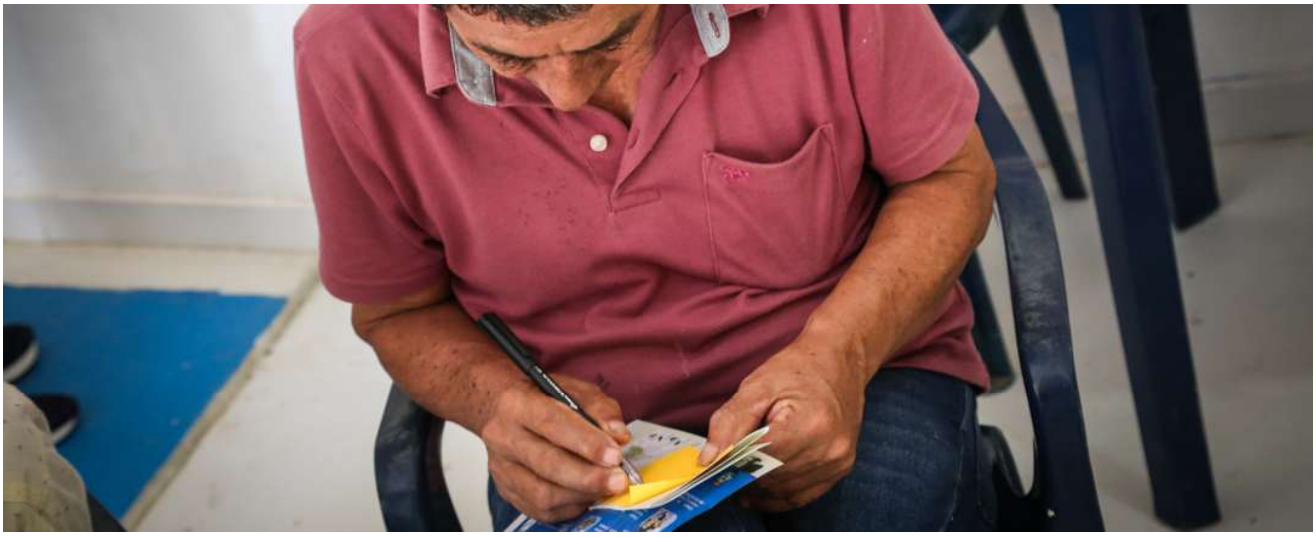
una de sus banderas ha sido la seguridad del departamento. Frente a esto es necesario afirmar que existe una omisión por parte de la Gobernación de Antioquia respecto a sus funciones como ente territorial en la atención a la situación de conflicto.

De igual manera, se hace necesario anotar que la presencia de la fuerza pública no es la única medida que se debe tomar frente a estas situaciones y afectaciones a la población civil. La no formulación de planes de retorno y/o reubicación que garantice a la población desplazada la permanencia en el territorio en condiciones de seguridad integral y dignidad, el no desminado humanitario, así como la falta de refugios humanitarios que posibiliten atender estas situaciones menoscaban los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Frente a estas dinámicas de violencia y conflicto y en respuesta a la crítica situación de derechos humanos y afectaciones humanitarias en el departamento, las organizaciones sociales han decidido emprender acciones humanitarias y continuar articulando para fortalecer el tejido social, con el objetivo de afrontar estos riesgos de manera colectiva.

Desde la Mesa Humanitaria de Paz de Antioquia se han realizado llamamientos humanitarios a los distintos actores armados, legales e ilegales, para que respeten a la población civil y no pongan en riesgo la vida, integridad y dignidad. También para que se respete el trabajo realizado por líderes y organizaciones sociales y su autonomía, así como para que cesen las prácticas de minado y desaparición forzada que genera graves afectaciones en la población y rompe el tejido social.

Las **organizaciones sociales** continúan desarrollando su **activismo y protegiendo el territorio**, los derechos de la naturaleza y los derechos humanos como un eje articulador de la vida y la dignidad. La resistencia frente a la imposición de megaproyectos, que generan graves impactos al territorio, la biodiversidad y las comunidades ha sido una de las banderas de las organizaciones sociales que resisten en medio de la violencia.



VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y AFECTACIONES A LIDERESAS Y MUJERES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Hablar de las violencias desde un enfoque de género no es un gesto accesorio sino una necesidad prioritaria para comprender la profundidad de los daños que enfrentan las mujeres cuando son victimizadas. Ser mujer y ejercer liderazgo social, político o comunitario en Colombia sigue siendo una tarea de alto riesgo pues las agresiones no solo buscan silenciar sus voces, sino también castigar la transgresión que supone ocupar espacios tradicionalmente negados. En estos casos, la violencia se multiplica: una misma mujer puede ser amenazada, desplazada, estigmatizada y violentada físicamente, dejando huellas que atraviesan su cuerpo, su entorno familiar y su proyecto de vida.

Entre enero y septiembre del 2025 se registraron **11 casos de vulneraciones a los DDHH contra mujeres**, con **22 agresiones documentadas** clasificadas como violencia política y político-social. La mayoría estuvieron motivadas por persecución política, seguidas de abusos de autoridad y un caso de intolerancia social, dirigidos especialmente contra lideresas, activistas y manifestantes. Estos datos evidencian la persistencia de un entorno adverso para las mujeres que defienden derechos.

Varios de estos hechos, ya mencionados en apartados anteriores, muestran cómo las violencias contra las mujeres se entrelazan con las dinámicas del conflicto. Se documentaron 6 amenazas, 1 allanamiento ilegal, 5 casos de violencia basada en género, 2 desplazamientos forzados, 2 homici-

dios y 1 hecho de estigmatización. A ello se suman 1 caso de lesiones personales, 1 de retención y tratos crueles, degradantes e inhumanos, y el transfeminicidio, que evidencia el extremo de la violencia por prejuicio.

En seis de los casos registrados se identificaron marcas de género. Dos corresponden a hechos de **violencia vicaria**, uno ya mencionado en el apartado de amenazas colectivas, donde una amenaza inicial hacia una lideresa se extendió hacia sus hijas para afectar su liderazgo. El otro hecho involucró a una lideresa y a su familia, quienes fueron atacadas de manera simultánea durante un operativo irregular. Otros dos casos presentan **actos intimidatorios y símbolos discriminatorios** que reflejan la persecución y judicialización desproporcionada hacia mujeres que participan en espacios de protesta y organización social de El Carmen de Viboral, donde elementos incautados como pañoletas y pendones con mensajes feministas, fueron tergiversados como pruebas de terrorismo. Finalmente, dos casos reflejan **agresiones con carga de género:** el transfeminicidio de la lideresa indígena trans Fernanda Domicó, y la agresión física a una lideresa por parte del Secretario General del Concejo de Sabaneta, hecho que condensa la violencia simbólica y física ejercida contra mujeres que asumen roles públicos y de liderazgo.

En un solo hecho, una lideresa sufrió junto con su familia simultáneamente amenazas, allanamiento ilegal, estigmatización, retención, tratos crueles, degradantes e inhumanos, violencia vicaria como marca de género, en la que un soldado amenazó la vida de su niño apuntándole con el fusil, desplazamiento forzado y revictimización institucional por parte del Ejército Nacional que se encontraba sin identificaciones visibles, el CTI, la Personería y la Fiscalía. Todo ocurrió durante un operativo irregular en su vivienda y, posteriormente, al intentar denunciar ante las autoridades competentes. Este caso ilustra hasta qué punto la violencia puede condensarse y reproducirse desde distintas esferas, dejando a las víctimas atrapadas entre el miedo, la impunidad y la falta de garantías reales de protección.

Un caso particularmente grave de agresión con carga de género ocurrió dentro del Concejo Municipal de Sabaneta, donde **una lideresa y veedora ciudadana fue violentada físicamente por el Secretario General**, quien la golpeó con el puño, la jaló del cabello y la arrojó al suelo frente a otros funcionarios. El hecho fue presenciado por varios concejales que

no intervinieron, respaldaron al agresor y minimizaron la violencia. Estos hechos evidencian una complicidad institucional que normaliza el abuso y desprotege a las mujeres que ejercen control ciudadano. Esta agresión física es también una forma de violencia política de género que busca desalentar la participación de las mujeres en los espacios de decisión pública y perpetúa relaciones de poder patriarcales en el ámbito local.

Como se mencionó anteriormente, persiste la persecución y criminalización a las reivindicaciones y los símbolos feministas como se observa en el caso de **dos jóvenes feministas de El Carmen de Viboral**, quienes fueron señaladas como presuntas responsables de daños al sistema público de transporte durante la movilización del 25 de noviembre en Medellín, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En un operativo completamente desproporcionado y mediático, el CTI allanó sus viviendas e incautó un celular, un pendón y pañoletas con logos y mensajes feministas que fueron presentado como pruebas, pese a ser símbolos propios de los movimientos de mujeres y sin capacidad de causar daños (CJL, 2025). Las jóvenes fueron imputadas por daño en bien ajeno agravado, perturbación al servicio de transporte y terrorismo. La Fiscalía, respaldada por el Ministerio Público, pidió medida de aseguramiento carcelaria; sin embargo, gracias a la defensa, se les concedió detención domiciliaria.

Estos casos evidencian el uso desmesurado y selectivo del poder punitivo del Estado. Cuando las mujeres se movilizan o ejercen su derecho a la protesta son perseguidas y criminalizadas, pero cuando acuden a las instituciones en busca de protección frente a Violencias Basadas en Género (VBG) son recibidas con incredulidad, desconfianza y revictimización. En estas situaciones, el peso de la ley cae con fuerza desmedida sobre quienes alzan la voz, pero se vuelve liviano o inexistente cuando se trata de investigar, sancionar o prevenir las violencias que ellas denuncian.

Esta paradoja institucional perpetúa la impunidad y envía un mensaje devastador: que defender los derechos de las mujeres puede costar la libertad, mientras que violentarlas rara vez tiene consecuencias. En un país donde las cifras de violencia contra las mujeres siguen siendo alarmantes y la impunidad es la norma, estos casos no son excepciones, sino expresiones de una misma estructura de desigualdad y de un

sistema de justicia que opera bajo lógicas patriarcales y punitivas hacia quienes se atreven a exigir sus derechos.

Conectando con lo anterior, las versiones de los hechos rastreados por medios de prensa y comunicaciones oficiales de la Fuerza Pública arrojan historias dispares, aunque igualmente graves sobre el asesinato de **Maria Mariela Monsalve** (El Espectador, 2025), lideresa social de 67 años reconocida por su compromiso con la defensa de la tierra y la construcción de paz. Mientras que la versión del Ejército señala que murió luego de quedar en medio del fuego cruzado con el Clan del Golfo en Ituango, la comunidad afirma que no hubo tal enfrentamiento, sino que, a pesar de la presencia del grupo ilegal, los únicos disparos fueron de los soldados quienes impactaron a casa de María Monsalve e impidieron que fuera auxiliada. Tras su muerte, intentaron vestirla de camuflado, registraron su vivienda, hurtaron dinero y joyas. Finalmente, el cuerpo fue arrebatado de los brazos de sus familiares y vecinos, quienes exigían poder despedirla con dignidad, para ser trasladado en helicóptero hacia Montería.

La Junta de Acción Comunal Las Amelias, por su parte, denunció este crimen como un hecho que no es aislado, refiriendo la persecución, estigmatización y violencia contra líderes campesinos, en especial contra quienes alzan su voz frente a las injusticias, exigen derechos y defienden los bienes comunes frente a intereses económicos y políticos.

Estos hechos revelan la persistencia de un patrón de riesgo hacia las lideresas rurales que habitan territorios altamente militarizados, donde la línea entre protección y agresión institucional se vuelve difusa. La manera en que ocurrió la muerte de María Mariela, en su propio hogar, en un contexto de presunta acción militar y sin garantías para su comunidad, evidencia un uso desproporcionado de la fuerza y una grave vulneración a la dignidad humana. El traslado del cuerpo por parte de los militares, realizado sin autorización ni acompañamiento de las autoridades judiciales competentes, constituye una posible obstrucción a la verdad y a la justicia, y una expresión de violencia institucional que priva a la comunidad del derecho al duelo y profundiza la desconfianza hacia las entidades encargadas de protegerla.

Otro caso que evidencia la gravedad del riesgo que enfrentan las mujeres que lideran procesos sociales es el de **Dianys Valderrama**, reconocida lideresa comunitaria de la vereda La Provincia, en el municipio de Carepa, en el

Urabá antioqueño. Según la información conocida, fue hallada sin vida dentro de su vivienda, con trece puñaladas en el cuerpo y sin presentar heridas de defensa. Aunque no existe claridad sobre los responsables ni sobre las circunstancias exactas del hecho, la forma en que ocurrió, en su propio hogar y con un nivel de violencia extremo, resulta alarmante y obliga a analizarlo desde el enfoque de violencias basadas en género (VBG), particularmente en contextos rurales donde las lideresas permanecen expuestas a múltiples formas de vulnerabilidad y desprotección.

Tanto el asesinato de María Mariela como el de Dianys Valderrama reflejan el mismo vacío estructural de protección hacia las mujeres lideresas en Antioquia. En ambos casos, la violencia se ensaña sobre mujeres con reconocimiento comunitario y arraigo territorial, enviando un mensaje de intimidación colectiva hacia quienes defienden derechos en medio del conflicto y la precariedad institucional. Su muerte interpela la responsabilidad del Estado en garantizar entornos seguros y en reconocer el impacto diferenciado que la violencia tiene sobre las mujeres que sostienen la vida en los territorios.

La mayoría de las **agresiones (16 de 26) se atribuyen a instituciones estatales como la Fiscalía, el Ejército y el CTI**; ocho permanecen sin identificar y dos fueron perpetradas por el Clan del Golfo. El hecho de que la mayoría de vulneraciones sean atribuidas a la institucionalidad pública expone una vez más que el Estado, llamado a proteger, se convierte en victimario. Esto rompe la confianza ciudadana y genera una sensación de desamparo estructural, especialmente entre las mujeres



que ejercen liderazgo o defienden los derechos humanos.

Esta distorsión del rol institucional se evidencia en mecanismos de seguridad y justicia que operan bajo sesgos políticos y de género, o en connivencia con actores armados y poderes locales. El abuso de poder perpetúa un ciclo de impunidad y deslegitimación estatal, sostenido por fallas estructurales en control, investigación y sanción.

El impacto de esto no es homogéneo pues recae con especial crudeza sobre las lideresas y las poblaciones diversas, para quienes la violencia institucional se multiplica. Las agresiones no comienzan únicamente en los hechos victimizantes, sino mucho antes, en las formas cotidianas de exclusión como la negación de un empleo digno, en las burlas, en el desconocimiento de su identidad o su nombre, en la necesidad constante de justificar su existencia ante una sociedad que aún les niega el derecho a ser. Es en ese entramado de discriminación estructural donde se inscribe el transfeminicidio y la persistente violencia contra las mujeres, expresiones extremas de un mismo continuum de violencias que el Estado no ha logrado o no ha querido detener.

El caso de **Fernanda Domicó, lideresa indígena trans**, se enmarca en un patrón estructural de violencia sistemática contra mujeres trans. El nivel de crueldad evidenciado en los cortes en rostro y cabeza refleja una profunda violencia por prejuicio que atenta contra los referentes a la identidad o expresiones de género como a su ejercicio de liderazgo. A estos hechos se suma, el caso de Sara Millerey González, lamentablemente emblemático por su brutalidad y por la multiplicidad de violencias que condensó: fue torturada y sus huesos quebrados, abandonada en el río sin posibilidad de defensa ni auxilio, y grabada no para denunciar, sino para convertir el horror en espectáculo (Corporación Caribe Afirmativo, 2025). Adicionalmente, después de su muerte fue revictimizada por los medios de comunicación y por la institucionalidad pública que no reconocieron su nombre ni su identidad. Este hecho resume con dolorosa claridad la magnitud de la atrocidad y la indiferencia que aún persiste frente a las vidas trans y la urgencia de una acción estatal real, integral y transformadora. En contextos de intolerancia social, este tipo de agresiones buscan “corregir” la transgresión de los mandatos de género y castigar la existencia

trans misma, procurando la aniquilación simbólica del derecho a la autodeterminación.

A nivel nacional, la situación de feminicidios, transfeminicidios y homicidios contra personas trans alcanza cifras alarmantes. Hasta agosto, el Observatorio Feminicidios Colombia reportó **564 feminicidios y 12 transfeminicidios**. Antioquia es el departamento con mayor número de casos (78). Sin embargo, rastrear los casos de transfeminicidios y homicidios contra personas trans sigue siendo casi imposible por la ausencia de un registro especializado o un sistema unificado de información. Esta falta de datos confiables refleja tanto limitaciones metodológicas e institucionales como la profunda invisibilización que rodea a las personas trans. Muchos crímenes no se denuncian, son tergiversados por los medios de comunicación o quedan archivados sin investigación. La imposibilidad de contar con cifras verificables constituye una forma de violencia estructural en sí misma, pues obstaculiza el reconocimiento de la magnitud problema, diluye responsabilidades institucionales y abona el terreno para la impunidad.

La sevicia transfóbica se convierte así en un mecanismo de control social que continúa incluso después del asesinato mediante



la revictimización institucional y mediática, donde se niega el nombre y la identidad de la víctima, debilitando el reconocimiento del móvil de género y dificultando su correcta tipificación como crimen de odio.

En Antioquia, las mujeres que defienden derechos lo hacen en medio del riesgo, la desprotección y el descrédito, enfrentando un Estado que incesantemente actúa con omisión o complicidad.La ausencia de verdad y justicia en estos casos perpetúa la impunidad y profundiza la desconfianza en las instituciones. Reconocer la dimensión de género en estas violencias no es un gesto simbólico, sino una exigencia ética, política y social para garantizar justicia y transformar las condiciones que las hacen posibles.

Las Violencias Basadas en Género documentadas revelan un entramado de poder que se sostie-

ne sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, en especial de aquellas que se atreven a liderar. No son hechos aislados, sino expresiones de un sistema que castiga la autonomía, la voz y la defensa del territorio. Los operativos militares que terminan en asesinatos de lideresas la criminalización de las mujeres que protestan o la sevicia ejercida contra las lideresas trans configura un continuum de violencias que atraviesa lo institucional, lo simbólico y lo físico.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el departamento de Antioquia se agudiza cada vez más la crisis humanitaria y de derechos humanos como resultado de dinámicas estructurales e institucionales persistentes. El conflicto armado mantiene su vigencia a través del control hegemónico ejercido por el paramilitarismo, que mantiene una disputa territorial abierta con otros actores armados como el ELN y las disidencias de las FARC-EP. Esta situación se agrava por la implementación insuficiente del Acuerdo de Paz de 2016, que ha dejado **vacíos críticos en regiones como el Norte, Nordeste y Bajo Cauca**, caracterizadas por un histórico abandono estatal y por la ausencia institucional capaz de suplir las necesidades básicas y garantizar derechos fundamentales.

Se constatan patrones sistemáticos de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos que tienen como objetivo desarticular los procesos organizativos y de resistencia comunitaria, en especial aquellos que se oponen a intereses económicos extractivos y megaproyectos.

Se evidencia un incumplimiento reiterado de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos. Lo anterior se manifiesta en una respuesta institucional deficiente y desarticulada para prevenir y proteger a las personas defensoras; en el uso arbitrario del sistema de justicia para criminalizar y perseguir su labor, en contraste con la impunidad predominante para los victimarios; y en políticas de protección, como las lideradas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), que carecen de rigor técnico y un enfoque diferencial, desescalando medidas sin una valoración integral del riesgo. Este incumplimiento se ve reforzado por una impunidad estructural, donde las investigaciones rara vez superan la identificación de autores materiales, sin avanzar hacia los determinadores intelectuales, muchos de los cua-



les se ubican en alianzas entre actores armados, sectores empresariales y agentes estatales.

La población civil en su conjunto sufre los efectos de infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario que se materializan en desplazamientos forzados masivos, confinamientos, minado de territorios, ataques a bienes civiles y homicidios. Frente a esta crisis humanitaria, la respuesta estatal ha sido notoriamente insuficiente perpetuando el ciclo de violencia.

En consecuencia, la situación en Antioquia no obedece a hechos aislados, sino a la convergencia de **factores estructurales que configuran un escenario de riesgo extremo** para la vida e integridad, en especial para quienes defienden los derechos humanos y el territorio. La declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional por parte de la Corte Constitucional en relación con la situación de los defensores y líderes sociales a nivel nacional refuerza la urgencia de una acción estatal coordinada, efectiva y con enfoque diferencial.

Resulta imperativo que el Estado colombiano adopte medidas transformadoras que **aborden las causas estructurales del conflicto**, desmantelen las economías ilegales y las alianzas entre actores armados y sectores económicos, y garanticen de manera real y efectiva el derecho a defender derechos. Esta estrategia debe incluir la asignación suficiente de recursos, la transformación del paradigma de protección, pasando de **medidas individuales a colectivas y comunitarias**, y el fortalecimiento de la justicia y la comunicación pública para contrarrestar la estigmatización y reconocer la legitimidad de la defensa de derechos como pilar esencial de la democracia. La labor de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, pese al riesgo extremo, se mantiene como un pilar fundamental de resistencia y construcción de paz en el territorio.

REFERENCIAS

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2022). *Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, Bajo Atrato y Darién* (Tomo I). Centro Nacional de Memoria Histórica. https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/11/URABA_TOMO-1_web.pdf

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (2022). *La guerra sucia*. Informe final. https://www.comisiondelaverdad.co/guerra-sucia

Comisión de la Verdad. (2022). *Caso «Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y las disputas con los denominados Caparros»: Reconfiguración actual del conflicto armado en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba*. https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-08/Caso%20AGC%20-%20Caparros.pdf

Corporación Jurídica Libertad. (2025). *Situación humanitaria y del nivel de riesgo a defensores/as de derechos humanos en Antioquia: Énfasis en personas defensoras ambientales y del territorio* [Boletín, primer semestre de 2025]. https://cjlibertad.org/wp-content/uploads/2025/09/Boletin_2025-Primer_Semestre_.pdf

Corte Constitucional de Colombia. (2023, 6 de diciembre). *Sentencia SU-546/23* (Expedientes T-8.018.193 y acumulados). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2023/su546-23.htm

Defensoría del Pueblo. (2025, 25 de junio). *Panorama de las violencias de género en Colombia: Enero a mayo de 2025*. https://www.defensoria.gov.co/-/panorama-de-las-violencias-de-genero-en-colombia-enero-a-mayo-de-2025

Defensoría del Pueblo. (2023, 19 de mayo). *Alerta Temprana 019-23: Alerta temprana nacional de riesgo sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/019-23.pdf

Corporación Caribe Afirmativo. (2025, 8 de abril). *El espejo de una sociedad enferma: A Sara Millerey González no solo la mataron*. https://www.caribeafirmativo.lgbt/el-espejo-de-una-sociedad-enferma-a-sara-millerey-gonzalez-no-solo-la-mataron/

Defensoría del Pueblo. (2025, 26 de mayo). *La Defensoría del Pueblo rechaza la judicialización de líderes campesinos y defensores del ambiente en Jericó*. https://www.defensoria.gov.co/-/rechaza-la-lideres-campesinos-y-defensores-del-ambiente-jerico

El Espectador. (2025, 6 de septiembre). *Las versiones sobre la muerte de la líder María Monsalve en Ituango (Antioquia)*. https://www.elespectador.com/judicial/las-versiones-sobre-la-muerte-de-la-lider-maria-monsalve-en-ituango-antioquia/

Fundación Forjando Futuros. (2025, 23 de abril). *Alerta por amenazas de muerte contra líderes y familias reclamantes de tierra en Urabá*. https://forjandofuturos.org/alerta-por-amenazas-de-muerte-contra-lideres-y-familias-reclamantes-de-tierra-en-uraba/

Ortuño López, G. (2025, 30 de julio). *Defensa del territorio a juicio: La lucha de 11 campesinos en Colombia contra la minería escala el conflicto en Jericó. Mongabay Latam*. https://es.mongabay.com/2025/07/jerico-mineria-campesinos-colombia/

Rutas del Conflicto. (2020). *Parqueadero Padilla: La desaprovechada oportunidad de desarticular a las Accu. En Licencia para el despojo en el Urabá-Darién*. https://rutasdelconflicto.com/especiales/licencia-despojo-uraba/padilla.html

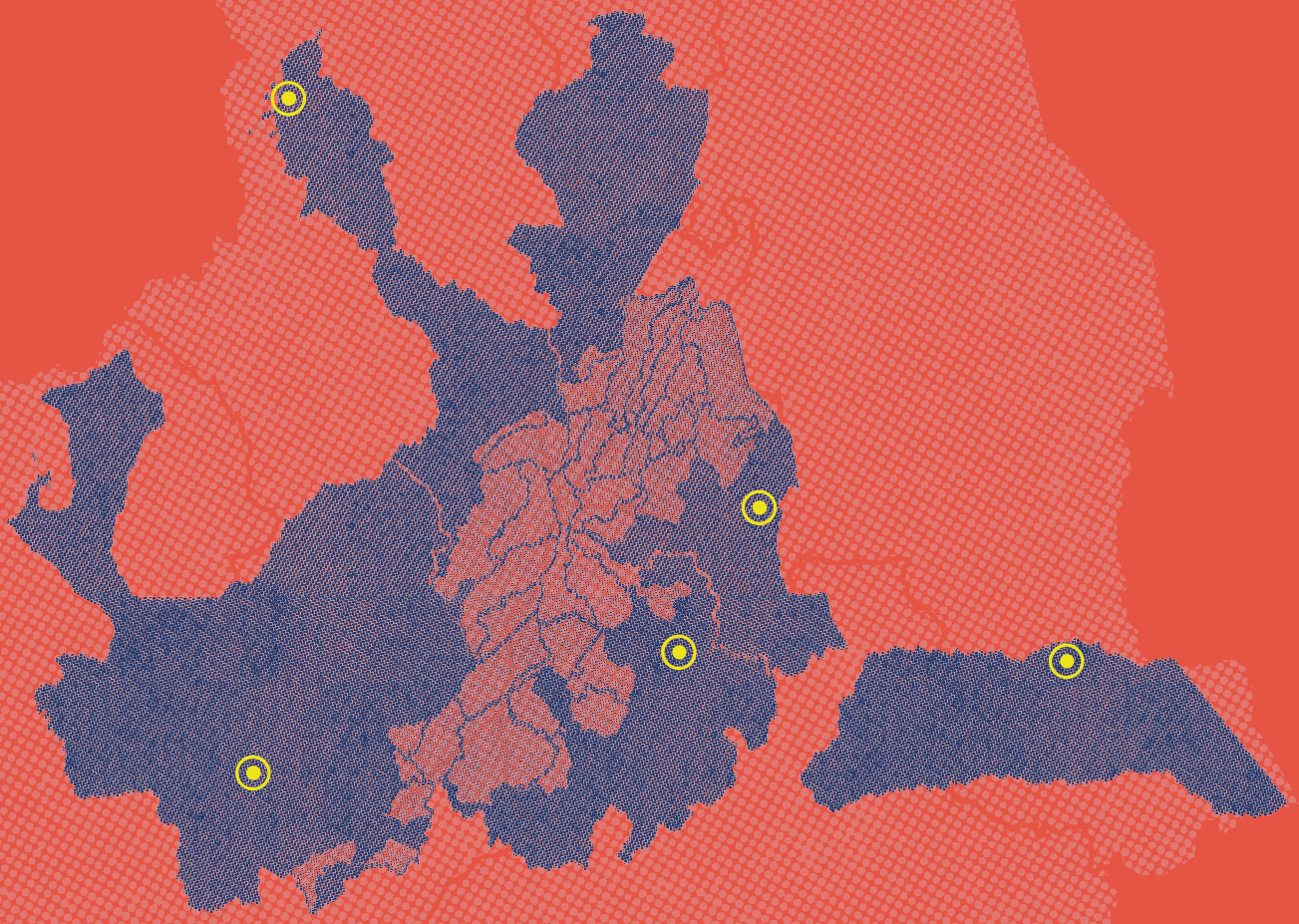
Rutas del Conflicto. (2024). *La minería divide al suroriente antioqueño*. https://rutasdelconflicto.com/notas/la-mineria-divide-suroriente-antioqueno

Rutas del Conflicto. (2025, 27 de mayo). *Empresa que compró tierras a palmero vinculado con paramilitares sigue intimidando a víctimas*. https://rutasdelconflicto.com/notas/empresa-compro-tierras-palmero-vinculado-paramilitares-sigue-intimidando-victimas

Salinas Plaza, D. (2025). *El laberinto del parqueadero Padilla: La investigación judicial silenciada del paramilitarismo en Antioquia*. Editorial Planeta.

NORORIENTE

ARAUCA-MAGDALENA MEDIO-SANTANDER
CATATUMBO-NORTE DE SANTANDER



NORORIENTE

Entre el asedio y la barbarie: el nororiente de Colombia bajo la lógica de la guerra, los intereses económicos y el control territorial (una mirada desde el conflicto armado)

La región del nororiente de Colombia, que comprende principalmente los territorios de **Arauca, el Catatumbo en Norte de Santander y el sur de Bolívar en el Magdalena Medio**, se consolida actualmente como un epicentro crítico de la crisis humanitaria en el país. Esta vasta zona geográfica, caracterizada por su **valor estratégico fronterizo y su inmensa riqueza en recursos naturales**, ha sido históricamente el escenario de una disputa hegemónica entre diversos grupos armados, estatales y no estatales, que buscan el control social, territorial y de las economías ilegales tales como el narcotráfico y la minería aurífera, así como la captura de rentas derivadas de la industria petrolera. La situación en el transcurso de 2024 y 2025 revela una **degradación profunda del conflicto armado**, donde el respeto por los Derechos Humanos (DDHH) y la observancia del Derecho Internacional Humanitario (DIH) parecen haber sido relegados por una lógica de guerra frontal que afecta de manera sistemática a la población civil.

En el departamento de **Arauca**, la ruptura de los acuerdos de no agresión entre el Frente de Guerra Oriental del ELN y las facciones disidentes de las FARC (Frentes 10 y 28 del Estado Mayor Central) a principios de 2022 marcó el inicio de una escalada violenta que no ha cesado. El territorio se ha convertido en un corredor de movilidad para el tráfico de armas y drogas, donde la **industria del petróleo** actúa simultáneamente como motor económico y objetivo militar, generando un entorno de militarización que, lejos de proteger a las comunidades, a menudo las deja atrapadas en el fuego cruzado.

Las cifras de **homicidios selectivos, secuestros y desapariciones forzadas** en municipios como Tame, Saravena y Arauquita son alarmantes, sumadas a mecanismos de control social coercitivo que imponen horarios de movilidad y restricciones a la vida cotidiana. La situación de los **pueblos indígenas transfronterizos**, como los Sikuani y los Hitnü, genera especial preocupación pues enfrentan un riesgo inminente de extinción física y cultural debido al confinamiento y la contamina-

ción de sus tierras con minas antipersonal (MAP) y otros artefactos explosivos.

Paralelamente, la subregión del **Catatumbo** atraviesa una de sus crisis más graves de las últimas décadas. A partir de enero de 2025, una ofensiva armada del ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC desencadenó un **desplazamiento masivo de más de 64,000 personas**, convirtiendo a ciudades como Cúcuta y Ocaña en centros de recepción que han desbordado su capacidad institucional. En este contexto, el uso de **tecnologías bélicas no convencionales, como drones acondicionados con explosivos**, ha introducido una nueva dimensión de terror para los habitantes rurales. La población migrante venezolana, que transita por esta zona fronteriza en condiciones de extrema vulnerabilidad, se ve particularmente expuesta a redes de trata de personas, explotación sexual y reclutamiento forzado que la hace enfrentar en muchos casos un retorno forzado hacia Venezuela ante la falta de garantías de seguridad en suelo colombiano. La declaratoria de **Estado de Conmoción Interior** por parte del Gobierno Nacional en 2025 fue un intento de contener esta emergencia, pero los desafíos estructurales relacionados con la pobreza multidimensional (superior al 40% en la zona) y la dependencia de la economía cocalera persisten como factores que alimentan el ciclo de violencia.

En el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, la dinámica del conflicto gira en torno a la Serranía de San Lucas, un territorio de inmenso potencial minero que se ha convertido en un "botín de guerra". La expansión del **Clan del Golfo** ha generado enfrentamientos directos con el ELN y las disidencias de las FARC por el control de la explotación aurífera y los cultivos de coca. Aquí, la **minería ilegal** no solo financia la guerra, sino que produce daños ambientales irreversibles, contaminando fuentes hídricas con mercurio y cianuro, lo que compromete la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades ribereñas. La población civil en municipios como Santa Rosa del Sur, San Pablo y Montecristo sufre desplazamientos masivos y la imposición de "ofertas de seguridad violenta" mediante extorsiones generalizadas que afectan desde pequeños comerciantes hasta grandes contratistas estatales.

Un rasgo transversal a toda la región nororiental es la **persecución sistemática contra liderazgos sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz**. Estos actores, fundamentales para el tejido

social, son blanco de estigmatización y ataques por parte de los grupos armados que los acusan de colaborar con el bando contrario, fracturando así los procesos organizativos comunitarios. La **debilidad institucional y la ausencia de una oferta estatal integral** en educación, salud e infraestructura vial han permitido que los grupos insurgentes asuman funciones de "justicia alternativa" y regulación social, cooptando juntas de acción comunal y legitimando su presencia ante la falta de un Estado que garantice derechos básicos.

La situación de crisis humanitaria que atraviesa el Nororiente de Colombia no puede ser comprendida únicamente como un subproducto de la confrontación entre grupos armados ilegales, sino que debe analizarse bajo la óptica de la responsabilidad ineludible del Estado, quien es el garante último de la dignidad humana. Bajo la premisa jurídica y política de que el Estado es el único sujeto capaz de violar los Derechos Humanos —ya que sobre él recae la obligación de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo de los mismos—, la realidad de estas regiones revela una vulneración sistemática por omisión, negligencia y falta de garantías. Mientras que los grupos armados no estatales son responsables de crímenes e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), es la ausencia o presencia diferenciada de la oferta civil y social del Estado lo que posibilita y exacerba estos escenarios de riesgo. Esta desprotección estatal se manifiesta en una marcada brecha entre el orden constitucional de 1991 y la naturaleza del ordenamiento social y político en los territorios, donde la inoperancia del Estado de Derecho permite que el ejercicio de los derechos fundamentales sea, en la práctica, una quimera para sus habitantes.

Soberanía en vilo y deuda histórica: la responsabilidad del Estado en la violación sistemática de derechos humanos en el Nororiente

La negligencia estatal en el nororiente colombiano se evidencia en una "presencia diferenciada" donde la institución suele aparecer mayoritariamente a través del componente militar, descuidando la infraestructura de servicios sociales, justicia y comunicación. Este abandono histórico ha forzado a las comunidades a autogestionar su propio desarrollo a través de las Juntas de Acción Comunal (JAC), que en muchos corregimientos rurales asumen tareas de educación, salud y resolución de conflictos ante la nula respuesta



institucional. La fragilidad en la soberanía territorial no es solo una falta de control militar, sino una incapacidad fiscal y administrativa de los entes territoriales, los cuales presentan altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas y pobreza multidimensional muy superiores a la media nacional.

Esta situación genera un círculo vicioso donde el Estado, al no proveer condiciones para una vida digna y empleo formal, entrega a las poblaciones más vulnerables, especialmente a los jóvenes, al reclutamiento y a las economías ilegales de la coca y el oro. En este sentido, la pobreza estructural no es un accidente, sino una consecuencia de políticas públicas que han fallado sistemáticamente en transformar las raíces de la violencia.

Un aspecto crítico de la responsabilidad estatal es la cooptación y captura de sus estructuras locales por parte de élites políticas y grupos ilegales, lo que desdibuja la línea entre lo público y lo criminal. Existen denuncias recurrentes de comunidades sobre alianzas, acuerdos o complicidades de integrantes de la fuerza pública y autoridades civiles con grupos armados como el Clan del Golfo, lo que profundiza la desconfianza ciudadana y anula cualquier garantía de protección real. Esta "reconfiguración cooptada del Estado" permite que grupos criminales suplanten funciones estatales, regulando la vida cotidiana e imponiendo una "justicia alternativa" ante la ineficiencia de los operadores jurídicos oficiales. El Estado viola los derechos humanos cuando sus propios agentes participan en redes de corrupción o permiten que el control territo-

rial sea ejercido por actores violentos que disciplinan a la población con total impunidad.

Asimismo, la respuesta estatal ante las crisis humanitarias suele ser reactiva y carecer de una perspectiva de prevención temprana, limitándose a atender riesgos ya consumados. El uso del estado de conmoción interior en regiones como el Catatumbo, si bien buscó contener la emergencia, fue señalado por la Corte Constitucional, dado que este tipo de regímenes de excepción no pueden ser la respuesta a problemas estructurales e históricos que el Estado ha dejado de resolver por décadas.

La falta de concreción de compromisos sociales, como el Pacto Catatumbo o los programas de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), demuestra una carencia de voluntad política para implementar reformas territoriales integrales que cambien las dinámicas del conflicto. Frente a este último, a inicios de 2025 el gobierno lanzó el programa "Renacemos" para la transformación productiva y ecológica, pero a la fecha no se conoce su impacto. En muchas ocasiones, el Estado ha priorizado la protección de intereses de industrias extractivas —como la petrolera en Arauca o la minera en el sur de Bolívar— mediante la militarización, mientras deja a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en una situación de riesgo extremo y estigmatización institucional.

El Nororiente ejemplifica el fracaso de un modelo de gestión pública que ha excluido a las administraciones locales de la construcción de una paz real y sostenible. La ausencia de garantías para la participación política y el ejercicio de la labor comunitaria, sumada a la debilidad de los sistemas de salud y educación en las zonas rurales, constituye una violación directa al carácter progresivo de los derechos sociales.

El Estado, al no rescatar la confianza ciudadana ni cumplir con las recomendaciones de organismos como la Defensoría del Pueblo, perpetúa un escenario de "soberanía en vilo" donde los derechos humanos son sacrificados ante la lógica de la guerra y la explotación de recursos.

Por tanto, este informe se centra en documentar no solo los ataques de los grupos armados que configuran infracciones al DIH, sino también el rol sistemático de un Estado que, por acción u omisión ha violentado los derechos humanos y ha permitido que el nororiente del país se mantenga como un territorio de excepción donde la ley del más fuerte prevalece sobre el orden constitucional.

1. Arauca

Durante el 2025 en Arauca se vivió un conflicto extendido, cuyo recrudecimiento se sitúa desde finales del 2021 y comienzos de 2022, cuando se desató una confrontación a través de acciones directas entre el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (DGO-ELN), también conocido como el Frente de Guerra Domingo Laín Sáenz; y las estructuras de los que se han denominado grupos posacuerdo o facciones disidentes de las antiguas FARC: Frente 10 Martín Villa y Frente 28 José María Córdoba del Estado Mayor Central.

Sobre este conflicto la Defensoría del Pueblo (2021a, 2023a) en las Alertas Tempranas 023-21 y 011-23 y sus informes de seguimiento, afirma que la situación de violencia es consecuencia de la ruptura de acuerdos de coexistencia y no agresión, motivada por diferencias ideológicas, intereses económicos (economías legales e ilegales) y enfrentamientos en territorio venezolano. Allí, las facciones disidentes llevaron a cabo operaciones en contra de la Segunda Marquetalia que provocaron un cruce con el Frente de Guerra Oriental del ELN.

En 2025 se mantuvo la disputa violenta entre actores insurgentes por el control territorial, económico y social de todo el departamento. En el mismo sentido de lo ya dicho por la Defensoría del Pueblo en las Alertas Tempranas mencionadas, la red Global Protection Cluster en su análisis de riesgos de protección sobre Arauca en 2025, afirmó: “El conflicto armado surge de la disputa por el control territorial, político y económico, incluyendo las rutas de movilidad, con fuerte presencia de las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las acciones bélicas han afectado gravemente a la población civil, en especial a los líderes y defensores de derechos humanos” (Global Protection Cluster, 2025, p.2)

En el departamento es evidente que las acciones violentas, tanto entre los actores en conflicto, como contra la población civil, no cesan. Según lo registrado, entre enero y agosto se presentaron 161 hechos violentos[1] . La tabla 1 (página 9) muestra su recurrencia mes a mes.

1 Sobre el número de hechos se debe dejar la salvedad en un posible subregistro por la misma cantidad e intensidad de hechos de violencia.

Tabla 1. Número de hechos de violencia mensuales entre enero y agosto

Mes	Hechos
Enero	19
Febrero	19
Marzo	29
Abril	18
Mayo	16
Junio	18
Julio	18
Agosto	24

Fuente: elaboración propia[2]

No se refleja una escalada extraordinaria entre los meses, más bien se demuestra una continuación del escalamiento e intensidad de la violencia a causa de la confrontación cuyo resultado es un promedio de 20 hechos de violencia al mes. Es decir, el departamento de Arauca, como en los tres años anteriores, continúa atravesando por una grave situación humanitaria. Ocurre algo similar cuando se analiza la distribución territorial de los hechos violentos.

Tabla 2. Número de hechos de violencia en municipios de Arauca

Municipio	Hechos
Arauca	18
Arauquita	27
Cravo Norte	2
Fortul	21
Puerto Rondón	8
Saravena	33
Tame	52

2 Todas las tablas de este documento son elaboración del consultor basado en entrevistas y consulta de archivos citados en el mismo.

En los siete municipios de Arauca se están presentando hechos de confrontación o victimizantes de la población civil, es decir, la disputa violenta se extiende a la totalidad del departamento, así como la presencia tanto del FDO-ELN como de las estructuras disidentes Frentes 10 y 28. Esta situación se constata según los tipos de hechos. Como se muestra a continuación, el número de acciones bélicas o acciones legítimas de guerra de las que se pudo obtener conocimiento fueron 51[3] , distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 3. Número de acciones legítimas de guerra registradas entre enero y agosto en Arauca

Modalidad	Casos
Combate	17
Ataque Objetivo militar	25
Bloqueo de vías	3
Incursión	5
Prisionero de guerra Estatal	1

Fuente: elaboración propia

Las acciones de combate se presentaron: en un 47% entre Fuerzas Militares (Ejército y Policía) y FDO-ELN; en un 35% entre FDO-ELN y los Frentes 10 y 28 de las disidencias y el 18% restante entre Fuerzas Militares y actores que no fue posible identificar. Estos combates produjeron la muerte de 18 combatientes. Del mismo modo, de los 25 ataques a objetivos militares (donde no hubo combate), 17 de ellos fueron llevados a cabo por el FDO-ELN contra Fuerzas Militares (10 a Ejército y 7 a Policía) y ocho ataques en los que no fue posible establecer identidad del atacante (2 a Ejército y 6 a Policía). Estos ataques, todos contra fuerzas militares, produjeron seis muertos (6 miembros del Ejército y uno de Policía). Los actores ilegales usan constantemente francotiradores para atacar batallones y estaciones de Policía y patrullas en sectores urbanos.

3 Según los datos registrados, en Arauca se presentaron acciones bélicas durante todos los meses y en los siete municipios, arrojando como promedio 6.3 acciones bélicas al mes.

Por otra parte, se registraron 38 Infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH): 20 se registran por el uso de medios y métodos ilícitos de guerra y 18 casos registrados por trato afrentoso contra el ser humano, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 4. Infracciones al DIH en Arauca entre enero y agosto

Objetivos, medios y métodos ilícitos	20	Ataque a bienes civiles	14
		Uso armas prohibidas	1
		Ataque a estructura vial	1
		Ataque medio ambiente	1
		Ataque indiscriminado	3
Trato afrentosos al ser humano	18	Amenaza colectiva	1
		Amenaza individual a un hombre	2
		Amenaza individual a una mujer	1
		Colectivo escudo	2
		Confinamiento colectivo	2
		Homicidio persona protegida	4
		Lesión uso medios ilícitos	2
		Lesión en persona protegida	4

Fuente: elaboración propia

Los ataques a bienes civiles fueron sistemáticamente direccionados contra la estructura petrolera. El oleoducto Caño Limón-Coveñas recibió ocho ataques. Esta línea de transporte de crudo recorre la zona fronteriza con Venezuela de este a oeste, siguiendo paralelamente el cauce del río Arauca desde el yacimiento de Caño Limón

y atravesando municipios como Arauquita y Saravena.

Por otra parte, el oleoducto el Bicentenario fue atacado seis veces. Éste inicia su recorrido en la estación Araguaney, ubicada en Yopal (Casanare), y pasa por los municipios de Tame, Fortul y Saravena, donde finalmente se interconecta con el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en la estación Banadías. El FDO-ELN sería el principal perpetrador de estos ataques.

Como antecede históricamente, el interés de este grupo armado se fundamenta en una estrategia combinada. Por una lado, busca retaliación frente a las políticas extractivas y mineroenergéticas en beneficio de las empresas petroleras transnacionales y en detrimento de las poblaciones locales. Por otro lado, busca financiación y control económico, dado que los ataques funcionan como un mecanismo de presión para forzar a contratistas y empresas petroleras a entrar en negociaciones y que paguen "tributos" o extorsiones. Estos ataques a la infraestructura son también una forma de legitimación social o propaganda para posicionarse como un actor influyente en políticas públicas.

Incluso en la vía que comunica a Tame con Saravena se instalaron explosivos (cuya operación no distingue entre combatientes y población civil) presuntamente por parte del ELN. Estos ataques tienen implicaciones en la situación ambiental y de salud pública del departamento, pues provocan daños irreversibles en los ecosistemas acuáticos (caños, ríos y esteros), destruyen la biodiversidad y contaminan las fuentes hídricas esenciales.

Lo más grave de estos enfrentamientos y ataques es que afectan directamente a la población civil. Según la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada (DAIACCO) de la Fiscalía General de la Nación (respuesta a derecho de petición, 10 de octubre de 2025), en Arauca se denunciaron 94 casos de desplazamiento forzado cuyas víctimas corresponden a 226 personas.

Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (2025) denunció en febrero el confinamiento en el Distrito Purare, el cual está compuesto por 11 veredas. En Tame, un municipio de 1.344 personas y 373 familias aproximadamente, los grupos armados impusieron horarios y restricciones en el uso de cascos y segundos pasajeros para los motociclistas, cuestión también reportada en Fortul. Sumado a ello, se denunció el uso de bienes de carácter civil como escudo. Uno

de ellos llevado a cabo presuntamente por el ELN al refugiarse en un jardín infantil en Fortul y otro en el que el Ejército estaría ingresando una tanqueta al hospital del Sarare, en Saravena.

Es reiterado el uso de armas prohibidas, en específico, el de Minas Antipersonal (MAP), campos minados, y civiles que quedan en medio de combates. Particularmente, en la vereda Puerto San Salvador de Tame se accionó una MAP que dejó como resultado la muerte de un hombre y heridas graves a una menor de edad. En la vereda Las Nubes de Puerto Jordán, Arauquita, se detonó una de estas al paso de un hombre trabajador rural de nacionalidad venezolana. Por su parte, tres civiles resultaron heridos en combates entre el Ejército y el ELN, dos de ellos menores de edad.

Otro patrón en la dinámica violenta han sido las amenazas directas hacia población civil, tanto colectivas como individuales, fueron cometidas presuntamente por los Frentes 10 y 28 de las disidencias de las FARC, en las que de manera indiscriminada declaran "la guerra" a las supuestas facciones civiles del ELN que operan en el departamento e instan a abandonar el territorio a quienes tengan vínculos con esta guerrilla. De igual forma, a través de llamadas y graffitis, amenazaron a una lideresa comunal y a un abogado en Arauca y Saravena respectivamente, creando un ambiente de terror generalizado a toda la población.

Para las Fuerzas Militares, el ELN representa la amenaza más consolidada y estructural, dado que es la organización con mayor arraigo histórico y control territorial sobre el estratégico piedemonte y las principales vías araucanas, con gran capacidad para ejecutar ataques complejos contra infraestructura e instalaciones civiles (petroleras) y militares. En ese sentido, enfrentarlo requiere un enorme despliegue de recursos en un terreno adverso, mientras que las disidencias pueden ser percibidas tácitamente por los militares como una fuerza de desgaste útil contra el ELN, adoptando la estrategia de "esperar pacientemente ¿cuál grupo insurgente sobrevive?, para enfrentarlo, ya debilitado en el futuro, y vencerlo fácilmente'" (Fundación Paz y Reconciliación, 2024, p.12).

Por el lado de las disidencias, esta misma lógica opera en espejo. Su supervivencia depende de disputar el control territorial al FDO-ELN, que es el que les impide el acceso a corredores, rentas y población. Su estrategia es evitar en lo posible la confrontación con el Estado para concentrar todos sus recursos en la guerra contra



su rival insurgente, que es una lucha existencial por el control de los territorios que garantizan su financiación y movilidad.

La situación se complejiza por señalamientos de la población de connivencia entre Ejército y disidencias. Así, se afirma que hay un escenario de guerra triangular atípica donde dos de los vértices convergen tácticamente en tratar de contener o neutralizar a un tercero. En este caso el FDO-ELN aparece en una confrontación abierta con Fuerzas Militares y contra las facciones disidentes. Por un lado, las características de los hechos registrados sugieren una actitud pasiva y posteriormente reactiva por parte de las Fuerzas Militares ante los ataques del ELN, por otro, las acciones de las facciones disidentes se centran en algunos combates contra el ELN y hechos contra población civil, sin mayor roce con la Fuerzas Militares.

El 8 de julio, en Tame, en acción de la Fiscalía con apoyo de equipos especializados de inteligencia, se presentó la captura de un capitán activo del Ejército Nacional en el departamento de Arauca, presuntamente por colaborar con el Frente 10 Martín Villa. El sujeto habría suministrado armas, municiones e información reservada sobre operaciones militares al grupo ilegal, facilitando su expansión territorial en Arauca, Boyacá y Casanare. Esta filtración de inteligencia habría permitido a la estructura armada anticipar movimientos de tropas y planear ataques contra la población civil[4].

En la región también hubo 10 casos de secuestro que no se enmarcan en acciones de guerra por

4 A esto se añade la publicación por parte de la Unidad Investigativa de Caracol Radio (2025) donde señalaba un nuevo escándalo de corrupción dentro del Ejército Nacional en el departamento de Arauca investigado por la Fiscalía. De acuerdo con la publicación, desde octubre de 2024, el cabecilla del Frente 28, "Antonio Medina", había solicitado refuerzos a "Dionosio Rayo", segundo al mando del Bloque Occidental 'Jacobo Arenas' en el Cauca, para fortalecer su estructura en Arauca. Como al menos cinco milicianos fueron transportados hasta la zona rural de Tame, Arauca. La logística del traslado, que incluyó ocultamiento de arsenal fue coordinada por redes de apoyo a las disidencias. Según la declaración de uno de los milicianos, los conductores que los transportaron eran soldados activos del Ejército Nacional.

su finalidad económica o extorsiva.

De estos, 7 fueron responsabilidad del FDO-ELN e involucraron a 18 personas (15 hombres y 3 mujeres). La finalidad de estas retenciones no fue expuesta, pero involucró perfiles económicos como ganaderos, comerciantes y contratistas. Todas las personas fueron entregadas a comisiones humanitarias y liberadas por este grupo.

En otras circunstancias, otros dos hombres fueron secuestrados por actores desconocidos, con la finalidad de exigir dinero. Uno de estos hombres fue rescatado por la Policía y el otro hombre fue liberado. También se presentó un secuestro por parte de una estructura disidente en el que la persona fue rescatada por la Policía.

En cuanto a desaparición forzada, se obtuvo información de 14 hechos (12 hombres y 2 mujeres) en los que el rasgo característico es el rapto por parte de hombres armados cuya identidad es desconocida. En algunos casos los encapuchados retienen a sus víctimas en vías públicas o las sacan de sus casas con rumbo desconocido. En dos de los casos, los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida y con signos de violencia. El primero al borde de la vía que comunica a La Esmeralda (centro poblado de Arauquita) con Fortul y la segunda en una vía de la vereda El Triunfo de Arauquita.

No todos los casos son atribuibles a los grupos armados mencionados, o por lo menos, en muchos casos los grupos no asumen su responsabilidad. En ese sentido, se tuvo información acerca de 26 muertes violentas con rasgos similares. En primer lugar, en las vías veredales o intermunicipales fueron encontrados los cuerpos sin vida de 12 hombres y una mujer asesinados con arma de fuego. Las motivaciones de estos asesinatos no se conocen. En segundo lugar, se registraron nueve casos de homicidios bajo modalidad de sicariato, que podrían estar relacionados con criminalidad organizada en el departamento, especialmente en los municipios de Tame, Saravena y Arauca capital, donde se tiene indicios de la presencia del grupo trasnacional Tren de Aragua y otro denominado “Tren del Llano”.

Por último, hubo cinco víctimas asesinadas en zona rural, uno de ellos, al parecer, al tratar de huir de un retén ilegal. Otro habría sido alcanzado en ruta veredal por sujetos que lo atacaron con arma de fuego. Se desconocen las situaciones en las que fueron asesinadas las otras tres personas, con arma de fuego.

El delicado panorama de se-

guridad en Arauca afectó igualmente a los firmantes de paz en dos hechos específicos. El primero fue la retención por parte del FDO-ELN del firmante de paz Ricardo Ramos Rivera junto con otras cinco personas, posteriormente entregadas a una comisión humanitaria. El segundo, fue el asesinato en la vereda Galaxias de Arauquita, de Danilo Benavides, firmante del Acuerdo de Paz quien había realizado su proceso de reincorporación en el ETCR Martín Villa ubicado en la vereda Filipinas. El FDO-ELN negó tener alguna responsabilidad en el asesinato y lo atribuyó a disidencias FARC, pues señalaron que tenían conocimiento de que la víctima había sido amenazada al negarse a colaborar con ellos.

En cuanto a las personas defensoras de derechos humanos, se recopilaron ocho hechos victimizantes:

Tabla 5. Agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Arauca entre enero y agosto

Agresión	Casos	Perfil de la víctima	Municipio
Asesinatos	4	3 Líderes comunitarios 1 Líder comunal	Tame
Atentados	2	1 Líder comunitario 1 Líder comunal	Saravena Arauquita
Secuestro	1	1 Líder comunal	Tame
Amenaza	1	1 Lideresa comunal	Saravena

Fuente: elaboración propia

Se evidencia una estrategia orientada a desarticular el tejido social del departamento, mediante agresiones dirigidas contra liderazgos comunales y comunitarios. En seis de los ocho casos se desconoce la identidad de los agresores, lo que refleja una forma de evadir la responsabilidad política por los ataques.

La amenaza recibida por una lideresa comunal en Saravena habría sido emitida por el Frente 10 de las disidencias, mientras que el asesinato del líder comunal Jaime Enrique Benítez, presidente del Consejo Intergremial de Tame, perpetrado por sicarios, fue objeto de un comunicado del FDO-ELN, en el cual negaron su participación y lo atribuyeron al Frente 10.

En Arauca las organizaciones sociales están sometidas a la estigmatización, criminalización y señalamiento, lo cual ha afectado a los integrantes del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente y particularmente a sus líderes y lideresas comunales y comunitarias. Ejemplo de ello fue la circulación de dos panfletos y la destinación de una página completa por parte del medio digital News Radios Arauca (2025), en el que "personas de Saravena" señalan a miembros de la Fundación Joel Sierra y de Asojuntas de actuar de "manera autoritaria, clientelista y con ELN".

La difusión de rumores o denuncias no verificadas ha sido instrumentalizada por actores armados o intereses políticos para deslegitimar la labor de defensores de derechos humanos y organizaciones comunitarias. Hay que recordar que, en este departamento, los señalamientos públicos han antecedido a amenazas, judicializaciones infundadas y asesinatos de líderes sociales.



2. Magdalena Medio[5]

En la extensa subregión del Magdalena Medio la violencia se ha recrudecido debido a la intensificación del conflicto armado. Desde 2020, el Clan del Golfo se ha fortalecido y se ha expandido territorialmente[6]. En 2022 el conflicto se intensificó con la llegada del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF)[7] a este territorio que históricamente ha estado controlado por el ELN[8]. En efecto, no es solo la presencia o confluencia de estos actores armados sino la disputa por el territorio, dado los distintos intereses vinculados a las actividades económicas, en particular, la minería ilegal de oro y el cultivo y procesamiento de coca y clorhidrato de cocaína.

El Sur de Bolívar está caracterizado por ser una de las zonas que posee mayor producción de oro en Colombia, pues cuenta con la Serranía de San Lucas cuya producción de oro ilegal es una de las más importantes de Colombia. De hecho, Bolívar es uno de los tres departamentos con mayor explotación de oro de aluvión, después de Chocó y Antioquia (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2024). La creciente demanda de oro a nivel mundial profundiza su explotación de manera ilegal, más aún teniendo en cuenta que en octubre de 2025 el precio superó por primera vez los 4.000 dólares por onza.

Sumado a esto, el país experimentó un aumento de la producción de cocaína. San Pablo-Taracué fue el segundo enclave cocalero más importante del país después del Catatumbo (UNODC, 2024). No obstante, no se trata solamente del cultivo, sino de que en el Sur de Bolívar se presenta mayor especialización de su cadena productiva, lo que además demanda el control de las rutas de salida de la región hacia mercados nacionales y hacia el exterior.

Precisamente, su ubicación georreferencial relevante conecta en gran medida zonas importantes del país. A través de Norte de Santander se conecta con Vene-

5 Para efectos de este informe, en esta amplia subregión se tuvieron en cuenta municipios de los siguientes departamentos: 1) Antioquia (Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó); 2) Sur de Bolívar (Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití); 3) Sur del Cesar (Aguachica, Gamarra, González, La Gloria, Pelaya, Río de Oro, San Alberto y San Martín); y 4) Santander (Barrancabermeja, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri, Puerto Parra, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí).

6 Subestructuras, Edgar Madrid Benjumea, Luis Alfonso Echavarría y Herlin Pino Duarte.

7 Bloque Magdalena Medio, Frentes 4, 24 y 37.

8 En la zona hubo presencia del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, compuesto por Frentes como Edgar Amílkar Grimaldo Barón, Héroes y Mártires de Santa Rosa, Luis José Solano Sepúlveda y Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres Restrepo.

zuela; por Bolívar y Cesar, al Caribe y sus puertos; y al occidente y centro del país por Antioquia y Santander. Sumado a ello, está atravesada por el Magdalena, un río estratégico para el transporte fluvial.

El Magdalena Medio ha sido centro de disputa de los actores armados también por razones estructurales como la falta de presencia integral del Estado, más allá de la presencia militar, porque el acceso a servicios vitales y de satisfacción de necesidades básicas de su población han sido y siguen siendo limitadas.

Asimismo, este territorio enfrenta conflictos socioambientales derivados de actividades ilegales y legales. El monocultivo de palma de aceite, promovido desde la primera década de los 2000 como alternativa a los cultivos de uso ilícito, ha generado grandes transformaciones en el paisaje y en las formas de vida del campesinado. Este modelo ocupa miles de hectáreas, hasta orilla de ríos y quebradas, lo cual viola la normativa de distancias y consume enormes cantidades de agua (aproximadamente 30 litros por planta al día). Estos cultivos han provocado deforestación y una creciente preocupación por la afectación a las fuentes hídricas. Además, este sistema ha permitido la acumulación de tierras, el cierre de caminos tradicionales y la marginación de los campesinos. Por otro lado, dentro de las comunidades se cree que detrás de estas grandes extensiones de monocultivo hay capitales vinculados a grupos armados, lo que perpetúa su control en la región.

La pesca ancestral enfrenta una crisis severa causada por los vertimientos de Ecopetrol que han dañado los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, el mayor impacto actualmente lo causa la pesca industrial indiscriminada que utiliza "trasmallos" (redes que bloquean el río de orilla a orilla), pues diezma la cantidad de peces autóctonos[9].

Lo anterior explica la presencia de actores armados ilegales que se disputan el control de esta subregión a través de una violencia voraz. El registro de hechos relacionados a esta dinámica, con todas sus limitaciones por cantidad y barreras para el acceso a casos, permitió dar cuenta de un total de 400 hechos violentos entre enero y agosto de 2025, distribuidos así:

9 Cuando las comunidades se han organizado para desmantelar estas redes ilegales, han sido confrontadas por los responsables, quienes, respaldados por la fuerza y en algunos casos por las armas, mantienen sus operaciones. Esta dinámica, también vinculada a grupos armados, no solo amenaza la biodiversidad sino también la seguridad alimentaria y la autonomía de las comunidades ribereñas.

Magdalena Medio antioqueño (39), Sur de Bolívar (132), Sur del Cesar (71) y Magdalena Medio santandereano (158), con lo cual se establece una violencia regionalmente articulada. A su vez, durante al año se distribuyeron de la siguiente manera:

Tabla 6. Número de hechos violentos registrados en el Magdalena Medio por mes

Mes	Hechos
Enero	50
Febrero	46
Marzo	43
Abril	59
Mayo	51
Junio	45
Julio	51
Agosto	55

Fuente: elaboración propia

Se presentaron hechos durante todos los meses (entre los 43 y los 59 casos, un promedio de 50 hechos al mes), lo que confirma que no se trata de una violencia esporádica ni estacional sino estructural, intensa, sostenida y prolongada sin picos ni descensos drásticos.

Aun cuando puede ser vista como un todo, el Magdalena Medio abarca diferentes lógicas de violencia. Por supuesto, la de mayores dimensiones tiene que ver con la ya señalada disputa por el dominio de la economía tanto legal como ilegal, de la región. De enero a agosto 2025 se obtuvo información acerca de 80 acciones bélicas, es decir, ataques estratégicos y directos entre los grupos armados, que son permitidas en la tradición de guerra:

Tabla 7. Acciones bélicas entre enero y agosto

Modalidad	Casos
Bombardeo	5
Ataque objetivo militar	11
Bloqueo de vías	6
Combate	39
Incursión	19

Fuente: elaboración propia

Las modalidades de los hechos reflejan un conflicto sofisticadamente operativo y evidencian la escala de confrontación que libran el Clan del Golfo, el ELN, el EMBF y las Fuerzas Militares. Precisamente, los combates dominan el escenario ante la rápida expansión y fuerte posicionamiento del Clan del Golfo que ha logrado dominar la zona y ha hecho que el ELN y el EMBF se vieran en la necesidad estratégica de aliarse en la contienda para contener la arremetida. Es por esto que el 61% de los combates se da precisamente entre dicha alianza y el Clan del Golfo.

Por la complejidad para abarcar y registrar los casos, otras fuentes documentales hablan de un conflicto de una intensidad mucho mayor, por ejemplo, acudiendo a balances del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena. El Espectador (2025) afirma que entre junio y octubre de este año, tan solo el sur de Bolívar fue objeto de más de 60 combates y hostigamientos armados entre el ELN, el Clan el Golfo, el EMBF y la fuerza pública.

En esta subregión deben considerar dos situaciones: la primera es que ante la debilidad del Estado, el Clan del Golfo, el ELN y el EMBF han logrado tener presencia directa o miliciana en amplio porcentaje de la subregión, siendo el Clan del Golfo el de mayor dominio al lograr cercar la Serranía de San Lucas. No obstante, el ELN conserva una influencia parcial, aunque tiene presencia en territorios en los que se encuentra el Clan del Golfo, pero donde ha perdido poderío, control y capacidad. Por su parte el EMBF ha logrado expandirse sin alcanzar

una influencia determinante. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que el ELN y el EMBF se encuentran librando una disputa de violencia a gran escala en el Catatumbo, por lo cual han tenido que desplazarse hacia esa zona.

Las Fuerzas Militares tienen también presencia en la zona con batallones como el Nueva Granada y Batallón de Selva 48 y la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, no obstante, su capacidad ha sido limitada. Por una parte, se han sostenido pocos combates con los grupos armados ilegales (por lo menos en nueve ocasiones), además de un bombardeo en contra del ELN en el Sur de Bolívar. Por otra parte, su rol también ha sido pasivo-reactivo, al constituirse como el principal receptor de ataques armados por parte de estos grupos armados.

De los ataques a objetivos militares (donde no se desataron combates) el 60% fueron dirigidos contra pelotones del Ejército y patrullas de la Policía Nacional, dejando como saldo cinco policías asesinados. Tanto los combates como los ataques contra las Fuerzas Militares tienen como responsable principal al ELN, quien ha realizado acciones sofisticadas como los bombardeos con utilización de drones y ataques con francotiradores.

Ahora bien, no hay que negar que las Fuerzas del Estado han librado combates militares contra el Clan del Golfo, pero en menor medida (solo se obtuvo información de dos combates). Contrario a ello, no cesan las denuncias y reclamaciones mantenidas por parte de la población, organizaciones sociales y hasta la misma Defensoría del Pueblo (2023c) que en su Alerta Temprana 034-23 señala un posible rol facilitador por parte de un sector de las Fuerzas Militares para que el Clan del Golfo se expanda e incremente su presencia territorial; igualmente, se ha mencionado una forma de operar del Ejército en el que al parecer estarían señalando a habitantes del sur de Bolívar como simpatizantes o aliados de los grupos armados.

La concentración de acciones bélicas en Santa Rosa del Sur (Bolívar)[10], con un 34 % devela el papel central de este municipio en la dinámica del conflicto armado regional. La alta incidencia se explica por su posición geográfica y económica estratégica, al encontrarse en una zona montañosa de la Serranía de San Lucas, que sirve como punto de control y enlace hacia otras regiones del país, siendo la transición entre la serra-

10 En corregimientos como Los Canelos, La Marizosa, Fátima, San Benito y San Pedro Frío y veredas como El Diamante, El Páramo, La Pradera, Las Palomas, Minguillo, Río Amarillo y San Cristóbal.



nía y la cuenca del río Magdalena, lo que lo ha convertido en un corredor clave para la movilidad de actores armados. Además, la presencia de economías extractivas, especialmente la minería intensiva ilegal, artesanal y empresarial de oro, la presencia de cultivos ilícitos, refuerzan su valor militar y económico, haciéndolo un territorio estratégico en las disputas por el control territorial y las fuentes de financiación ilícita. Específicamente, veredas y corregimientos como La Marizosa y Fátima son trascendentales, dado que se ubican en el corazón de la Serranía de San Lucas, hacen parte de una zona rica en oro y son de difícil acceso, lo que las convierte en zonas de retaguardia y logística; donde los actores ilegales, principalmente Clan del Golfo y ELN instalan campamentos para controlar el paso de personas y mercancías y regular la explotación minera.

En menor medida se presentaron acciones bélicas en el Sur de Bolívar: San Pablo (3), Arenal (3), Cantagallo (7), Morales (1), Simití (6); en el Sur del Cesar: Aguachica (4), San Alberto (2), San Martín (2), Río de Oro (6), Gamarra (1), Pelaya (3), La Gloría (3); en Antioquia: Maceo (1), Yondó (6); y en Santander: Barranca (4). Esta distribución muestra que el conflicto abarca una zona importante en extensión geográfica.

Lo más alarmante de esta disputa es, por supuesto, el involucramiento y hostigamiento en contra de la población civil. Se documentaron 50 hechos de este tipo, donde se halló información sobre cinco ataques contra bienes civiles. Tres de ellos fueron en el Sur del Cesar (Pelaya, La Gloria, Aguachica) por parte del ELN, y una en Maceo (Antioquia) por parte del EMBF. También, el robo de un vehículo a trabajadores de la empresa AFINIA en Morales,

Bolívar, por parte de un grupo armado que no fue identificado.

En esta subregión los actores armados intimidan a la población. En Barrancabermeja y Puerto Wilches el Frente 12 del EMBF difundió panfletos para generar terror. En Santa Rosa, el Clan del Golfo amenazó a funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

En cuanto a confinamiento y desplazamiento se tuvo información de por lo menos once casos. Aunque se sabe que hay subregistro, los casos documentados representan el confinamiento de al menos 8.000 personas, principalmente en zonas rurales de municipios del Sur de Bolívar (Santa Rosa del Sur especialmente, Cantagallo, San Pablo y Arenal)[11] . Estos confinamientos fueron causados por combates, pero también por la instalación de Minas Antipersonal (MAP) que causaron cuatro muertes y seis personas heridas en zonas rurales de Santa Rosa (corregimientos La Marizosa y Fátima), Simití (vereda El Piñal) y Arenal. Finalmente, se registró una masacre de cuatro personas que fueron dejadas en distintas veredas de Yondó (Antioquia). Por este hecho fue señalado el EMBF.

Al igual que los confinamientos, los desplazamientos forzados han afectado a más de 500 familias de Santa Rosa del Sur, que incluye una población de aproximadamente 50 firmantes de paz. Durante el 2025 fue alarmante el desplazamiento forzado masivo de 53 campesinos de la vereda Puerto Matilde de Yondó, como consecuencia de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. Se denuncia, además, que miembros del Clan del Golfo han obligado a familias a permitirles asentarse en sus casas.

En San Pablo, sur de Bolívar, la población señaló que cuatro mineros fueron asesinados, como consecuencia de un conflicto dentro del gremio de “mineros”. Sin embargo, según lo constatado, estas acciones corresponderían a dos hechos perpetrados por el ELN y el Clan del Golfo: el 10 de agosto el ELN quemó maquinaria amarilla del grupo paramilitar y ejecutó a dos civiles mineros; el 13 de agosto el Clan del Golfo asesinó a dos personas en Pueblo Gato dejando el mensaje “por sapos” en los cuerpos de las víctimas. Estas cuatro ejecuciones evidencian la disputa territorial que vincula y victimiza directamente a la población civil. Igualmente, en Aguachica (Cesar) y Cantagallo (Bolívar) dos personas murieron en

11 Estos se habrían presentado debido a enfrentamientos prolongados entre el Clan del Golfo y el ELN y el EMBF (solos o en conjunto) y las restricciones a la movilidad que estos mismos grupos han impuesto generando en algunos casos desabastecimiento de alimentos y suspensión de clases.

medio de combates entre el Clan del Golfo y EMBF. Mientras tanto, en Puerto Berrío se documentó la desaparición forzada de dos personas y una en Santa Rosa del Sur.

El análisis muestra que los grupos armados ilegales, en particular el ELN y el Clan del Golfo, recurren al secuestro con fines extorsivos, de presión política y de control territorial. En el sur de Bolívar y Cesar se registraron 11 casos. Las víctimas incluyen líderes sociales, familiares de funcionarios públicos, comerciantes y campesinos, lo que refleja una instrumentalización del secuestro como mecanismo de financiación, coerción y demostración de poder. De los hechos registrados, en al menos seis no se conoce la identidad de los responsables, reforzando un clima de miedo, impunidad y desprotección institucional en las comunidades. En el caso del ELN, los plagios están dirigidos contra campesinos o personas con roles de incidencia local para imponer autoridad y obtener recursos mediante extorsión o presión política. En contraste, el Clan del Golfo recurrió al secuestro de manera más instrumental y de lógica criminal, asociado a disputas internas, venganzas o "ajustes de cuentas", como en Río de Oro y González.

Singularmente, el Clan del Golfo ha alcanzado un control considerable del Magdalena Medio y ha sostenido su injerencia en la minería ilegal, el narcotráfico y relaciones empresariales a través de impuestos, cobro de extorsiones a mineros y productores de coca, llevando a cabo una estrategia violenta y de intimidación contra la población.

Se tiene registro de 20 eventos que evidencian la puesta en marcha de la estrategia de control del Clan del Golfo. En primer lugar, se documentó la publicación de 12 amenazas, de las cuales 11 son dirigidas en contra de personas defensoras de derechos humanos de Barrancabermeja y Sabana de Torres (Santander). La amenaza restante fue dirigida al gremio de campesinos cocaleros de la región de San Pablo (Bolívar), con el propósito de controlar el negocio ilícito por medio de la compra y venta de estupefacientes, con valores, sistemas de pago y crédito establecidos por ellos, bajo la amenaza de asesinar o desplazar a quienes se opongan.

El control de este grupo armado fue evidente también en los confinamientos en corregimientos como Alto de Las Brisas, Canelos, Villaflor, Buenavista, San Juan Río Grande y La Marizosa de Santa Rosa del Sur, en los cuales restringieron la entrada de combustible, alimentos y ordenaron el cese de actividades escolares. Igualmen-

te, ordenaron el cierre de establecimientos comerciales en Puerto Triunfo (Antioquia), tras la baja por parte de la Policía del cabecilla Oliverio Isaza Gómez, alias "Terror". Finalmente, se registró los asesinatos de tres personas, dos de ellas asociadas a la minería ilegal de oro en San Pablo y Simití (Bolívar).

En 2025 se profundizó también la presencia del grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y su disputa abierta contra el Clan del Golfo en el sur del Cesar. Por ejemplo, en San Alberto, presuntamente, habrían asesinado a dos hermanos dentro de un establecimiento comercial y habrían manejado el cobro extorsivo al comercio.

Por su parte, se documentaron por lo menos tres combates entre las ACSN y el Clan del Golfo en zona rural de San Alberto (1) y en Río de Oro (2); además de combates con las Fuerzas Militares en San Alberto y San Martín. Esta confrontación está enmarcada, por un lado, por la ventaja económica que representa el dominio de la zona, y por el otro, por la posible intención de estos grupos de ingresar a la zona del Catatumbo[12].

De igual manera, estas estructuras han encontrado allí una fuente adicional de financiación en la oferta de servicios de seguridad privada a ganaderos y terratenientes, que buscan protección frente a incursiones guerrilleras, y contra personas consideradas problemáticas. Esto reproduce patrones históricos vinculados al surgimiento de las autodefensas en la región como la ejecución por parte de las ACSN, en espacio público, de una mujer señalada de ser expendedora de sustancias psicoactivas en la vereda La Salina de Rionegro (Santander), zona controlada por el Clan del Golfo.

Como parte de la degradación del conflicto armado y el subyacente clima de terror e incertidumbre, los homicidios se convirtieron en una herramienta de intimidación y control social. Esto fue evidente por la aparición de cuerpos de personas asesinadas con arma de fuego y en algunos casos con signos de tortura en espacios rurales o vías, pero no se pudo establecer el motivo ni determinar responsables. Se obtuvo información de 33 casos, concentrados en: sur de Bolívar (53 %), sur del Cesar (28 %), Antioquia (13%) y Santander (6 %), siendo las víctimas, campesinos, mine-

12 Es clave tener en cuenta que municipios del sur del Cesar, entre ellos San Alberto, San Martín, Aguachica, Río de Oro y González, conforman una zona territorial de alta relevancia estratégica. En esta franja, estos grupos armados ilegales buscan concentrar su presencia con el propósito de afianzar su dominio territorial y aprovechar los flujos de economías ilícitas provenientes del sur de Bolívar, el Catatumbo y el Magdalena Medio en general.

ros o con identidad desconocida.

Este ha sido un mecanismo propio de estos grupos armados para infundir miedo y es una forma de castigo social, tanto a población civil por no aceptar las dinámicas impuestas, como entre los actores rivales. En estos escenarios, el silencio de las comunidades, el temor a denunciar y la falta de investigaciones efectivas, producto de la debilidad del Estado en la región, facilitan la impunidad. Así, los homicidios sin esclarecer se vuelven parte del paisaje cotidiano del conflicto.

Estos asesinatos dan cuenta de una lógica de exterminio social por parte de los actores armados. En municipios como Morales, San Pablo y Santa Rosa del Sur se han presentado amenazas y desplazamientos de personas con orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas y dos asesinatos (un hombre y una mujer) en cuyos cuerpos fueron dejados panfletos con mensajes como "por vicioso y marihuanero y abusador" o "por paraca y consumidora de vicio". Al mismo tiempo, en Barrancabermeja fueron asesinadas seis personas en situación de calle.

Pero la situación del Magdalena Medio no se limita estrictamente a la confrontación de los grupos armados por el control de las economías ilegales y a los históricos vacíos estatales, sino que a partir de estas realidades se derivan otros escenarios igualmente complejos como el de la criminalidad organizada, asociada al narcotráfico, en los principales cascos urbanos.

En otras palabras, los grupos armados[13] actúan como financiadores, compradores o promotores de mejoras técnicas en la producción de cocaína y en la transformación de la hoja de coca, lo que genera una amplia accesibilidad a recursos económicos y un alto nivel de especialización productiva en las zonas donde se concentran. Así, en las regiones y municipios, han conformado redes de subcontratación de servicios criminales[14], estimulando la expansión de pequeñas estructuras delincuenciales

El crecimiento de la producción de coca y cocaína es asumido por los compradores ubicados en los centros poblados cercanos a las zonas cocaleras, lo cual ha generado una mayor oferta dentro del mercado. Los traficantes a nivel local, por su parte, optan cada vez más por adquirir el producto directamente en enclaves, atraídos por sus ventajas en calidad, cantidad, uniformidad y cercanía

13 En esta dinámica confluyen el Clan del Golfo, el ELN y el EMBF, sobrepasando la capacidad de la Policía para afrontar esta dinámica.

14 Homicidios a sueldo (sicariatos), cobro de cuotas de extorsión, cobro de porcentajes de venta de sustancias psicoactivas, control barrial, etc.



a los puntos de salida o rutas de tráfico. Ante una oferta desenfrenada, y con la injerencia de los grupos armados, los grupos de delincuencia organizada se disputan el mercado interno y el control de sectores, comunas y barrios, lo que ha generado una ola de violencia de grandes dimensiones en la subregión.

Entre enero y agosto, en el Magdalena Medio se presentaron 113 homicidios bajo modalidad de sicariato relacionados con el narcotráfico y crimen organizado[15].

15 La cifra alcanza 161 casos cuando se combinan razones políticas, exterminio social y criminalidad organizada y se suman las tentativas.

Barrancabermeja concentra el 60% de este tipo de homicidios (68 casos), lo cual da cuenta de una crisis de violencia urbana.

La perspectiva de exterminio social sitúa a las personas defensoras de derechos humanos en escenarios de riesgo. Durante 2025 se obtuvo información sobre 22 agresiones en contra de esta población.

Tabla 8. Número de agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Magdalena Medio

Agresiones	Casos
Asesinato	8
Amenazas individuales	11
Amenazas colectivas	2
Desaparición forzada	1

Fuente: elaboración propia

Se denota un predominio de las amenazas individuales seguidas de asesinatos que muestran un patrón de violencia letal y de intimidación directa en primer término; por otro lado, las amenazas colectivas y la desaparición forzada permiten ver la persistencia de estrategias de terror y silenciamiento utilizadas para frenar la acción social y comunitaria en la región. En general, las agresiones se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 9. Agresiones por municipio del Magdalena Medio 2025

Municipio	Casos
Barrancabermeja	7
Puerto Wilches	1
Sabana de Torres	1
Santa Rosa del Sur	1
Arenal	1
Cantagallo	1
La Gloria	1
Simití	1
Puerto Berrío	1
Yondó	1

Fuente: elaboración propia

En cuanto a asesinatos, se reportaron en Barrancabermeja (2), Puerto Wilches (1), Santa Rosa del Sur (1), Cantagallo (1), Simití (1), La Gloria (1) y Yondó (1), cuatro de ellos se cometieron bajo modalidad de sicariato, una estrategia que facilita la reproducción de violencia con un alto índice de impunidad que esconde a los responsables y los intereses que representan. Lo mismo ocurre en el general de las agresiones, pues el 64 % fueron cometidas por autores sin identificar y el 36 % presuntamente por parte del Clan del Golfo. El perfil de las víctimas demuestra una intención de fracturar el tejido social y de silenciamiento contra personas opuestas a intereses económicos y políticos. En el Sur de Bolívar cuatro de las agresiones se dirigieron en contra de líderes comunales, enmarcadas en una denuncia constante de cooptación y amenazas por parte de los grupos armados hacia las Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios, a quienes se agredieron también en cuatro ocasiones.

Para hacer frente a esta ineludible situación, las organizaciones defensoras de derechos humanos de la región impulsaron la instalación de la Mesa Territorial de Garantías del Magdalena Medio, la cual tiene un carácter particular, ya que no se asocia a un departamento específico y fue creada producto de la presión y la incidencia de dichas organizaciones. La instalación, que tuvo lugar el 14 de agosto en Barrancabermeja, estuvo marcada por la preocupación de las organizaciones sociales frente a la falta de compromiso institucional. Muestra de esto es que las gobernaciones de Bolívar y Cesar no asistieron, y la de Antioquia pidió participar virtualmente, solicitud que fue negada por razones de seguridad. Solo Santander tuvo presencia activa. Esta ausencia generó tensiones entre la institucionalidad y las personas defensoras de derechos humanos, quienes denunciaron la falta de voluntad política y la poca respuesta frente a la crisis humanitaria y de seguridad que afecta a líderes y lideresas sociales. Las organizaciones también reclamaron la ineficacia de la Unidad Nacional de Protección, denunciando casos de atentados y decisiones arbitrarias sobre medidas de protección. En consecuencia, decidieron no instalar los tres subgrupos de trabajo por falta de garantías, pero sí concretaron compromisos entre los que se destacan la realización del acto de reconocimiento a defensores y defensoras, una sesión conjunta con la Mesa de Santander y la creación de una comisión permanente de seguimiento.

3. Santander[16]

En el mismo sentido, el departamento de Santander evidencia una expresión de la reconfiguración de las dinámicas de conflicto y la violencia en la región. Las estructuras de criminalidad y la delincuencia organizada han superado en impacto y presencia a la violencia política residual ejercida por los actores armados históricos del conflicto armado.

Estas bandas dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otros tipos de rentas ilegales ejercen su poder mediante acciones letales deliberadas y amedrentadoras como respuesta a la desatención de las instituciones departamentales y municipales, por ejemplo, han omitido los escenarios enunciados por la Defensoría del Pueblo (2021b), que sitúa al área metropolitana de Bucaramanga en una escenario de violencia como manifestación del crecimiento y fragmentación de grupos regionales de delincuencia organizada como "Los del Sur", "Los de san Rafa (o los del Norte), Claverianos, "los de Villas", "los Manchados" y otros más, quienes han librado una disputa por el control territorial del mercado del narcotráfico en los diferentes comunas y barrios en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

En el departamento se ha registrado la presencia intermitente del Clan del Golfo, así como los grupos posacuerdo de las FARC (específicamente su Frente 33) y el ELN. Su presencia se ha denotado por medio de incursiones y hechos de violencia como las amenazas directas a colectivos dentro de los diferentes territorios del departamento. Además de estos grupos, de manera preocupante en los últimos meses se ha hecho expresa la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) desde el Sur del Cesar, a quienes ya se les ha atribuido hechos de violencia en el departamento, entre ellas la anteriormente mencionada ejecución extrajudicial en Rionegro, Santander, cuestión que terminaría por agravar desatendido panorama identificado por Defensoría del Pueblo (2023b) en su AT 028-23 en el cual se alertaba por el inminente avance del Clan del Golfo en la región del bajo Rionegro y sus corregimientos más alejados de la cabecera municipal.

De enero a agosto de 2025 fueron documentados en Santander 143 hechos de violencia distribuidos según sus características como se indica a continuación:

16 Se excluyen los municipios pertenecientes a la subregión del Magdalena Medio.

Tabla 10. Número de hechos de violencia según sus características

Tipo de violencia	Hechos
Violencia por razones políticas	23
Violencia ejercida o vinculada a la criminalidad organizada	120
Total	143

Fuente: elaboración propia

Acerca de la violencia ejercida por los grupos de delincuencia organizada y su disputa territorial, en Santander entre enero y agosto se documentaron 104 hechos entre homicidios bajo modalidad de sicariato (78 casos) e intentos de sicariatos.

En lo que refiere a la violencia ejercida por razones políticas, se documentaron 23 hechos, cinco de los cuales corresponden a violencia ejercida por estructuras paramilitares (4 son atribuidos al Clan del Golfo y una restante a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada).

Por otro lado, se registraron dos infracciones al DIH, ambas en un mismo hecho perpetrado por ELN en el municipio de Charalá, donde torturaron y asesinaron a una persona vinculada a las extorsiones dentro del municipio.

En cuanto a acciones bélicas documentadas por parte de grupos insurgentes, se registraron nueve hechos, de los cuales ocho son atribuidos al ELN y el hecho restante fue atribuido al Frente 33 de la disidencia de las FARC. Este último grupo realizó movimientos en Norte de Santander por el municipio de Cáchira para ingresar a Santander a través de El Playón con el objetivo de constituir un corredor de movilidad y conectar el Catatumbo y la frontera con Venezuela a la subregión del Magdalena Medio para el transporte de combatientes, armas, suministros y mercancía ilegal con el fin de lograr un control estratégico sobre economías ilegales. Este intento

expansivo, habría sido detenido por parte del ELN tanto en el municipio de Cáchira, como en el de La Esperanza.

Por último, fueron registrados siete hechos de violencia dirigidos en contra de personas defensoras de derechos humanos. Uno de estos hechos fue el asesinato del líder comunal Orlando Vesga Badillo en Bucaramanga, el cual fue perpetrado por sujetos sin identificar.

4. Catatumbo[17]

Las explicaciones sobre las causas de la crisis en la subregión del Catatumbo son variadas. Por un lado, la Defensoría del Pueblo (2024) emitió la Alerta Temprana 026 en la que advirtió una eventual confrontación que podría conducir a la región a una crisis desproporcionada y de elevados costos humanitarios, derivada de las tensiones entre el Frente 33 de disidencias de las FARC y el ELN, sugiriendo como posibles causas la disputa por las economías ilegales, principalmente del narcotráfico.

Esta versión fue respaldada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2025), que señaló que la confrontación armada y su agudización se derivan de la disputa por el control territorial ante la pretensión de estos grupos armados por controlar la cadena de producción del narcotráfico. González (2025) indicó un quiebre producido tras el vencimiento y no renovación del cese al fuego bilateral del gobierno con el ELN en 2024, que condujo a la guerrilla a priorizar la contención de la expansión del Frente 33 en el Catatumbo, tras acuerdos entre ellos que les había permitido cohabitar allí, garantizando incluso el flujo y buen funcionamiento de actividades ilícitas.

Cabezas (2025) no desconoce la relación de la disputa con la economía de la coca, pero va más allá al sostener que la acción del ELN proviene de la fragmentación y pérdida de presencia en municipios del país donde había sido permanente (entre ellos la separación del Frente Comuneros del Sur en Nariño) y una posible pérdida de capacidad que se desprende de la expansión del Clan del Golfo y las disidencias. En ese sentido, tras la pérdida del control de territorios, la arremetida del ELN responde a un repliegue y reposicionamiento estratégico en zonas clave y de presencia histórica, principalmente de frontera con Venezuela, como Norte de Santander y Arauca.

Por otra parte, hay una relación entre estas versiones con las que

17 Algunas fotos de la subregión del Catatumbo son cortesía del Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA.

mencionan organizaciones sociales de la región que fueron consultadas[18]. Una de ellas señala la responsabilidad del ELN al permitir la llegada y rearme del Frente 33 al Catatumbo, posterior a la firma del Acuerdo de Paz. De acuerdo con esta perspectiva, la prolongación por parte de los grupos armados ilegales generó un proceso de descomposición en el que la dimensión ideológica y política insurgente se desdibujó, y se hace innegable la mención del narcotráfico como factor al que están ligados estos grupos.

Otra organización consultada fue enfática en señalar que resulta un error de visión reducir la región del Catatumbo a las economías ilegales restándole valor a la vocación y sostén legal agrícola de gran parte de la población. No obstante, reconoce que entre los grupos sí se presentó la ruptura de un acuerdo "en torno a las economías ilegales: de quién la negociaba, quién la compraba y quién la movilizaba para comercializarla (...) entonces hay que decir que no era un pacto político, era un pacto económico" (Comunicación personal, 9 de septiembre de 2025).

Al igual que Cabezas (2025), esta organización también concibe que la crisis se fundamenta en la pérdida de un cargamento de oro y estupefacientes por parte del Frente 33 y que pertenecía al ELN.

Las organizaciones sociales son prudentes en establecer que esta sea la única razón. No se niega que el Catatumbo concentra el área más grande del país tanto en siembra extensiva como en niveles de productividad por área sembrada con evidentes avances en prácticas de industrialización del cultivo, lo que constituye a parte de esta región como el mayor enclave productivo para las economías ilegales asociadas a la coca en todo el país (Defensoría del Pueblo, 2025a). Es decir, hay concordancia en afirmar que quien controle el proceso y las rutas de salida tiene una ventaja sobre los demás. Es importante entonces también tener en cuenta que controlar las rutas hacia el interior y exterior de Catatumbo es de importancia mayor porque a ello se suma la necesidad de los grupos para sacar por la frontera el oro producido en el Magdalena Medio y el Bajo Cauca antioqueño. Por su parte, la minería de carbón, en su mayoría legal, extraído en el Catatumbo, genera ingresos a los grupos armados vía impuestos y extorsión.

A todo esto, una de las organizaciones sociales consultadas añade que el control de la frontera en términos geopolíticos es

18 Estas coinciden en señalar que las tensiones se percibieron desde 2022, pero que fueron atenuadas por los diálogos de paz impulsados por el gobierno de Gustavo Petro, quien también se equivocó al otorgarles estatus político a las disidencias.



muy importante para el ELN y el de Venezuela. Además, otro de los aspectos relevantes han sido los calificativos que estos grupos se han otorgado entre ellos. El ELN ha señalado al Frente 33 de ser una banda paramilitar y afirma que desatendió las normas y los acuerdos pactados mediante los cuales se les había permitido operar en la región luego de la desmovilización en 2017 (Defensoría del Pueblo, 2025b).

Ciertamente, con su ofensiva el ELN logró propinar un fuerte golpe al Frente 33. Algunos cálculos sostienen que Richard Suárez, alias "Richard", uno de los comandantes del Frente 33, contaba con 290 hombres en armas y su anillo más cercano era de 40 (Cabezas, 2025). Su capacidad se vio reducida, en tanto que más de 69 combatientes se entregaron al Ejército Nacional, sumado a las bajas causadas por el ataque del ELN. Ahora bien, la arremetida del grupo guerrillero también tuvo repercusiones a su interior. Una de las fuentes investigativas de Blanquicet y Carvajal (2025), indicaron que este grupo se ha visto débil y que ha tenido dificultades en términos de armamento y municiones. En contraste, el Frente 33 habría sido reforzado por miembros de otros Frentes, entre ellos, el Frente Magdalena Medio (Defensoría del Pueblo, 2025b) movilizando hombres desde el sur de Bolívar y el sur del Cesar e incluso del Frente 10 con presencia en Arauca y que responde al mando de alias "Iván Mordisco". Así las cosas, tras su resistencia y fortalecimiento, desde marzo el Frente 33 lanzó una contraofensiva en zona rural y casco urbano de Tibú y en otras posiciones de salida al Tarra y hacia la Gabarra, con el objetivo de lograr el control de la vía El Tarra-Orú, a pesar de que el ELN controla una parte mayoritaria de las rutas y pasos fronterizos del Catatumbo. En consecuencia, actualmente se puede hablar de una prolongación de la profundización de la crisis iniciada en enero.

La labor de registro, que contempla el lapso entre abril y agosto, dado el reavivamiento de las hostilidades, permitió dar cuenta de por lo menos 186 hechos vinculados a esta. Tales hechos se distribuyen territorialmente de la siguiente manera:

Tabla 11. Hechos de violencia entre abril y agosto distribuidos por municipio de la región del Catatumbo

Municipio	Hechos
Ábrego	14
Convención	9
El Carmen	2
El Tarra	18
Hacarí	2
La Playa	7
Ocaña	40
San Calixto	2
Sardinata	2
Teorama	5
Tibú	85

Fuente: elaboración propia

Estos hechos dan cuenta de un choque armado que abarca la totalidad de municipios de la región, concentrando 46% en Tibú, en la disputa por la cordillera, ubicada en la vereda 20 de julio entre los corregimientos de Versalles y Langalia, y se relocaliza en los corregimientos de Filogringo y Orú en el municipio de El Tarra. El control de estos sectores supondría una ventaja operativa para cualquiera de los bandos. Adicionalmente, se observa que Ocaña, municipio estratégico por su conexión con el sur del Cesar, se convirtió en un nuevo escenario de confrontación.

El conflicto en el Catatumbo se caracteriza por una combinación de distintas maneras de usar la violencia. En primer lugar, está el escenario de confrontación directa legítima,de las cuales se obtuvo información de 56 eventos. De ellos, fueron registrados 28 combates, de los cuales el 61% tuvo como marco zonas rurales de Tibú[19]. El porcentaje restante de los combates se dieron en Ocaña, El Tarra, Convención, Sardinata y Ábrego. 19 de estas confrontaciones fueron entre el Frente de Gue-

19 En corregimientos como Campo Dos y Versalles; veredas como 20 de julio, Betania, Campo Seis, Campo Yuca y vías como Tibú – La Gabarra y Tibú – Tres Bocas.

rra Nororiental del ELN y el Frente 33, seguido de cinco combates entre las Fuerzas Militares y el ELN, tres entre Fuerzas Militares y el Frente 33, dos entre las Fuerzas Militares y desconocidos y un enfrentamiento entre el Frente 33 y desconocidos.

Una situación particular se observa en cinco ataques a objetivos militares, cuyo patrón se expresa en el ataque sistemático del ELN a las Fuerzas Militares, principalmente en contra de la Policía Nacional en el Tarra. Una constante ha sido el bloqueo de vías, allí se evidencia un control total del ELN en vías de Tibú. De seis retenes ilegales documentados, cuatro correspondieron a acciones de esta guerrilla. No obstante, también se constató la presencia del Frente 33 en vías de Tibú pues establecieron un retén ilegal en vía entre Versalles y el 20 de julio y otro más en Convención. También pintaron muros en municipios como Teorama, Ocaña, El Carmen, Convención y Ábrego para anunciar su presencia.

Indudablemente, un aspecto que marca de manera diferenciada este conflicto es el incumplimiento de ambos grupos al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la obligación de respetar y proteger a la población civil. Contrario a las demás subregiones del Nororiente, en este caso las infracciones al DIH se presentan de manera paralela y con gran intensidad.

Se obtuvo información de 52 infracciones al DIH, de las cuales seis responden a ataques a la infraestructura y a la estructura vial en jurisdicciones de Tibú, El Tarra y Ocaña. Entre estas, se ha denunciado el ataque a viviendas para ser usadas como resguardo. Sumado a ello, la Misión Médica de Convención tuvo que suspender el traslado de pacientes debido a las constantes presiones por parte de los grupos armados irregulares a los conductores de las ambulancias. También se tuvo conocimiento de seis desplazamientos colectivos forzados por los enfrentamientos indiscriminados entre el ELN y el Frente 33, cuatro de ellos en Ocaña y dos en Tibú. En estos mismos municipios hubo seis confinamientos colectivos en zona rural de Tibú (5 casos) y Ocaña (1 caso).

A la crudeza de estos hechos, como expresiones extremas de violencia armada, se suman otros tratos crueles y degradantes en contra de la población civil. En seis casos personas que no participaban de las hostilidades fueron asesinadas (5 casos en Tibú y uno en Ocaña), cinco cometidos presuntamente por el ELN y uno por parte del Frente 33. De esos casos destaca una masacre cometida en



el corregimiento Campo Tres, de Tibú, donde presuntos integrantes del Frente Nororiental del ELN interceptaron tres personas (dos mujeres y un hombre) cuando, según versiones de la población, se movilizaban en un bus de servicio intermunicipal y luego de forzarlas a descender del automotor, fueron secuestradas, torturadas y ultimadas con arma de fuego; en un comunicado el grupo armado indicó que el hecho hizo parte de un enfrentamiento con integrantes del Frente 33. Junto a estos hechos, se registraron dos personas desaparecidas.

Para responder a la avanzada militar y a la contraofensiva del Frente 33, el ELN recurrió al uso de armas prohibidas, en específico, a la instalación de campos minados, estrategia recientemente incorporada también por el Frente 33. Seis casos fueron documentados, todos en zona rural de Tibú, que dejaron siete personas lesionadas.

Junto con esto, el uso de drones con explosivos por parte de ambos grupos ha adquirido una dimensión alarmante que las Fuerzas Militares han sido incapaces de contener. Entre abril y agosto se registraron 18 eventos. El Tarra, Tibú, Teorama y El Carmen fueron escenario de estos ataques. Los drones lanzaron artefactos explosivos que afectaron viviendas, escuelas, unidades militares y dejaron a por lo menos veinte personas de la población heridas, entre ellos tres menores de edad, y causaron la muerte de dos menores de edad. En consecuencia, estos ataques también generaron desplazamientos forzados en esos municipios y daños materiales en bienes de la población civil.

El secuestro es otra de las prác-

ticas extendidas en la dinámica de este conflicto. En Tibú, El Tarra y Ocaña se presentaron 14 hechos, de los cuales en ocho casos se desconoce la identidad del grupo responsable; por su parte, el ELN y el Frente 33 fueron responsables de tres secuestros cada uno. No se tiene mayor información sobre dónde se encuentran las víctimas, pero se puede señalar que esta estrategia, por las características de los casos, se relaciona con reclutamientos, extorsión y señalamientos. Es necesario también considerar las amenazas que el Frente 33 ha promulgado en contra de población de nacionalidad venezolana y comunidad LGBTIQ+ que ha desatado su desplazamiento en municipios como Ocaña y Tibú, y las alianzas que ambos actores armados han establecido contra grupos de delincuencia organizada, que derivaron en 20 homicidios bajo modalidad de sicariato distribuidos en Tibú, Ocaña y Convención. A esto se adiciona una seguidilla de 23 asesinatos cuyos responsables no fue posible identificar, más allá de saber que en algunos casos se trata de comerciantes. Los cuerpos fueron encontradas en vías y zonas aledañas, rurales y urbanas de los municipios de Tibú, Ábrego, Convención, La Playa y Teorama.

Cabe señalar que el conflicto en el Catatumbo no se reduce a la confrontación del Frente de Guerra Nororiental del ELN y el Frente 33, sino que se ha podido establecer una confluencia con otros actores armados ilegales. En primer lugar, se ha conocido el actuar de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que libran una disputa con el Clan del Golfo en el Sur del Cesar, particularmente en el municipio Río de Oro, con una clara intención de ingresar al Catatumbo. Pues bien, el registro arroja una actuación de este grupo paramilitar en Ocaña y Ábrego, donde recientemente han aparecido grafitis alusivos a dicho grupo y una posible alianza con reductos de Los Pelusos (EPL), quienes mantienen dinámicas de extorsión en esos municipios. Por su parte, el Clan del Golfo está mostrando su interés por expandirse hacia el Catatumbo con el fin de controlar sus rutas estratégicas, principalmente, para fortalecer la dinámica económica alrededor de la minería ilegal de oro y del narcotráfico que controla en el sur de Bolívar.

La actuación de las Fuerzas Militares tampoco ha pasado desapercibida. Al igual que se mencionó en Arauca, hay señalamientos por la falta de contundencia del ejército contra la disidencia de las FARC. Las organizaciones sociales confluyen en afirmar que las Fuerzas Militares han asumi-

do una actitud meramente contemplativa, a pesar de los refuerzos trasladados a la región tras la militarización, a propósito de la conmoción interior (se habla de la presencia de aproximadamente 9.300 militares). Una de las fuentes de dicha organización define esta situación así:

"(...) hay un comportamiento del ejército de una especie de anillo de seguridad de facto alrededor donde están las disidencias concentradas. Eso ha pasado en zona rural de Tibú, pero en nuestro concepto, a nosotros nos parece que hay más una operación de brazos caídos de la Fuerza Pública sobre la situación (...) el deber constitucional de la fuerza armada en un territorio donde hay 25.000 hombres, es intervenir, sí me hago entender, es intervenir y recuperar el control territorial. Cuando decimos nosotros (que) la región nortesantandereana del Catatumbo en 2025 ha afrontado una de las escaladas de violencia más impresionantes de los últimos años por cuenta de la arremetida ofensiva desatada por parte del Ejército de Liberación Nacional -ELN- en contra del Frente 33 de las extintas FARC-EP, a partir del 16 de enero, cuya mayor intensidad se vivió en el primer trimestre del año, inició en Tibú y abarcó sistemáticamente a los municipios de Teorama, Convención, San Calixto y Hacarí". (Comunicación personal, 9 de septiembre de 2025).

Esta situación fue suficientemente registrada por medios de comunicación y documentada por diversas organizaciones sociales locales y de alcance regional y nacional e instituciones del Estado. La Defensoría del Pueblo (2025a) estimó que, a raíz de esta emergencia, entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025, se registraron 64.783 personas desplazadas y 12.913 confinadas actualmente, sumado a, por lo menos, 117 homicidios, 32 personas lesionadas y 5 firmantes del Acuerdo de Paz desaparecidos. Por su parte, la Unidad para las Víctimas (UARIV, 2025), señaló que entre enero y hasta el 17 de marzo había obtenido declaración sobre 9.417 eventos, de los cuales el 66 % correspondió a desplazamiento forzado y el 16 % a amenazas a la población civil. Si hay algo que se debe señalar es que esta emergencia ha estado profundamente marcada por el irrespeto a las normas de guerra enmarcadas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En el mismo sentido una de las personas entrevistadas afirmó:

"Hay una especie de operación de brazos caídos es que el ejército está así, mirando, como si fuera un par-



tido de fútbol, porque entonces uno empieza a analizar: ah bueno, entonces ¿al statu quo y a la inteligencia militar, será que le conviene, le sale más barato, que se maten estos huevones y destruyan el movimiento social? y nosotros estamos afuera". (Comunicación personal, 3 de septiembre de 2025).

De forma similar, un integrante de otra organización social concuerda con esta postura al definir la actuación de la Fuerzas Militares como un "dejar hacer, dejar pasar" y añade un supuesto interés y participación de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas en las economías ilícitas en connivencia con actores ilegales.

Aparte de la crisis humanitaria caracterizada por los ataques indiscriminados e involucramiento violento de la población civil, uno de los efectos más graves de este abrumador panorama, es la ruptura del tejido social de la región.

Primero, organizaciones sociales históricas del Catatumbo, que cobijan la mayor parte del movimiento social de la región[20], están de acuerdo en los factores estructurales que dieron cabida a la intensificación del conflicto armado en la región y el llamado a que se respete a la población civil. Sin embargo, han tenido diferencias y han tomado distancia en torno a las maneras de abordarlo bajo esta coyuntura. Por ejemplo, para unas es aceptable el decreto de conmoción interior desde la mi-

20 Como la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) y el Movimiento Comunal del Catatumbo (MCP).

rada de que el recaudo y paquete social y económico que dispone para la región puede permitir un abordaje estructural, mientras que, para otras, no es aceptable que a partir de eso se promueva su militarización con todas las implicaciones que sobre la población civil puede tener. Segundo, estas organizaciones y sus integrantes han sido sometidos por parte de los grupos armados a un fuerte perfilamiento y estigmatización, utilizando para ello campañas de difamación voz a voz y a través de redes sociales donde han sido señalados de pertenecer a uno u otro bando.

Consecuencia de ello, es que distintas Juntas de Acción Comunal no se encuentran funcionando de manera formal y normal y algunas de las organizaciones sociales han tenido que suspender provisionalmente su trabajo ante las pocas condiciones y garantías:

"Yo siento que el peor error que se pudo haber cometido en medio de la situación que hay es haber atacado al movimiento social. Eso en el marco de... se debió respetar, eso fue un error garrafal y volver a reconstruir confianzas y tejido en el departamento de Norte de Santander (...) va a ser muy complejo". (Comunicación personal, 9 de septiembre de 2025).

Entre abril y agosto de 2025 se documentaron nueve agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en el Catatumbo. De ellas, cinco correspondieron a amenazas proferidas por actores armados no identificados contra cuatro líderes comunales y una lideresa comunal en Ábrego, lo que provocó el desplazamiento de sus familias.

Una sexta agresión fue una amenaza atribuida al ELN contra un aspirante a una curul de paz en Hacarí. La séptima ocurrió cuando una lideresa comunitaria e integrante de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, junto con dos miembros de su familia, resultó víctima de una mina antipersonal en la vereda Miramontes, en Tibú. La octava fue el secuestro de la hija de un líder comunitario, presuntamente cometido por el ELN en ese mismo municipio. La novena fue el asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Milagro, en Tibú, atribuido al Frente 33.

5. Norte de Santander[21]

Norte de Santander no ha estado ajeno a la prolongada manifestación de violencia, como consecuencia de la exacerbación del conflicto armado en la región del Catatumbo y la confrontación armada por bandas de delincuencia organizada dentro de los principales municipios del departamento, que ha desencadenado en un inminente escenario de riesgo. En contraste con Santander, aquí la violencia criminal no ha desplazado a la violencia política, sino más bien se concatenan, ya que en este contexto estas bandas trabajan en muchos casos de manera directa para los intereses de los grupos armados organizados o cuentan con milicias urbanas bajo su mando, como el caso del ELN, quienes presuntamente cuentan con el frente urbano Carlos Germán Velasco con presencia en Cúcuta y su área metropolitana, en áreas rurales y urbanas, al igual que el Clan del Golfo con el frente "Luis Orlando Padierna Peña" y miembros de la subestructura del Frente 33 de las FARC.

En este escenario, las bandas locales y de carácter transnacional se dedican al narcotráfico y la extorsión de comerciantes principalmente e imponen su control territorial por medio de acciones deliberadas y actos amedrentadores hacia la población civil y sus contrarios. Es el caso de atentados con granadas en zonas urbanas y a plena luz del día como represalia al no pago de extorsiones, lo cual ha sembrado el terror dentro de los gremios de comerciantes y la población civil en general.

Algunas de las estructuras de criminalidad organizada identificadas y que se les atribuyen la mayoría de estos actos de violencia en el marco de una disputa territorial adelanta son "La Familia P" en cabeza de Ever Carreño Corredor, conocido como "Porras; y "Los Manzaneros" al mando de Jeison Omar Pabón Garavito, conocido como "Pepino". A estas dos bandas reconocidas en el área metropolitana de Cúcuta, se les sumó una nueva estructura de delincuencia organizada denomi-



21 Se excluyen los municipios del Catatumbo.

nada “Los Mexicanos”, quienes estarían al mando de un sujeto conocido como “Jota” y quien en este momento tiene una alianza desde el año 2024 con Jeison Omar Pabón “Pepino”, para confrontar a la banda “Familia P”. También, se denota según lo reportado por la institucionalidad y contrastado con las fuentes en territorios y medios, la presencia e incidencia en este fenómeno de la violencia en Norte de Santander de grupos transnacionales como lo son el Tren de Aragua y el AK-47.

Además, se ha documentado cómo estas bandas “ofertan” el servicio de sicariato, fungiendo como brazo armado de diferentes grupos armados de mayor alcance, como es el caso de la banda conocida como “Los toyoteros”, quienes trabajan presuntamente con el ELN. Por otro lado, dentro de esta dinámica también se evidencia al grupo transnacional AK-47 quienes ofertan esta clase de servicios a las diferentes estructuras.

Lo anterior ha generado un escenario de violencia para la región e incluso a nivel nacional que no puede pasarse por alto, siendo un contexto caracterizado por el sicariato y los atentados en la cotidianidad.

En 2025 se documentaron 314 hechos de violencia, entre aquella ejercida por los grupos armados por razones políticas y los casos atribuidos a la criminalidad organizada. En relación con la segunda y la disputa territorial que se adelanta en el área metropolitana de Cúcuta y demás municipios del Norte de Santander (excluyendo Catatumbo), fueron documentados entre enero y agosto 142 sicariatos consumados.

Por otro lado, en lo que se refiere a la violencia ejercida por razones políticas, se tiene registro de 117 hechos, de los cuales 37 corresponden a acciones bélicas por parte de grupos armados organizados; 72 se clasificaron como violencia político-social; 7 hechos se refieren a Infracciones al DIH, entre las cuales dos son atribuibles al ELN. Además, se registró el asesinato del líder comunal Luis Alfonso Toro Durán, quien en repetidas ocasiones habría denunciado amenazas en su contra por su ejercicio de liderazgo.

REFERENCIAS

Blanquicet, J., y Carvajal, A. (2025). *El laberinto sin salida del Catatumbo: Van 73 días de una guerra que no parece tener freno, ¿hay una solución? El Tiempo.* https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-laberinto-sin-salida-del-catatumbo-van-73-dias-de-una-guerra-que-no-parece-tener-freno-hay-una-solucion-3439744

Cabezas, J. (2025). *La arremetida del ELN en el Catatumbo: ¿Signo de su fortaleza o debilidad?* Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2025/03/La-arremetida-del-ELN-en-el-Catatumbo.pdf

Caicedo, L., y González, J. (2025). *Soldados del Ejército habrían transportado guerrilleros y les gastaron cerveza. Caracol Radio.* https://caracol.com.co/2025/08/18/soldados-del-ejercito-habrian-transportado-guerrilleros-y-les-gastaron-cerveza/

Defensoría del Pueblo. (2021a, 1 de octubre). *Alerta Temprana 023-21*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/023-21.pdf

Defensoría del Pueblo. (2021b, 10 de diciembre). *Alerta Temprana 028-21*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/028-21.pdf

Defensoría del Pueblo. (2023a, 30 de marzo). *Alerta Temprana 011-23*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/011-23.pdf

Defensoría del Pueblo. (2023b, 23 de agosto). *Alerta Temprana de Inminencia 028-23*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/028-23.pdf

Defensoría del Pueblo. (2023c, 28 de septiembre). *Alerta Temprana 034-23*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/034-23.pdf

Defensoría del Pueblo. (2024, 15 de noviembre). *Alerta Temprana de Inminencia 026-24*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/026-24.pdf

Defensoría del Pueblo. (2025a). *El Catatumbo después de la crisis: Desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario* [Informe]. https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3136595/Informe-Catatumbo-Web.pdf

Defensoría del Pueblo. (2025b). *Informe de Seguimiento No. 252 a la Alerta Temprana de Inminencia No. 026 de 2024* [Informe]. https://alertasstg.blob.core.windows.net/informes/252.pdf

Fundación Paz y Reconciliación. (2024, 13 de agosto). *Arauca: Un reto de frontera para la Paz Total*. https://www.pares.com.co/arauca-un-reto-de-frontera-para-la-paz-total/

Global Protection Cluster. (2025). *Arauca: Análisis de los riesgos de protección relacionados con el conflicto armado*. https://globalprotectioncluster.org/sites/default/files/2025-07/pau_arauca_julio_2025_final_esp.pdf

González, C. (2025). La ofensiva del ELN en el Catatumbo: Una perspectiva crítica sobre la reconfiguración del conflicto armado en esta región. En *Transformación territorial y reconfiguración del conflicto: Retos y propuestas para el Catatumbo* (pp. 7–12). Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2025/01/REVISTA-CATATUMBO_PUBLICATION.pdf

News Radio Arauca. (2025, 12 de mayo). *Denuncian control social, amenazas y corrupción de dirigentes en Saravena con supuesto apoyo del ELN*. https://newsradio.com.co/2025/05/denuncian-control-social-amenazas-y-corrupcion-de-dirigentes-en-saravena-con-supuesto-apoyo-del-eln/

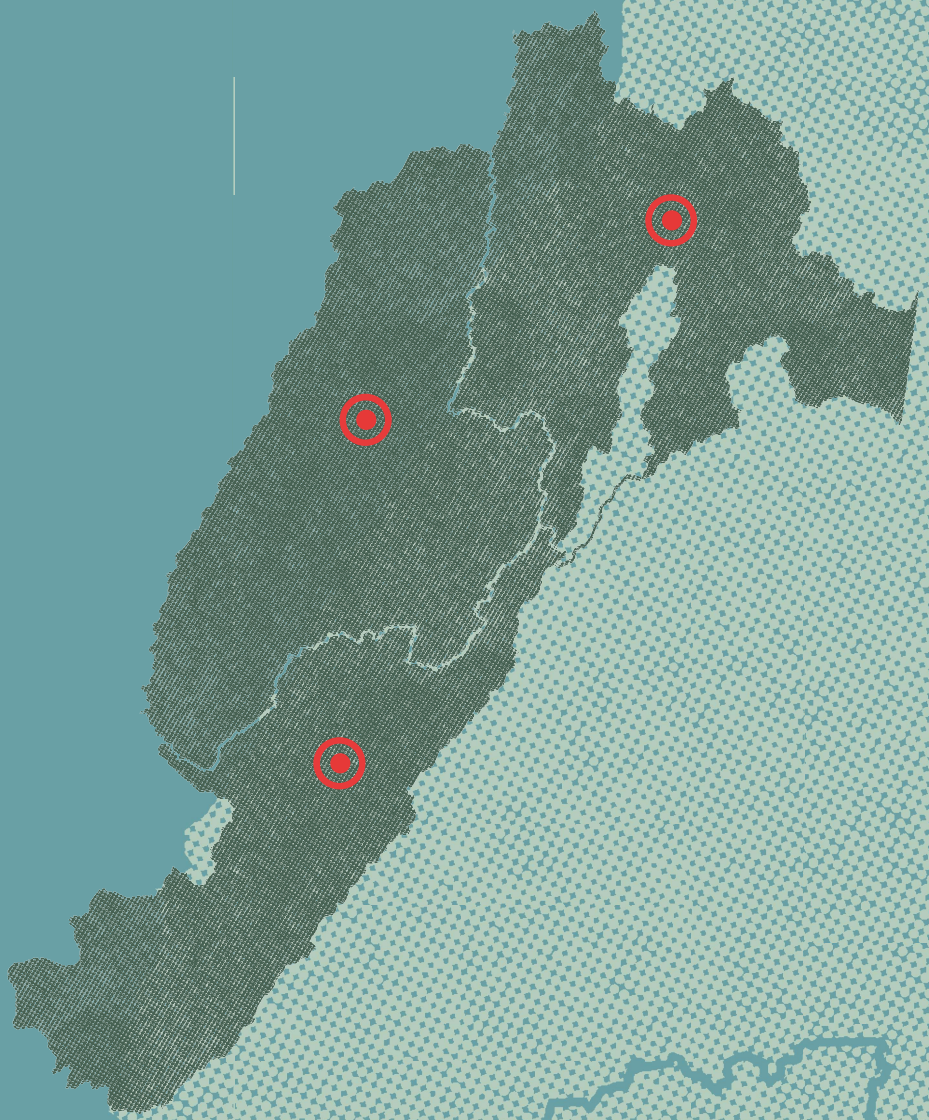
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2024, junio). *Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2023*. Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_informe_monitoreo_2023.pdfhttps://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_informe_monitoreo_2023.pdf

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. (2025, 30 de enero). *Alerta de situación humanitaria: Confinamiento en el distrito Purare, municipio de Tame (Arauca)*. Fecha de corte: 30 de enero de 2025. https://www.unocha.org/publications/report/colombia/alerta-de-situacion-humanitaria-confinamiento-en-el-distrito-purare-municipio-de-tame-arauca-fecha-de-corte-30-de-enero-2025

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2025). *Boletín Catatumbo: Edición 24: Emergencia humanitaria en el Catatumbo*. Observatorio de Datos para la Paz. https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/archivos/datosPaz/boletines/Catatumbo/BoletinCatatumbo-UARIV-Edicion24.pdf

CENTRO

BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA
TOLIMA - HUILA



CENTRO

El presente informe tiene como propósito dar a conocer a modo de acercamiento la situación de derechos humanos, el desarrollo y reconfiguraciones del conflicto armado y los impactos en la situación humanitaria en algunos departamentos que hacen parte de la articulación del Nodo Centro de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU) en el año 2025.

El nodo Centro está compuesto por organizaciones sociales y defensoras de DD.HH. que desarrollan su trabajo en Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Caldas, Quindío, Meta, Huila, Caquetá y en la capital del país, Bogotá D.C. Para efectos del presente informe, el análisis se centrará en dos regiones: Bogotá y Cundinamarca; Tolima y Huila.

La división temática que se presenta corresponde a los escenarios donde la violencia y gobernanza criminal se expresan de diferente manera, presentando diversas situaciones de vulnerabilidad en materia de derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y crisis humanitaria, producto de las confrontaciones y disputas por control territorial entre actores armados ilegales, los enfrentamientos con la fuerza pública y la poca efectividad e integralidad de parte del Estado para atender tal situación.

Para solucionar problemáticas de varias décadas atrás en estos territorios es una prioridad política entender la situación de derechos humanos como un reflejo de la agudización de distintos factores, entre ellos la carencia de una presencia integral del Estado y el incumplimiento de acuerdos y demandas de las comunidades y sus organizaciones sociales, como el propio Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las antiguas FARC-E.P.

Por lo anterior, una tesis que soporta este informe es la continuidad de un conflicto armado que tiene causas políticas, económicas y sociales, de exclusión y profundización de brechas sociales, las cuales siguen siendo motor y alimento de la violencia como forma de resolución de estas problemáticas.

La seguridad y la percepción de la población sobre ésta es otro de los elementos centrales para una mirada crítica de la situación de derechos humanos, debido a la persistencia de factores que evidencian la falta de presencia integral del Estado, la cual es aprovechada por actores armados ilegales para ocupar su lugar y ofrecer supuestos márgenes alternativos de solución a la inequidad

existente en los territorios.

Sin lugar a duda la violencia, sus formas de expresión y sus reconfiguraciones son pilares de la agudización de la violencia en el territorio. Los intereses están relacionados con el control de los territorios y la apropiación de la diversidad natural, dada su importancia para la obtención de recursos económicos y para el blanqueo de dinero obtenido por rentas ilícitas, así como su valoración como corredores estratégicos para la movilidad y expansión, entre otros.

La reconfiguración del conflicto armado, político y social pone de presente una discusión que implica análisis más extensos y profundos sobre los cambios sobrevinientes luego de la firma del Acuerdo de Paz. Sin embargo, es posible afirmar que la reconfiguración del conflicto se manifiesta a partir de: **i.** La diversificación y mutación de actores armados que no se acogieron al Acuerdo de Paz o que decidieron volver a tomar las armas, los cuales hoy se expresan con el nombre genérico de "disidencias", **ii.** La persistencia del proyecto paramilitar en Colombia con sus recambios, actores y relación con el Estado, y **iii.** Las discusiones alrededor de los intereses que mueven a los actores armados, su relación con el narcotráfico y el consiguiente debate sobre la existencia de motivaciones políticas reivindicables.

Ante esta situación la organización social de base, los liderazgos sociales y las comunidades tienen un rol determinante para mantener escenarios de resistencia a los impactos derivados de la violencia. Al tiempo son objeto de ataques, amenazas y presiones por parte de los actores armados ilegales y de la institucionalidad. Para ellos el territorio se entiende más allá de un mero espacio físico y de producción de riquezas; es un lugar de convergencia de identidades y propósitos colectivos, lo cual genera que estén más expuestos a los cambios territoriales y a la reconfiguración del conflicto armado, político y social.

Este informe pretende poner sobre el escenario del debate nacional y de las autoridades correspondientes la necesidad de adoptar planes de atención integral desde lo nacional y territorial para transitar desde escenarios de vulnerabilidad de derechos humanos y violencia hacia escenarios de construcción de paz y respeto a la vida.

EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN CRIMINAL

Bogotá

Para el caso de la capital del país, se consolidaron los contextos de riesgo que se habían advertido desde el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. La AT 046 de 2019, 010 de 2021 y la más reciente, la 004 de 2024 (Defensoría del Pueblo, 2019c, 2021, 2024), evidencia una consolidación criminal que busca el control de corredores estratégicos para la obtención de recursos económicos: contrabando, extorsión, distribución, venta y tráfico de armas y drogas. También se evidencia la presencia y el reciclaje de antiguas violencias entre estructuras criminales que actúan como agentes tercerizados de otras estructuras más grandes como el Clan del Golfo[1].

En las 20 localidades de Bogotá (19 urbanas y 1 rural) los repertorios de violencia y control territorial se expresan de manera diferencial. Los corredores estratégicos conectan las áreas conurbanas[2] y actúan como enlaces con zonas rurales de departamentos como Cundinamarca y el Meta, lo cual da cuenta del interés por controlar entradas, salidas y establecer puntos fijos de control hegemónico para la consolidación de estructuras criminales y actores armados ilegales.

Estas estructuras tienen una variada presencia y motivaciones diversas. En muchos barrios de las diferentes localidades hay presencia de estructuras del crimen transnacional como el Tren de Aragua, los cuales sostienen disputas territoriales con estructuras más locales que actúan bajo la sombrilla del Clan del Golfo. El epicentro de estas confrontaciones es el control de economías ilícitas como el narcotráfico, tráfico de armas, el control del espacio público de la ciudadanía para el desarrollo de actividades deportivas o recreativas, así como la trata de personas, la extorsión a los comerciantes y el blanqueo de dineros.

1 Se opta por la denominación de Clan del Golfo pues consideramos que es una estructura de origen paramilitar, por lo cual nos distanciamos de las pretensiones que esta organización armada, ilegal y paramilitar ha querido conseguir al autodenominarse Ejercito Gaitanista de Colombia (EGC). Asimismo, rechazamos la usurpación del ideario político del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán que hace este actor armado.

2 Bogotá puede considerarse una conurbación con varios municipios de la Sabana, especialmente Soacha, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Madrid y Cajicá, por la continuidad física de la urbanización y la intensa integración funcional expresada por movimientos diarios de población, empleo, servicios y transporte. Aunque no siempre estuvo constituida como área metropolitana bajo la legislación colombiana, el DANE la ha identificado como un sistema urbano-regional de Bogotá–Sabana, caracterizado por procesos de metropolización que trascienden los límites político-administrativos.



Las zonas de las localidades Chapinero (2), Santa Fe (3), Mártires (14) y Candelaria (17) dan cuenta del nivel de poder de estas estructuras y de las disputas. Resulta preciso señalar que entre los meses de febrero y marzo de 2025 se presentaron cinco ataques con granadas en el barrio San Bernardo de la localidad de Santa Fe, donde cuatro personas murieron y alrededor de 29 resultaron heridas (Castellanos, M., 2025), lo cual dejó serias dudas sobre la capacidad institucional para controlar y garantizar seguridad en estos sitios, así como para desarticular las estructuras criminales que se muestran capaces de consolidar santuarios criminales amparados por años de abandono institucional.

Es preciso indicar que en los alrededores de estas tres localidades se mueve una red con capacidad logística, control territorial y confrontación armada, de tráfico de armas, extorsión y trata de personas con fines de explotación sexual. Un hecho que también generó serias dudas sobre la capacidad del Distrito y de la Policía Nacional es la denuncia del entonces presidente de la República donde alertó que en cercanías de la Casa de Nariño fueron descubiertos dos lanzacohetes de fabricación rusa, al parecer uno de ellos en condiciones de ser usado (Malaver, C., 2025).

La denuncia despierta preocupación toda vez que en un primer momento el hallazgo fue ocultado por la Policía Nacional y, posterior a ello, pudo verificarse que estos lanzacohetes habían sido propiedad de un exintegrante del Ejército Nacional. Este hecho trae

consigo también la preocupación porque en la capital del país se consigan armas de fuego y material explosivo de alto poder letal, que fortalecen el aparato militar de las diferentes estructuras armadas o para cometer los diferentes homicidios en la ciudad, como los casos de sicariato contra reconocidos comerciantes de esmeraldas al norte de la ciudad, los cuales se han vuelto reiterativos.

También ha sido frecuente la represión y los ataques a quienes hacen uso del derecho a la protesta social. En una de estas acciones hubo agresión con palos y garrotes a activistas que protestaban en las inmediaciones de la Universidad Nacional (Fundaprocol DH, 2025).

Pero no solo es la presencia de estructuras criminales de orden transnacional o local, independiente de que estas actúen y sean funcionales a otras como al Clan del Golfo. Se ha advertido que en la capital convergen otros actores armados como las disidencias de las FARC, en específico del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y el Estado Mayor Central (EMC), con propósitos de orden logístico o de reclutamiento. Hacia la zona rural de la localidad 20 (Sumapaz) el Frente 53 Édison Romaña de la Segunda Marquetalia ha intentado retomar el control territorial.

Aunque no se logra identificar un control específico de las disidencias de las FARC sobre barrios, se denota interés por establecer puntos que les permitan controlar la seguridad sobre sus integrantes y redes de logística, aunque aún no es una certeza si han pactado acuerdos con organizaciones criminales de orden local. También hay presencia de manera esporádica y en momentos específicos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través del Frente de Guerra Urbano-Nacional.

Ante la presencia de actores armados en la capital del país es fundamental señalar el rol que cumple la fuerza pública, toda vez que se reacciona con negacionismo frente a los procesos de consolidación de los diferentes actores armados. Por ejemplo, desde la Policía Nacional se desconoce de manera pública, contra toda evidencia, la presencia de estructuras como el Clan del Golfo. En audiencia pública citada por la comisión primera de la Cámara de Representantes en mayo de 2025 sobre la situación de seguridad, violencia y paz en Bogotá, el Brigadier General Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá afirma que, por conocimiento propio, el Clan del Golfo no tiene presencia en la ciudad. Esto contradice las advertencias que se

han realizado desde la Defensoría del Pueblo y las denuncias de organizaciones de DD.HH. sobre la cada vez más evidente presencia y control de esta estructura paramilitar en localidades como San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe.

La ausencia o ineficacia de medidas de protección frente al control violento en barrios marginados y la persecución a liderazgos sociales se fundamenta en la actitud negacionista de la presencia de estructuras armadas. No se combate lo que no se reconoce.

En el contexto de los procesos electorales de 2026, el comandante de la Policía de Bogotá negó la presencia paramilitar y del Clan del Golfo en Bogotá. En declaraciones a Semana el 4 de marzo de 2026 (en el contexto de seguridad para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes), afirmó que en su recorrido por las 19 localidades no detectó evidencia de ese grupo delincuencial y atribuyó las versiones sobre su presencia a "diarrea verbal" de algunos ciudadanos que no corroboran la información (Semana, 2026).

A pesar del negacionismo por parte del Comandante de la Policía, los informes de inteligencia de la fuerza pública han reconocido que el Clan de Golfo ha estado empeñado en una guerra con el Tren de Aragua por el control de territorios y economías ilegales, para lo cual incluso revelaron que trasladarían cerca de 100 de sus sicarios, pues "la orden es matarlos, toca matar a 200 personas", según transcripciones de interceptación de comunicaciones por organismos de inteligencia reproducidos por la prensa (El Tiempo, 2026).

Este tipo de afirmaciones cuestionan las medidas que se adoptan para hacer frente a estas denuncias sobre presencia de actores armados, dado que si se desconoce



su presencia es probable que las acciones para disminuir los factores de riesgo que genera su accionar delictivo sean poco eficaces.

Además, es motivo de preocupación, la connivencia entre grupos armados y fuerza pública, más aún al quedar al descubierto la participación de integrantes del Ejército Nacional en redes de tráfico de armas en la ciudad de Bogotá y Tolima (Malaver, C., 2025)[3].

La actuación del paramilitarismo en Bogotá salió a relucir con las investigaciones sobre las muertes de empresarios esmeralderos, en los que estructuras vinculadas al Clan del Golfo estarían actuando por intermedio de la Oficina de cobros de San Andresito de la 38. Dicha oficina estuvo dirigida en el pasado por hombres de confianza de los exjefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño Gil y en la actualidad estaría vinculada a los grupos esmeralderos, que han forjado alianzas con el Clan del Golfo para "adueñarse de rutas del narcotráfico, rentas de lavado de activos y recuperar bienes en poder de testaferros".

Las investigaciones de la Fiscalía han constatado que esta oficina habría contado con la colaboración de miembros de la fuerza pública.

Un hecho que puso en evidencia la connivencia entre fuerza pública y paramilitarismo fue la colaboración de agentes estatales con la fuga del jefe narcoparamilitar alias Matamba de la cárcel La Picota, disfrazado de agente del INPEC. En este hecho se constató que agentes uniformados de la Policía ayudaron a borrar videos de cámaras de seguridad de Bogotá que registraron el vehículo en el que escapó Matamba (El Espectador, 2025).

También se han configurado en la ciudad movimientos que albergan rechazo y discursos de odio contra el movimiento social y popular, en hechos que demuestran procesos de fascistización social y paramilitarización de amplios aspectos de la vida social. La proliferación de organizaciones llamadas neonazis, portadoras de discursos fundamentalistas junto con las estrategias oficiales de vinculación de la ciudadanía a cuestionables dinámicas de seguridad poco convencionales que se expresan en Bogotá en la creación en masa de Frentes de Seguridad o programas como Gestores del Orden y, por último, el papel activo que desempeñan miembros retirados de las FF.MM. conocidos como veteranos y que, bajo el supuesto de una participación y

3 La Fiscalía reportó una red de tráfico de armas en la que participaban integrantes de la Policía Nacional, que utilizaban vehículos oficiales para transportar armamento en Bogotá. Incluso un uniformado que hizo parte del esquema de protección de la exvicepresidenta Martha Lucia Ramírez era parte de la red (Unidad Investigativa, 2025).

oposición política, han acrecentado la persecución a los liderazgos y procesos sociales con hechos de agresiones, perfilamiento y estigmatización contra movimientos sociales y populares.

Lo anterior evidencia la preocupación por las condiciones en las que las organizaciones sociales, los liderazgos y las personas defensoras de derechos humanos desarrollan su labor en Bogotá. Gran parte de las situaciones de riesgo documentadas y puestas en conocimiento de las autoridades distritales por la Mesa Territorial de Garantías de Bogotá reflejan, por un lado, la existencia de violencias que permanecen invisibilizadas debido al subregistro y a la baja denuncia. Esta situación está estrechamente relacionada con la limitada confianza de las víctimas en las instituciones encargadas de brindar protección, investigar los hechos y garantizar el acceso a la justicia.

Por otro lado, la información recopilada evidencia que colectivos culturales y juveniles que promueven iniciativas comunitarias y contraculturales en sus territorios y se oponen a las dinámicas de instrumentalización ejercidas por redes de narcotráfico y otras estructuras criminales son objeto de hostigamientos, intimidaciones y acciones de censura que restringen el ejercicio de su labor y afectan el ejercicio de los derechos a la participación, la asociación y la defensa de los derechos humanos.

Hay que hacer mención del caso de los liderazgos sociales Camilo Sánchez y Camila Ospitia en el municipio de Soacha. El caso generó un amplio rechazo por parte de organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales, al poner de manifiesto que las amenazas contra quienes desarrollan procesos comunitarios, culturales y de defensa de derechos trascienden los límites administrativos de Bogotá y se extienden a los municipios que conforman su entorno metropolitano. Este hecho reafirma la necesidad de comprender las dinámicas de violencia desde una perspectiva regional, teniendo en cuenta la estrecha articulación territorial y social existente entre Bogotá y la Sabana.

Esta situación encuentra respaldo en el informe anual Promesas rotas del Programa Somos Defensores, el cual documentó 874 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos durante 2025, incluidas 165 asesinatos, constituyéndose en el año con mayor violencia letal contra este sector durante el actual gobierno. El informe advierte, además, que la violencia selectiva se ha extendido y concentrado pro-

gresivamente en ciudades capitales, ubicando a Bogotá D.C. entre los principales escenarios de agresiones, lo que evidencia que los riesgos para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos trascienden los contextos rurales y se consolidan también en entornos urbanos (Programa Somos Defensores, 2026).

Estos hechos demuestran cómo se han fortalecido las narrativas que buscan justificar el regreso de políticas de seguridad en las que no se prioriza el respeto por los derechos humanos y el DIH. Estas posturas parten de la idea de que este enfoque habría "amarrado las manos" de la Fuerza Pública y limitado su capacidad de actuar, convirtiéndolo, supuestamente en una de las causas de la situación inseguridad ciudadana y los riesgos que enfrenta la ciudadanía. Esta lectura simplista ha cobrado fuerza por la aparición de voces de claman por el retorno a las prácticas asociadas con la Seguridad Democrática, la mano dura y políticas de cero diálogo, así como el rechazo a los procesos de paz. De este modo, se posiciona la idea de que estas medidas son las únicas capaces de responder a los problemas en seguridad, incluso cuando se promueven iniciativas preocupantes como la asignación de funciones de seguridad a la ciudadanía.

Frente a estas dinámicas, la Alcaldía Distrital se ha mostrado como un aliado de quienes impulsan este tipo de narrativas y discursos, mientras deja en segundo plano propuestas orientadas a abordar los problemas estructurales de violencia desde enfoques de convivencia, derechos humanos y prevención de los riesgos. Estas alternativas podrían contribuir a enfrentar las causas de las violencias que se han extendido en la ciudad y a construir respuestas de seguridad que no se limiten a medidas represivas.

Cundinamarca

El departamento de Cundinamarca es el tercero más densamente poblado de Colombia. Está ubicado en la parte centro del país y está atravesado por la Cordillera Oriental. Este departamento alberga una gran variedad de paisajes y climas que abarcan desde zonas templadas hasta páramos y sabanas, siendo así un sitio de vital importancia para el país por ser despensa agrícola y acuífera. Cundinamarca cuenta con 116 municipios, entre los que está la capital: Bogotá.

En este orden de ideas, Cundinamarca no está a salvo de vivir diversas violencias que se desarrollan de manera silenciosa para consolidarla influencia y el con-

trol territorial de estructuras armadas ilegales relacionadas con economías ilícitas o lícitas.

La Defensoría del Pueblo (2018, 2020, 2021, 2022a) expresa que la situación de derechos humanos en Cundinamarca se vive un reciclaje de violencias causado el vacío de poder tras la firma del Acuerdo de Paz, que fue aprovechado por nuevos y viejos actores armados que hoy se disputan corredores, economías ilícitas y el control social mediante la intimidación. De forma que la salida de las antiguas FARC no se tradujo en seguridad ni en fortalecimiento institucional, sino en la reconfiguración de actores armados ilegales que buscan controlar zonas rurales estratégicas y municipios del corredor occidental. Este último, guarda también una relación con las advertencias por la Defensoría realizadas para el caso de Bogotá.

La violencia directa contra líderes sociales y comunidades deriva de la expansión de economías ilegales (extorsión, narcotráfico) y el lavado de activos a través del aprovechamiento de economías lícitas, primordialmente en zonas de explotación de minerales y la persistente estigmatización de la protesta social y la defensa ambiental. Esto último es especialmente grave, pues erosiona el ejercicio democrático y convierte a quienes defienden derechos en objetivos de violencia por diversos actores armados ilegales, principalmente debido a la consolidación del Clan del Golfo como estructura predominante luego del Acuerdo de Paz y su confrontación con el Tren de Aragua por los mercados de economías ilegales.

En Cundinamarca, la defensa de la tierra, el agua y la vida ejercida por organizaciones sociales y campesinas es uno de los principales ejes de la disputa social y política, donde el ejercicio de defensa de derechos ha sido estigmatizado desde una institucionalidad que ignora los riesgos asociados a la violencia derivada del conflicto armado y en el que además señala y estigmatiza a los liderazgos sociales como un actor más dentro del conflicto. Tal como lo señala la Defensoría (2022a), la prevención temprana, la articulación interinstitucional y el acceso efectivo a la justicia son indispensables para evitar que el miedo y la violencia sigan marcando el rumbo de comunidades y liderazgos.

La alerta temprana 005-22 (Defensoría del Pueblo, 2022a) es la más reciente, pues desde entonces el departamento no ha vuelto a ser objeto de advertencias estructurales. En ésta se advierte que el Sumapaz no es solo un te-



rritorio geoestratégico, sino un escenario histórico de luchas campesinas, ambientales y sociales, así como un corredor vital donde las estructuras armadas intentan tener control territorial y presencia bajo las lógicas de expansión armada, logística y de control sobre las dinámicas territoriales de la vida social y política. Esta realidad, asociada con las dinámicas de consolidación criminal que se vienen acentuando hacia la capital del país, se expresa en lógicas estratégicas de recuperación de territorio por los actores armados, poniendo en evidencia el fracaso de la estrategia de recuperación de la presencia institucional por la vía de fuerza, la cual resulta insuficiente sin una verdadera acción institucional integral que ataque los problemas estructurales que motivan la continuidad del conflicto armado.

La Alerta plantea una reflexión profunda que explica que la paz no se construye únicamente con la desmovilización de un grupo armado, sino con garantías reales de protección, justicia y desarrollo social para las comunidades. La persistencia de estigmas y la criminalización de defensores ambientales revelan que la deuda estatal histórica con el Sumapaz y con Cundinamarca sigue vigente.

Por otro lado, los casos de Guaduas y Chaguaní, municipios estratégicos del Bajo Magdalena y Centro, muestran cómo las economías ilegales, asociadas al control de corredores estratégicos, se sostienen sobre la base de la violencia contra campesinos y defensores de tierras. Al tiempo, municipios como Soacha y Sibaté evidencian la dimensión urbana del conflicto, donde los jóvenes son usados por estructuras criminales incluso de orden transnacional como es el Tren de Aragua para la consolidación criminal en todas sus dimensiones, aprove-

chándose de del abandono estatal expresado en la debilidad de ofertas institucionales de educación y empleo, que favorece que los ilegales crezcan mediante el reclutamiento forzado de jóvenes.

En este sentido, se ven tres factores que pueden ser objeto de mayor análisis en la situación del departamento de Cundinamarca, teniendo presente que su extensión territorial y zonas diversas son objeto de distintos intereses, con un claro común denominador que es la consolidación de planes criminales para el avance del control de todos los ámbitos de la vida social, política y económica.

1. Una dimensión rural y ambiental donde se disputan visiones e intereses sobre el uso de la tierra, conflictos ambientales y planes de ordenamiento que amenazan la vida del campesinado, al tiempo que se refleja una creciente amenaza por actores armados ilegales con presencia creciente, primordialmente el Clan del Golfo.

2. Una lógica urbana, donde en las principales cabeceras municipales que transitan hacia grandes centros poblados, como es el caso de Soacha, se expanden la continuación de lógicas de presencia violenta y control económico, con expansión criminal primordialmente ligada al microtráfico y otras economías ilícitas

3. La transición inacabada del conflicto armado, en donde por un lado se observa cada vez más la presencia de distintos repertorios de violencia y riesgos crecientes hacia la población y por otro, la cada vez menor capacidad institucional para reconocer los factores de violencia estructural y enfrentarlos de manera integral.

En este sentido, la tarea y acción institucional no puede limitarse a fortalecer la seguridad desde una perspectiva del incremento del pie de fuerza y figuras poco convencionales como Frentes de Seguridad, Guardianes del Orden o Bloques de Seguridad Urbana, sino que debe centrarse en consolidar el Estado social de derecho con una presencia integral en los territorios (La W, 2025). De entrada, esto supone la superación de las brechas sociales que son evidentes entre lo urbano y lo rural, posibilidades de reconocer al departamento como un enclave estratégico y de desarrollo para el país, pero en donde el reconocimiento de los factores de riesgo y de violencia, supondría atacar de raíz el negacionismo hasta ahora prevaleciente sobre el accionar de actores ilegales y, primordialmente, actuar sobre los problemas sociales y económicos que generan exclusión y marginación social, los cuales conllevan costos en precarización social de la ju-

ventud, que se convierte en centro de la disputa y en motor crucial para el aprovechamiento de los actores armados ilegales en sus estrategias de crecimiento y expansión.

INTENSIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE CONFLICTO ARMADO Y ESCENARIOS DE DISPUTA POR EL CONTROL TERRITORIAL

Tolima

El departamento del Tolima está ubicado en el centro-occidente de Colombia, en la región Andina. Es un territorio de gran importancia geoestratégica por ser un corredor natural entre el centro, el occidente y el sur del país. Limita al norte con Caldas, al oriente con Cundinamarca y Meta, al sur con Huila y Cauca, y al occidente con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. Cuenta con una extensión aproximada de 23.562 km^2, equivalentes a cerca del 2 % del territorio nacional, su capital es Ibagué y está conformado por 47 municipios.

Este departamento ha sido históricamente una pieza fundamental para el desarrollo de las dinámicas del conflicto armado, político y social en Colombia, particularmente por su posición geográfica. Es por ello que este apartado centrará su análisis en dos zonas de vital importancia en el departamento del Tolima y que desde un punto de vista de seguridad y conflicto armado han sido y son ahora mismo ejes centrales de la situación de DD.HH.

En primer lugar, la zona montañosa del sur del departamento, especialmente los municipios de Planadas, Rioblanco, Ataco y Chaparral conecta con los departamentos de Huila, Cauca y Valle del Cauca a través de la Cordillera Central, lo cual facilita la movilidad de actores armados ilegales y el establecimiento de corredores para economías ilícitas. En segundo lugar, el valle del río Magdalena es uno de los principales ejes de integración económica y de comunicación terrestre del país. Estas características geográficas explican la importancia histórica y actual dentro de las dinámicas del conflicto armado y de las estrategias de control territorial desarrolladas por distintos actores armados.



La zona norte del departamento cumple un papel estratégico dentro de la región del Magdalena Medio, ya que municipios como Honda, Fresno, Mariquita, Ambalema y Armero (Guayabal) mantienen una conexión con el río Magdalena, el cual ha funcionado como un articulador del comercio, la cultura y la movilidad. Por esta misma razón ha sido un escenario de disputas territoriales por su control al ser un corredor clave para actores armados ilegales, lo que ha intensificado diversas dinámicas de violencia en el territorio donde desde mediados de los años 80, el paramilitarismo ha logrado acentuar una presencia casi que hegemónica.

La región del norte y el sector nevados integra 15 municipios[4] en los que no se reportaron enfrentamientos armados, masacres, homicidios a liderazgos sociales o atentados. Sin embargo, se considera un escenario de riesgo y de otros hechos sistemáticos que vulneran los derechos humanos como son: la extorsión, sicariato, narcotráfico, lavado de activos, control de economías extractivas tanto legales como ilegales en proyectos minero-energéticos primordialmente las asociadas al oro e hidroeléctricas, reclutamiento de menores, corrupción, constreñimiento electoral y existencia de alianzas entre actores armados ilegales y empresas.

Estas acciones son llevadas a cabo por actores armados que buscan expansión y consolidación territorial. Cobra relevancia el proceso de consolidación que despliega el Clan del Golfo a través del Frente Ramón Izasa pues, aproximadamente desde el 2023, se viene alertando la existencia de planes que han proyectado el grupo armado para consolidarse en los municipios del Norte del Tolima y establecer su dominio sobre el corredor estratégico que conecta al centro del país con el oriente caldense y antioqueño, el cual tendría proyección hacia el Magdalena Medio.

El Clan del Golfo ha establecido acuerdos de subordinación con estructuras delincuenciales de orden local (*outsourcing* criminal), pero conservando en algunos casos ciertas autonomías. Esta estrategia, que se identifica como un patrón nacional, ha favorecido la expansión territorial en el departamento y ha evitado la confrontación en distintos frentes, lo que a su vez les permite la comisión de delitos específicos como los ataques a liderazgos sociales sin que se les atribuyan los hechos directamente.

4 La zona norte está integrada por los municipios de Ambalema, Armero, Falan, Fresno, Honda, Mariquita, Palocabildo y la zona nevados por Casabianca, Herveo, Lérida, Líbano, Murillo, Santa Isabel, Venadillo y Villahermosa.



La Defensoría del Pueblo (2019a, 2019b, 2019d, 2022a, 2023, 2025) evidenció que las dinámicas del conflicto y la violencia que se presentan en el territorio giran en torno al interés de controlar las economías ilícitas. El control territorial que imponen los diversos actores armados se realiza a través de imposición de normas de conducta, de horarios y reducción de movilidad de los y las habitantes de diferentes municipios, así como del empadronamiento y carnetización a población civil y defensores de Derechos Humanos. Estas prácticas se repiten como un patrón generalizado en las dinámicas de conflicto armado a nivel nacional, en donde cada actor quiere establecer controles autoritarios e impositivos.

El departamento del Tolima viene pasando por escenarios de profundización del conflicto armado, que se refleja en la delicada situación de los derechos humanos y afectación humanitaria. La región ha sido históricamente un epicentro para el desarrollo del conflicto en el país, incluso desde antes de los bombardeos a la población y cooperativas campesinas que dieron origen a las FARC en esta región.

Sin embargo, es necesario precisar dos situaciones de afectación en la actualidad. Primero, la presencia del Estado Mayor Central de las disidencias de FARC y del Clan del Golfo representa en el momento un punto de inflexión, que se ve expresado, por un lado, en la expansión y consolidación, reclutamiento, regulación y control territorial sobre economías lí-

citas e ilícitas y, por otro, en el recrudecimiento de las hostilidades armadas entre estos actores y con la fuerza pública. En este sentido, su presencia representa un doble riesgo para el ejercicio de defensa del territorio de organizaciones sociales, campesinas y defensoras de los derechos humanos: por un lado, viven amenazas y asesinato de liderazgos sociales y, por el otro, son estigmatizaos y perfilados por parte de la institucionalidad que los califica como colaboradores de los actores armados ilegales, lo cual pasa en medio de la pasividad o connivencia de los organismos de control disciplinario.

Durante los últimos cuatro años, la presencia de los frentes Ismael Ruiz y Gerónimo Galeano en la zona sur del Tolima, la cual conecta con corredores estratégicos de movilidad hacia departamentos cercanos como el Huila, ha sido de constante crecimiento y expansión. En consecuencia, la explotación minera les permite tener control territorial, crecer en número de combatientes y acentuar su presencia en territorios históricamente abandonados por la institucionalidad. Aun así, la acción de la fuerza pública parece no estar centrada en desmantelar estas estructuras sino en permitir su presencia y expansión, siempre y cuando ello no conlleve ataques directos contra ellos, lo cual repite una lógica de connivencia.

Por su parte el Clan del Golfo parece ganar terreno en escenarios de gobernanza criminal en los centros urbanos. Dicha expansión deriva de un plan de crecimiento y fortalecimiento de estructuras dirigido desde la zona norte del departamento y del corredor estratégico hacia la zona limítrofe con el Magdalena Medio, donde el Frente Ramón Izasa es el principal articulador. Su interés se centra primordialmente en controlar rentas ilícitas, el lavado de activos mediante las actividades comerciales "legales", así como el control poblacional.

Como aspecto novedoso dentro de las dinámicas del accionar armado de organizaciones que actúan bajo la sombrilla, permiso y pactos con el Clan del Golfo es el ejercicio del control criminal y la extorsión mediante prácticas de engaño esotérico, espiritual o rituales de brujería en que involucran amplios sectores de la población. Si bien, aparentemente no se estaría en presencia de actividades ilegales, sí configuran, según las numerosas denuncias instauradas en la Fiscalía y la Policía Nacional, una forma novedosa de extorsión donde el mecanismo no es la violencia física, sino la coerción psicológica con la que se logra intimidar a las víctimas.

Esta forma de captación de recursos les permite a las organizaciones de delincuencia organizada recaudar grandes sumas de dinero que hasta hoy no están cuantificadas.

El funcionamiento de esta forma de extorsión que llevó a la gobernadora Adriana Magali Matiz a buscar ayuda de la embajada de los Estados Unidos para desmantelar estas redes criminales, puede resumirse en cuatro momentos.

1. Primero se capta a la víctima por medio de anuncios publicitarios en redes sociales o con la entrega de volantes en las calles que promocionan los servicios de los brujos o centros esotéricos que ofrecen solución de problemas económicos, espirituales o emocionales, relacionados con la búsqueda de suerte en el dinero o en el amor.

2. Una vez que la persona solicita los servicios, comienza una etapa de construcción de la confianza. A través de lectura del tarot, rituales de santería y otras prácticas, estos centros elaboran un supuesto diagnóstico espiritual y emocional de la persona. Con frecuencia, parten de la identificación de un supuesto maleficio del que la víctima ha sido objeto.

3. Cuando la víctima está convencida de la seriedad del maestro espiritual, se aprovechan sus miedos y preocupaciones para generar dependencia. Después de una o varias consultas, pueden aparecer advertencias sobre posibles consecuencias negativas, como la pérdida del patrimonio, problemas familiares o inestabilidad afectiva. A continuación, se ofrecen rituales y otros servicios como supuestas soluciones, inicialmente a bajo costo.

4. Durante el proceso la víctima ha proporcionado información sobre su vida, sus relaciones afectivas, su intimidad y su entorno.



Esta información es utilizada posteriormente para ejercer presión sobre ella. El caso pasa entonces de una posible estafa a una situación de extorsión, mediante amenazas, exigencias económicas e incluso acciones de señalamiento o linchamiento social a través de redes sociales. Así, las organizaciones criminales utilizan las amenazas y la violencia para exigir dinero a cambio de detener las intimidaciones o evitar nuevas agresiones

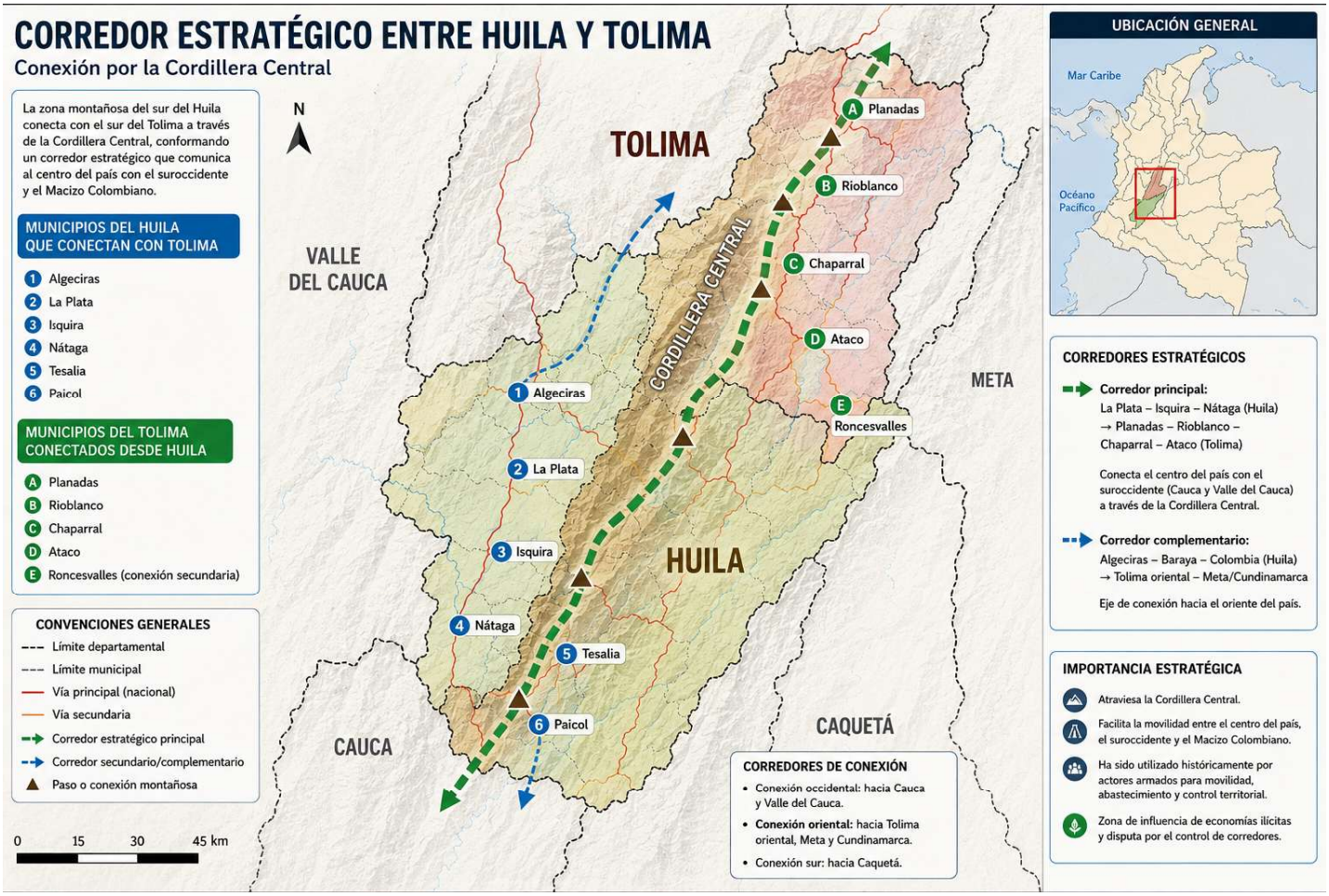
Este entramado se ha instrumentalizado de manera eficaz como medio de coerción y control social y territorial por los actores armados ilegales que han logrado articularlo para ejercer gobernanza criminal sobre la población que, por lo general se trata de personas de estratos socioeconómicos bajos y población campesina.

Adicionalmente, al parecer, estos centros esotéricos también estarían articulados con organizaciones vinculadas a delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos.

Huila

El departamento del Huila está ubicado en la región andina, al suroeste del país y guarda estrecha relación con el contexto del Tolima. Durante 2025 enfrentó una situación compleja en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esta situación se deriva de una ruptura debido a los incumplimientos estatales reiterados al Acuerdo de Paz y a los procesos de consolidación y expansión de los actores armados ilegales.

Son precisamente los municipios más cercanos a Tolima (Algeciras, la Plata, Íquira, Nátaga, Tesalia y Paicol) los que enfrentan la situación más delicada por la reconfiguración de las dinámicas del conflicto armado, primordialmente por el control que ha logrado consolidar el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC.



Interconexión estratégica y corredores económicos y de movilidad entre los departamentos de Tolima y Huila. Mapa elaborado por los autores con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

La injerencia que tienen las disidencias de las Farc, principalmente el EMC a través de la compañía móvil Arlex Vargas del Bloque Central Isaías Pardo, ha suscitado un escenario de riesgo latente. No solo hay presencia del EMC, pues luego de su proceso de ruptura interna, en el departamento tiene presencia el Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de FARC con el frente Iván Diaz perteneciente al Bloque Jorge Suarez Briceño, actuando en la zona de Algeciras, Campoalegre y hacia el corredor que va al Tolima. Esto genera una constante incertidumbre entre la población civil por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre ambas estructuras de disidencias.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el reingreso de estructuras pertenecientes a la Segunda Marquetalia como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con los propósitos de recuperar el corredor que actualmente se disputa el EMC y el EMBF de las disidencias de las FARC. Su presencia no implica una consolidación territorial, pero se evidencian in-



tenciones de expansión de parte de los Comandos de la Frontera por los lados limítrofes del Huila con el corredor Amazónico (San Agustín y Pitalito).

Este panorama de fuerte presencia de actores armados ilegales con voluntad de control territorial, capacidad de combate y expansión se contrapone con la presencia de un gran componente de Fuerza Pública, representada por el Ejército Nacional, que refuerza su presencia a través de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales (FUDAT) cuya función específica es combatir estructuras dedicadas al narcotráfico. Se concreta esta presencia con los llamados Grupos de Caballería Livianos y de Combate (GRULL) conformados por tres pelotones y que apoyan las labores y operaciones militares de la Quinta División y de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA N° 5).

Aunque el departamento no registró una crisis humanitaria de la magnitud que se observa en regiones como el Catatumbo, Cauca o Chocó sí presentó un deterioro progresivo de las condiciones de seguridad en varios municipios del occidente, norte y sur del departamento, con impactos directos sobre comunidades campesinas, personas defensoras de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y autoridades locales. Estas dinámicas estuvieron asociadas al fortalecimiento de corredores estratégicos que comunican al Huila con Tolima con los departamentos de Cauca, Caquetá y Meta, territorios donde confluyen economías ilícitas y disputas por el control territorial para la consolidación de espacios de gobernanza criminal.

Uno de los principales factores de riesgo es la expansión y consolidación del Estado Mayor Central (EMC) en municipios como Algeciras, Colombia, Baraya, Tello, Íquira, La Plata, Garzón y Gigante. La Defensoría del Pueblo advirtió que estas estructuras han fortalecido corredores de movilidad entre Huila, Tolima, Cauca y Caquetá, lo cual ha incrementado el riesgo de enfrentamientos armados, restricciones a la movilidad de la población civil, extorsiones y otras formas de control social (Defensoría, 2026).

Las personas defensoras de derechos humanos continuaron enfrentando un escenario de alto riesgo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó la persistencia de amenazas, hostigamientos y homicidios contra líderes y lideresas sociales en el departamento. Incluso quienes hacen parte de la Mesa Territorial de Garantías del Huila enfrentaron riesgos derivados de su participación. Los principales riesgos recayeron sobre liderazgos campesinos, comunales, ambientales y personas comprometidas con la implementación del Acuerdo de Paz. Este contexto evidencia la persistencia de patrones de violencia dirigidos contra quienes ejercen labores de representación comunitaria y defensa de derechos.

El crecimiento desbordado del reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes ha creado una nueva situación de riesgo para las personas que defienden derechos humanos, dadas las amenazas a quienes se atreven a denunciar esta situación. Según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, "los liderazgos sociales están acorralados; son privados de sus libertades a opinar o a moverse en el territorio; hay amenazas, homicidios y desconfianza para denunciar ante las autoridades; hay extorsiones; los niños, las niñas y los adolescentes están siendo reclutados; no tienen paz" (OACNUDH, 2025).

Las comunidades rurales del departamento enfrentaron diversas afectaciones derivadas del conflicto armado. Entre los principales riesgos identificados se encuentran las amenazas, las restricciones a la movilidad, el incremento de la extorsión, el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como la presencia de artefactos explosivos improvisados en áreas de influencia de grupos armados. Estas dinámicas impactan de manera diferenciada a la población campesina y limitan el acceso efectivo a servicios de salud, educación, justicia y programas estatales, profundizando las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades rurales y sus liderazgos.

Se debe tener en cuenta que Huila tienen una presencia significativa de personas en proceso de reincorporación. Durante 2025 persistieron las amenazas y los riesgos contra firmantes del Acuerdo de Paz, situación que ha generado preocupación respecto de las garantías de seguridad necesarias para su implementación integral. La permanencia de estructuras armadas ilegales y las



limitaciones institucionales en algunas zonas rurales han incidido negativamente en la consolidación de los procesos de reincorporación y en el desarrollo de proyectos productivos.

Igualmente, se han incrementado prácticas de naturaleza paramilitar como la "limpieza social" en contra de niños, niñas y jóvenes marginados, lo cual genera nuevas situaciones de temor e incertidumbre en las personas que defienden derechos y quisieran denunciar estas situaciones. Durante el primer semestre de 2025 solamente en Neiva se presentaron 48 homicidios, de los cuales 12 correspondían a menores de edad. La mayoría habitaban en las comunas más marginadas de Neiva (las comunas 6,8, 9 y 10). Sobre estas muertes de menores, el secretario de Gobierno de Neiva expresó, en tono de justificación de quienes están detrás de estos crímenes, que "lamentablemente la mayoría de estos menores tenían antecedentes por porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes o robos. Algunos estaban inmersos en conflictos entre pandillas" (Velandia, C., 2025).

En conclusión, en el centro del país se ubican varios de los principales factores de riesgo para la labor de defensa de los derechos humanos y para el ejercicio de la participación y movilización política de las organizaciones, movimientos sociales y quienes defienden los intereses de sus comunidades, sus derechos y territorios. Los jefes de estas estructuras se encuentran en el centro del país y gozan de garantías de impunidad a nivel interno e internacional.

"El sector colombiano más fuerte de la mafia de la cocaína, tam-

bién residente en el exterior, se ubica en el centro del país y surge de antiguos esmeralderos que mantienen negociaciones con la DEA", reconoció el expresidente Petro (Petro, 2026a). Dichos jefes, entre los cuales destaca el capo Julio Lozano Pirateque, no solo articulan bajo su mando estructuras del paramilitarismo, sino que controlan el clan de esmeralderos y las estructuras que se articulan alrededor de la Junta Directiva del Narcotráfico, la cual hasta hace poco estuvo articulada en Dubái y ahora está en otras grandes capitales del mundo como Miami o Madrid. Estas estructuras gozan de nexos en el Estado que les permiten la impunidad, pues como lo denunció también el expresidente Petro (2026b) en la red social X "como son del cartel de las esmeraldas y del centro del país esos sí no se investigan. La investigación sobre los fiscales de la junta del narcotráfico está frenada".

REFERENCIAS

Castellanos, M. (2025, 25 de marzo). Cronología de una serie de atentados con granada en el barrio San Bernardo, en Bogotá: van 5 en menos de un año. *El Tiempo*. https://www.eltiempo.com/bogota/quinto-atentado-con-granada-en-san-bernardo-centro-de-bogota-3438524

Defensoría del Pueblo. (2018, 22 de enero). *Alerta Temprana Estructural 008-18*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91711

Defensoría del Pueblo. (2019a, 5 de abril). *Alerta Temprana Estructural 016-19*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91758

Defensoría del Pueblo. (2019b, 29 de octubre). *Alerta Temprana Estructural 043-19*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91703

Defensoría del Pueblo. (2019c, 8 de noviembre). *Alerta Temprana Estructural 046-19*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/alerta/Details/91694

Defensoría del Pueblo. (2019d, 22 de noviembre). *Alerta Temprana de Inminencia 047-19*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91610

Defensoría del Pueblo. (2020, 22 de agosto). *Alerta Temprana 039-2020*. https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/039-20.pdf

Defensoría del Pueblo. (2021, 31 de mayo). *Alerta Temprana Estructural 010-21*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91797

Defensoría del Pueblo. (2022a, 24 de febrero). *Alerta Temprana Estructural 005-22*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91827

Defensoría del Pueblo. (2022b, 30 de junio). A*lerta Temprana Estructural 016-22*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91838

Defensoría del Pueblo. (2023, 4 de febrero). *Alerta Temprana Estructural 002-23*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91858

Defensoría del Pueblo. (2024, 21 de febrero). *Alerta Temprana N.° 004-24*. https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/2723475/AT+-+004-24+PAT_Bogota_2202.pdf/58c0d14a-c359-6657-cc5c-2414e3df5f4d?t=1709059228423

Defensoría del Pueblo. (2025, 4 de febrero). *Alerta Temprana de Inminencia 003-25*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91928

Defensoría del Pueblo. (2026, 17 de marzo). *Por riesgo de disputa armada y violencia selectiva, Defensoría emite Alerta Temprana para Algeciras y Campoalegre, Huila*. https://www.defensoria.gov.co/-/por-riesgo-de-disputa-armada-y-violencia-selectiva-defensoria-emite-alerta-temprana-para-algeciras-y-campoalegre-huila

El Espectador. (2025, 6 de junio). *Crimen de dirigente del fútbol y el rol de la Oficina del San Andresito de la 38*. https://www.elespectador.com/investigacion/el-rol-de-la-oficina-del-san-andresito-de-la-38-en-el-asesinato-de-edgar-paez-presidente-de-tigres-fc/

El Tiempo. (2026, 3 de julio). *Catar, sicarios y chats: el informe de inteligencia sobre expansión del "Clan del Golfo" a la sombra de la "paz total"*. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/catar-sicarios-y-chats-el-informe-de-inteligencia-sobre-expansion-del-clan-del-golfo-a-la-sombra-de-la-paz-total-3568930

Fundaprocol DH. (2025, 20 de octubre). *Grupos paramilitares urbanos en Bogotá* [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/watch?v=1447899046304019

La W. (2025, 20 de marzo). *Los "Guardianes del Orden": así es la propuesta de Galán para mejorar la seguridad en Bogotá*. https://www.wradio.com.co/2025/03/20/los-guardianes-del-orden-asi-es-la-propuesta-de-galan-para-mejorar-la-seguridad-en-bogota/

Malaver, C. (2025, 18 de mayo). Así operaba poderosa red de tráfico de armas desde Bogotá con tentáculos en Cundinamarca: uniformado fue capturado. *El Tiempo*. https://www.eltiempo.com/bogota/asi-operaba-poderosa-red-de-trafico-de-armas-desde-bogota-con-tentaculos-en-cundinamarca-3454974

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACNUDH]. (2025, 23 de septiembre). *Por presión de grupos armados no estatales y precaria presencia del Estado: Comunidades rurales en Huila y Caquetá están en alerta y bajo amenaza*. https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/por-presion-de-grupos-armados-no-estatales-y-precaria-presencia-del-estado-comunidades-rurales-en-huila-y-caqueta-estan-en-alerta-y-bajo-amenaza/

Petro, G. [@petrogustavo]. (2026a, 30 de marzo). El silencio de la fiscalía general y los cuerpos investigadores es proverbial sobre la "Junta del narcotráfico"... [Publicación en X]. X. https://x.com/petrogustavo/status/2038691302682853749

Petro, G. [@petrogustavo]. (2026b, 23 de julio). [Publicación en X]. X. https://x.com/petrogustavo/status/2080378027616170407

Programa Somos Defensores. (2026). *Informe anual 2025: Promesas rotas*. https://somosdefensores.org/informe-anual-2025-i-promesas-rotas/

Semana. (2026, 4 de marzo). *Elecciones del 8 de marzo: General Giovanni Cristancho descarta presencia del Clan del Golfo en Bogotá y entrega parte de tranquilidad*. https://www.semana.com/semana-tv/semana-el-debate/articulo/elecciones-del-8-de-marzo-general-giovanni-cristancho-descarta-presencia-del-clan-del-golfo-en-bogota-y-entrega-parte-de-tranquilidad/202631/

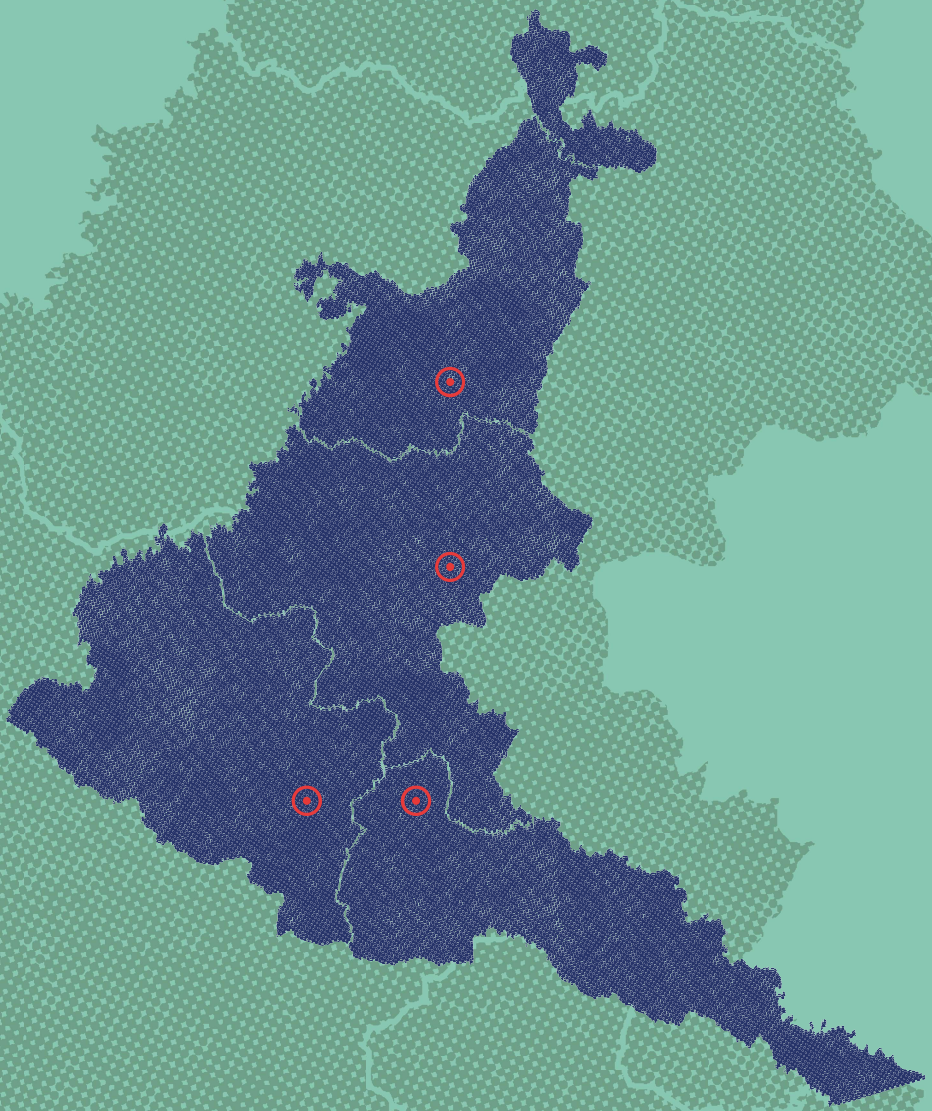
Unidad Investigativa. (2025, 26 de mayo). Red de tráfico de armas en la Policía infiltró en Bogotá esquema de seguridad de exvicepresidenta. *El Tiempo*. https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/red-de-trafico-de-armas-en-la-policia-infiltro-en-bogota-esquema-de-seguridad-de-exvicepresidente-3457239

Unidad Investigativa. (2025, 5 de junio). Los lanzacohetes en la basura, el oficial del caso "Pitufo" y los dardos del presidente Petro a la Policía. *El Tiempo*. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/los-lanzacohetes-en-la-basura-el-oficial-del-caso-pitufo-y-los-dardos-del-presidente-a-la-policia-3460501

Velandia, C. (2025, 28 de julio). *Alarmante: 12 menores han sido asesinados en Neiva. No se descarta el toque de queda*. La Última. https://laultima.com.co/2025/07/28/alarmante-12-menores-han-sido-asesinados-en-neiva-no-se-descarta-el-toque-de-queda/

SUROCCIDENTE

RISARALDA-VALLE DEL CAUCA
CAUCA-NARIÑO-PUTUMAYO



SUROCCIDENTE

La situación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el suroccidente colombiano en 2025 particularmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, estuvo marcada por una crisis humanitaria persistente y el recrudecimiento de la violencia armada por la disputa por el control territorial y las economías ilícitas. Estos conflictos han generado patrones de agresión sistemáticos contra la población civil.

El departamento del Cauca sigue siendo el epicentro de la violencia letal en la región; entre enero y agosto de 2025, se registraron 524 homicidios en este territorio (Defensoría del Pueblo, 2025a), aunque la cifra no devela que todas se constituyan como violaciones a los derechos humanos, sí evidencia que el panorama sigue siendo crítico debido a la presencia de grupos armados que se disputan puntos estratégicos.

En cuanto a las masacres, se documentaron 5 eventos durante los primeros nueve meses de 2025 en el Cauca, ocurridos en los municipios de Miranda, Guachené, Mercaderes, Bolívar y Popayán, con un promedio de más de tres víctimas por suceso. Por su parte, la desaparición forzada ha cobrado fuerza como mecanismo de control social, reportándose 24 casos entre enero y agosto de 2025, con una alarmante concentración de 31 casos acumulados en la ciudad de Popayán (Defensoría del Pueblo, 2025a).

A su vez, la movilidad humana ha sido gravemente afectada por el conflicto armado que vive este territorio; durante el 2025, se presentaron 14 eventos de desplazamiento masivo en el Cauca, afectando a 1.290 familias (3.393 personas) (Defensoría del Pueblo, 2025a). Mientras que el confinamiento de comunidades se ha perpetuado como una estrategia de control territorial y social silencioso. A septiembre de 2025, se registraron 8 eventos de confinamiento, que han mantenido atrapadas a 12.463 personas en municipios como Cajibío, Guapi, Argelia y Suárez (Defensoría del Pueblo, 2025a).

Ahora bien, el año 2025 evidenció una preocupante sofisticación en los métodos de guerra, con un uso sistemático de drones cargados con explosivos y artefactos no convencionales. En el municipio de Suárez, el Frente Jaime Martínez intensificó el uso de drones, afectando bienes civiles y confinando a comunidades rurales en veredas como El Amparo y Playa Rica (Defensoría del Pueblo, 2025a).

Entre enero y agosto de 2025, se registraron 24 eventos contra la misión médica en el Cauca. El 87,5% de estos casos consistieron en amenazas directas al personal sanitario en municipios como Argelia y Santander de Quilichao (Defensoría del Pueblo, 2025a).

La respuesta estatal se centró en operaciones militares de gran escala, como la Operación Escudo Norte (iniciada en julio de 2025) y la Operación Coraza, en contra de las disidencias de las FARC en el norte del Cauca y Jamundí. En Argelia, se mantiene la Operación Perseo la cual se centra en el corregimiento de El Plateado. Sin embargo, la población advierte que la intervención estatal sigue siendo predominantemente reactiva y fragmentada.

Además, se han reportado casos de vulneraciones por parte de agentes del Estado; por ejemplo, el Observatorio "Tejido Mujer" documentó al menos una denuncia de acceso carnal violento presuntamente cometido por un miembro del Ejército Nacional contra una mujer indígena en 2024 (ACIN, 2025).

Es de anotar la existencia de grupos denominados "sucesores del paramilitarismo" y estructuras de criminalidad organizada transnacional (como los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa) que operan en alianza o disputa con grupos armados no estatales para el control del narcotráfico y la minería ilegal. Existe una política activa de desmantelamiento de estas organizaciones criminales y sus redes de apoyo, priorizada por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el norte del Cauca. No obstante, la debilidad de la capacidad de protección del Estado y la connivencia con el Ejército Nacional ha permitido que estos grupos irregulares sustituyan funciones estatales de facto en varios territorios.

Durante el 2025 persistió la agresión en contra de las personas ejercen el liderazgo social; hasta septiembre de 2025, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo registró 29 homicidios de líderes(as) y defensores(as) de derechos humanos en el Cauca (Defensoría del Pueblo, 2025a). Los liderazgos indígenas y comunitarios son los más golpeados.

A su vez, en los primeros nueve meses de 2025, la Defensoría del Pueblo atendió 239 casos de Violencias Basadas en Género (VBG) en el Cauca, superando la cifra total de 2024. Entre enero y agosto de 2025, 112 mujeres fueron víctimas de presunto feminicidio en el departamento.

Se ha identificado un alto riesgo de trata de personas con fines de explotación sexual en las zonas

mineras del Pacífico caucano (Defensoría del Pueblo, 2025a).

UN (NECESARIO) CONTEXTO HISTÓRICO

A lo largo de la historia, el Suroccidente colombiano ha sido un escenario de alta convulsión en lo que se refiere a las dinámicas del conflicto social, político y armado. Allí se han ubicado actores armados, tanto de carácter insurgente como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL); como diversas configuraciones paramilitares en las que se destacan los Bloques Calima y Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los Rastrojos, los Urabeños, los Machos y las Águilas Negras.

Cabe mencionar que el territorio de análisis (comprendido por los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo) cuenta con unas características geográficas que lo hacen atrayente para los intereses de diversos sectores: la salida al mar por el Océano Pacífico y al sur del continente por Ecuador; dos cordilleras que atraviesan la región y establecen el punto de contacto con el centro y oriente del país desde el Macizo colombiano, lugar donde, a su vez, nacen ríos de gran importancia como el Magdalena, el Cauca, el Caquetá y el Patía. En la región se encuentran, igualmente, dos corredores naturales: Chocó biogeográfico y Andino, con altos niveles de biodiversidad en especies endémicas de flora y fauna, potenciales para la industria farmacéutica; Así, esta región cuenta con riqueza geológica e importancia geográfica que se completa con la presencia del litoral, sistemas montañosos, valles aluviales y sus altos niveles de pluviosidad y de humedad.

Existe una marcada distinción en términos de las actividades económicas principales por Departamento. Mientras el Valle del Cauca es un departamento predominantemente industrial, Risaralda se caracteriza por su vocación comercial. Por su parte, en Cauca y Nariño predominan las economías campesinas y en Putumayo predominan las economías minero-extractivas ligadas al petróleo, mientras que en el Macizo colombiano se evidencia presencia de minerales como uranio, coltán, oro, zinc, cobre, plata, platino y molibdeno. En estos departamentos también prevalecen las economías ilícitas derivadas del narcotráfico, especialmente en



sectores como Tumaco, el Cañón del Micay, las zonas planas del Putumayo, el Norte del Cauca y el Cañón del Garrapatas. Estas fuentes económicas se convierten en motivantes de conflictos sociales, dentro de los cuales los actores armados juegan un papel protagónico.

Esto se relaciona con la composición sociocultural de la región. En la zona costera predomina la población afrodescendiente y en las zonas de cordillera y Putumayo, la población indígena, quienes, en el marco de una economía campesina, "se dedican a la agricultura y ganadería en pequeña escala, así como a la pesca y el comercio en pequeña y mediana escala y a la minería artesanal" (CNMH, 2014, 301).

En cuanto a Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), los índices son relativamente bajos en departamentos como Risaralda y Valle del Cauca, aunque en todos los departamentos el índice de NBI es más alto en las zonas rurales que en las cabeceras municipales, como lo ilustra la Tabla 1 (página 7).

Sin embargo, sus niveles de desigualdad social y las características particulares en su composición cultural hacen que se desencadenen luchas y resistencias, debido a que en la región se han configurado históricamente tradiciones esclavistas, racistas y señoriales provenientes de formas sociales de dominación, en particular la hacienda colonial y la minería (Barreto, 2009). De esta manera, en la región se han consolidado procesos sociopolíticos dedicados a la defensa de sus territorialidades y sus aspectos

Tabla 1: Índice de NBI en los departamentos de la región suroccidente

Departamento	NBI total (%)	NBI Cabecera (%)	NBI Rural Disperso (%)
Cauca	18,81	12,63	22,85
Nariño	21,98	16,43	27,16
Putumayo	18,96	12,27	27,68
Risaralda	8,19	5,12	19,30
Valle del Cauca	6,25	5,30	11,92

Fuente: DANE, 2018.

identitarios, tales como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Comité de Integración del Macizo Colombia (CIMA) y la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (ORDEURCA). Estos dos últimos, a su vez, hacen parte del Coordinador Nacional Agrario - Cauca (CNA).

Asimismo, la violencia bipartidista y la conformación de carteles del narcotráfico, a mediados del siglo XX, se configura como una raíz central para comprender los conflictos por la tenencia de tierras entre campesinos y colonos contra terratenientes y hacendados, así como la generación de fases de crecimiento económico y modernización. Esto es especialmente evidente en el Valle del Cauca y Risaralda, donde las alianzas entre narcotraficantes, fuerza pública y élites políticas permiten a los primeros posicionarse como sectores de la clase

dominante que buscan desarrollar formas de dominación político-social basada en herencias del gamonalismo.

Frente a este fenómeno, el accionar de los grupos insurgentes se caracteriza por la regulación social con las comunidades, el tránsito y reclutamiento de tropas, el recaudo de recursos económicos a través de los denominados "impuestos de guerra" a las industrias y la contención de las configuraciones paramilitares quienes, a su vez, operarán en la región bajo una retórica contrainsurgente pero que, en realidad, operan bajo una lógica despojadora de tierras comunitarias y la protección de las propiedades, tanto de narcotraficantes como de industriales y élites políticas locales.

Cabe destacar que, en su mayor auge, las FARC-EP tuvo una fuerte presencia en la región bajo el Comando Conjunto de Occidente y el Bloque Sur, con los frentes 6, 8, 29, 30, 32, 48 y 60; Compañías como la Víctor Saavedra y Columnas como la Jacobo Arenas, Alirio Torres, Daniel Aldana, Arturo Ruiz, Mariscal Sucre y Gabriel Galvis (Medina-Gallego, 2011); mientras que el ELN ha contado con la presencia de frentes como el Luis Carlos Cárdenas, José María Becerra, Omaira Montoya, Héroes y Mártires de Barbacoas, Manuel Vásquez Castaño, Guerreros del Sindagua, y las compañías Jaime Toño Obando, Camilo Cienfuegos y José Luis Cabrera.

A este contexto cabe agregar la "desmovilización" paramilitar de los Bloques Calima, Libertadores del Sur y el Frente Sur Putumayo de las AUC, los cuales configuraron espacios "vacíos de poder" que llevaron, a la postre, a la redefinición del control territorial por medio de la violencia, especialmente en zonas de la región como Buenaventura y el Norte del Valle, con la presencia de grupos como los Machos, los Rastrojos, los Urabeños, la Empresa y el Clan del Golfo, quienes pretendieron "copar los espacios dejados por los paramilitares y controlar los circuitos productivos legales e ilegales, consolidar una base social, así como escenarios de reconocimiento y legitimización social y política" (CNMH, 2014, 299). En estos escenarios confrontativos se evidenciarán diversos dispositivos de muerte que provocarán escenarios de desplazamiento forzado de comunidades enteras, como es el caso de Buenaventura con las "casas de pique" (CNMH, 2015).

Esta reconfiguración provoca una escalada de violencia contra los liderazgos sociales de la región, expresada mediante constantes homicidios selectivos,

desplazamientos forzados individuales, zonas minadas, reclutamiento de menores de edad, estigmatización, amenazas y persecución de líderes. Esta violencia es ejercida por los grupos armados ilegales pero también, en ciertos casos, por la fuerza pública, en especial en el surgimiento de movimientos sociales y escenarios de movilización como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Minga Social y Comunitaria, el Paro Nacional, Agrario y Popular del año 2013 y las movilizaciones a favor de la firma de un acuerdo de paz con las FARC-EP entre los años 2012 y 2016. Estos hechos marcaron la pauta en términos de movilizaciones sociales e incidencia política de las organizaciones sociales de la región, cuyo protagonismo permitió escalar las conflictividades sociales en escenarios de negociación con las élites políticas a nivel nacional, regional y local. Este aspecto será determinante para comprender el escenario de violencia contra éstas en escenarios futuros.

EL "NUEVO CICLO" DE LA GUERRA EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

Con la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP) de La Habana en 2016, se esperaba un desescalamiento del conflicto sociopolítico armado por cuenta de la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. No obstante, se configuró lo que Gutiérrez Sanín (2025) denomina como un "tercer ciclo" de la violencia en Colombia[1], caracterizado por un proceso de rupturas y continuidades del conflicto armado en los territorios donde este tiene lugar;

1 Para el autor, el primer ciclo constituye el periodo conocido como La Violencia bipartidista de mitad del siglo XX, mientras que el segundo ciclo constituye el periodo de formación de las guerrillas históricas: FARC-EP, ELN, EPL, entre otros; hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre del 2016.



así como las respuestas de la población civil (Ramírez, 2022). Una de las características más visibles de este nuevo ciclo tiene que ver con el surgimiento de configuraciones disidentes de las FARC-EP, las cuales entran en una disputa con otros actores armados, como el ELN y el Clan del Golfo, por los espacios controlados por las antiguas FARC-EP antes de su desmovilización.

Este tercer ciclo de la violencia asume cambios cualitativos importantes relacionados con las intencionalidades de los actores armados en disputa, sus relaciones con la población civil, sus despliegues militares y los objetivos a los cuales se enfrentan en combate y al rol de los factores ideológico-políticos que movilizan sus narrativas (Trejos Rosero, 2023). En ese sentido, nos encontramos ante un caleidoscopio de interacciones, alianzas y acciones entre los diversos actores armados ilegales en disputa, la fuerza pública, la población civil, las élites políticas y el sector empresarial. Dado esto, se expondrán tan solo unos trazos que permitan dar cuenta de la configuración de este nuevo ciclo de violencia en los departamentos de la región suroccidente, a modo de comprender los escenarios de victimización hacia las y los defensores de derechos humanos.

Nariño

Desde el año 2017, se llevan a cabo disputas territoriales en la Costa Pacífica nariñense entre el ELN, las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), el Frente Oliver Sinisterra (FOS), el Clan del Golfo, el Clan Pacífico, Los Contadores, La Constru, el Frente 30 (Estado Mayor Central – EMC) y grupos al servicio de narcotraficantes que tienen alianzas con redes transnacionales ligados al Cartel de Sinaloa. Los objetivos de esta disputa son el control de las economías ilícitas de la coca y la minería ilegal.

Tal es el caso del Triángulo de Telembí[2], el cual se encuentra bajo el control de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico-SM[3] , quienes, después de desplazar al Frente 30-EMC de la zona, se han dedicado a la explotación ilegal de oro, mediante prácticas de empadronamiento a la población civil, imposición de contratos que implican jornadas de trabajo extenuantes y el cobro de "impuestos" a foráneos para el ingreso de maquinaria, la extracción y salida de oro de los territorios donde ejercen control (Macías,

2 Comprendido por los municipios de Barbacoas, Magui-Payán y Roberto Payán.

3 Esta coordinadora es una megaestructura conformada por los frentes Oliver Sinisterra, Ariel Aldana, Iván Ríos, Mariscal Sucre y Alfonso Cano.

2024). Sobre la SM, se reconoce también una supuesta alianza con el ELN en el territorio fronterizo con el Ecuador (Defensorías del Pueblo – Colombia y Ecuador, 2023), cuyo control aspiran dado el carácter propio de la frontera como un espacio con una presencia débil del Estado colombiano, lo cual es aprovechado para el dinamismo de diversas economías ilegales.

Más al norte, en la región de cordillera nariñense (municipios de Policarpa, Leiva, Cumbitara, El Rosario y Taminango) se evidencian enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Frente Estiven González-EMC por el control de las rutas del narcotráfico. No obstante, la Alerta Temprana (AT) 008 de la Defensoría del Pueblo (2024) reporta también una disputa entre el Frente Franco Benavides-EMC contra una supuesta alianza entre el ELN, la SM y las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN). De acuerdo con dicha AT, en dicho territorio se destaca el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) por parte de estos actores armados, los cuales son una población especial de riesgo en la zona.

Las Autodefensas Unidas de Nariño llamaron la atención desde la decisión del Frente Comuneros del Sur del ELN de deslindarse de la organización y entablar un escenario propio de negociación en el marco de la política de Paz Total en el gobierno de Gustavo Petro en 2023 pues, de acuerdo con denuncia de las comunidades del centro de Nariño, la organización paramilitar se conformó como una alianza entre el ELN y la Segunda Marquetalia para enfrentar y desplazar la presencia del Estado Mayor Central, lo cual genera un escenario de desconfianza hacia el proceso con Comuneros, quienes han llegado a acuerdos concretos con el gobierno Petro en materia de desmovilización (Sánchez, 2024).

Putumayo

La reconfiguración del conflicto en Putumayo se caracteriza por la disputa territorial entre dos disidentes que comenzó en 2020: el Frente Carolina Ramírez (FCR) y los Comandos de la Frontera (CDF). Ambos grupos han ejercido alianzas con organizaciones al servicio del narcotráfico y el paramilitarismo para su fortalecimiento organizativo. El FCR surgió de de una alianza entre disidentes del Frente 48 que no se acogieron al Acuerdo Final de Paz con el grupo criminal “La Constru”. Por su parte, los CDF nacen de un grupo narcotraficante denominado “Mafia-Sinaloa” (Ramírez, 2022).

El enfrentamiento entre grupos armados constituye una verdadera amenaza para la población civil, pues buscan aprovecharse de las condiciones especiales del territorio de frontera para el dinamismo de economías ilícitas. De igual forma, existe una situación especial de riesgo hacia las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, como la Red de Derechos Humanos del Putumayo, la cual ha sido señalada por integrantes de los Comandos de pertenecer al FCR. Ante la situación, las y los pobladores aseguran que lo único que pueden hacer para sobrevivir en medio de la confrontación es obedecer las regulaciones sociales impuestas por uno y otro grupo.

Cauca

La presencia de actores armados se manifiesta en todo el territorio, en un escenario de disputa permanente entre diferentes actores armados. Por un lado, sobre el Cañón del Micay, ante la retirada del Frente 60 de las FARC-EP, en el año 2019 el Frente José María Becerra del ELN intenta expandir su presencia ubicada en El Tambo hacia el municipio de Argelia, recibiendo posteriormente una respuesta por parte del Frente Carlos Patiño-EMC. A este enfrentamiento se suman otros actores como el Frente Diómer Cortés-SM y una agrupación denominada Los Pocillos, de quienes se sospecha que forjaron una alianza con el ELN para derrotar conjuntamente al Frente Carlos Patiño. En el Macizo colombiano, la presencia reciente del Frente Andrés Patiño pretende arrebatar terreno a la presencia histórica del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN en municipios como Bolívar, Sucre, San Sebastián, Santa Rosa, Cajibío, El Tambo, La Sierra y Timbío.

Cabe mencionar que, tras la firma del AFP, el ELN ha logrado expandir su presencia territorial a municipios de histórica presencia de las FARC-EP como Balboa, Almaguer, Rosas, Morales, Suárez, Jambaló, Caldono, Silvia y Totoró (Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, 2023). Ello ha generado un escenario de disputa con configuraciones disidentes de las FARC-EP, adscritas al Estado Mayor Central, como el Frente Jaime Martínez y la Columna Móvil Dagoberto Ramos, quienes tienen presencia activa en los corredores occidental, norte y nororiental del departamento del Cauca.

En estos territorios, el EMC intenta retomar los escenarios de gobernanza rebelde construidos hasta 2016 por sus antecesores aunque, en la práctica, los relacionamientos se configuran bajo

otros liderazgos armados e intereses de éstos hacia la comunidad, lo cual limita el escenario de intermediación (Gutiérrez y Voyvodic, 2025). No obstante, la población civil ha denunciado las prácticas de reclutamiento forzado de parte de estos grupos hacia NNA, especialmente pertenecientes a las comunidades indígenas, en municipios como Caldono. Luego, y sin ninguna experiencia, estos NNA son forzados a combatir en zonas como el Cañón del Micay, donde muchos han sido asesinados en combates con otros grupos armados o con el Ejército Nacional.

Valle del Cauca y Risaralda

Por su parte, en el Valle del Cauca el "tercer ciclo" de guerra se evidencia a partir de una diversidad de confrontaciones armadas entre las cuales se destacan tres tipos. El primero tiene que ver con la prolongación geográfica del control territorial ejercido por el EMC en el norte del Cauca, concretamente en las zonas rurales de los municipios de Buenaventura, Dagua, Jamundí, Florida y Pradera con la presencia activa del Frente Jaime Martínez y la Columna Móvil Dagoberto Ramos. A esta presencia disidente se suma en la región central del Valle la presencia de la Compañía Adán Izquierdo y el Frente 57 Yair Bermúdez, quienes se enfrentan entre sí por disputas entre facciones internas del primer grupo.

El segundo tipo de confrontación armada está relacionada con las disputas entre grupos remanentes de bandas criminales en la zona urbana de Buenaventura por el control de las extorsiones al comercio, el tráfico de estupefacientes, la oferta de protección al negocio del narcotráfico y los secuestros "exprés", entre otros. En principio, las disputas se dieron entre las bandas La Local y La Empresa. Luego de varios pactos de no agresión entre ambas bandas, una escisión dentro de La Local dio pie a la conformación de lo que hoy son los Shottas y los Espartanos (Defensoría del Pueblo, 2021). La intermediación del gobierno de Gustavo Petro con la promoción de una mesa de diálogo sociojurídico entre estos dos grupos ha logrado, por algunos momentos, disminuir de manera considerable, la violencia urbana en el distrito, aunque la violencia urbana persiste mientras no haya un marco normativo preciso que brinde condiciones para la desmovilización de ambas bandas. Esto, se suma a la continua violencia que permanece en la zona rural por cuenta de las disputas entre el ELN y el Frente Jaime Martínez-EMC por el control de las rutas del narcotráfico al Océa-



no Pacífico, en las regiones del Naya y Bajo Calima.

Por último, el tercer tipo de confrontación armada es la disputa por las rentas del narcotráfico en la región Centro, Norte del Valle y Risaralda entre grupos criminales remanentes del Cartel del Norte del Valle como La Inmaculada, Los Flacos, Rastrojos-Nueva Generación, los de Abelito, La Cordillera y el Clan del Golfo. Más allá de las dinámicas asociadas al microtráfico y al reclutamiento de NNA a sus actividades ilícitas, se han evidenciado dinámicas de control social, bajo la anuencia de entidades estatales. En un primer ejemplo, se denuncia la incidencia política tejida por la banda La Inmaculada en el municipio de Tuluá, gracias a una narrativa en contra las élites políticas locales, la desigualdad, la falta de oportunidades, la incapacidad estatal y las repercusiones del conflicto armado en el municipio (Fundación Paz y Reconciliación, 2025). Por otro lado, denuncia las prácticas de control social llevadas a cabo por La Cordillera en términos de movilidad de la población civil por zonas del municipio de Dosquebradas, así como el libre ejercicio de defensa de derechos humanos y la libertad de expresión de integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

EJÉRCITO NACIONAL: ENTRE LA REPRESIÓN Y LA CONNIVENCIA CON EL PARAMILITARISMO

El caso del Ejército Nacional dentro de la conflictividad armada en el Suroccidente colombiano merece un tratamiento especial, dadas las polémicas existentes por las formas cómo, de acuerdo con las denuncias de diferentes comunidades, han estigmatiza-

do y hostigado territorios donde se ha reportado presencia de insurgentes. Cabe resaltar que, de acuerdo con el Programa Somos Defensores (Programa Somos Defensores, 2025), el Ejército Nacional y la Policía, como agentes estatales con responsabilidad de garantizar los derechos humanos de la población civil, no son considerados como factores de riesgo ante entidades como la Defensoría del Pueblo al momento de emitir sus alertas tempranas, lo cual dificulta el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.

Como antecedentes de violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales se destaca la participación de integrantes del Batallón Palacé de Buga en los asesinatos y desapariciones forzadas en el marco de la Masacre de Trujillo (GMH, 2008). La connivencia de integrantes del Batallón de Infantería No 07 "José Hilario López" del Ejército Nacional durante el control territorial del Cañón del Micay por parte de Los Rastrojos entre 2007 y 2011, así como la supuesta connivencia entre el Ejército Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad y el Bloque Libertadores del Sur de las AUC para asesinar estudiantes de la Universidad de Nariño a inicios de la década del 2000 (Verdad Abierta, 2009; Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 2021).

Dada la intensidad de la confrontación armada entre actores insurgentes contra el Estado colombiano, el Ejército Nacional tiene una amplia presencia en la región con batallones como III Brigada (Batallón Pichincha) en la ciudad de Cali, la XXIX Brigada en Popayán y la XXIII Brigada en Pasto. En el Valle del Cauca se tienen presencia otros contingentes militares como el Batallón de Alta Montaña No 03 en los Farallones de Cali, el Batallón Palacé en Buga, el Batallón Vencedores en Cartago y se construirá el Batallón de Alta Montaña Coraza en Jamundí. En el caso del Cauca, la presencia militar se concentra en el Batallón de Infantería No 7 "José Hilario López", el Batallón de Alta Montaña No.04 "Benjamín Herrera Cortés" y el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No. 29 "Camilo Torres Tenorio". Por su parte, en Nariño y Putumayo se encuentran el Batallón de Infantería No. 9 "Batalla de Boyacá", el Batallón de Artillería N°27 y el Batallón Especial Energético y Vial N°9.

Es importante mencionar que, en el año 2018, el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares emitieron la Circular Interna 20182490205831, la cual emite instrucciones pre-

cisas para promover la seguridad de defensores/as de Derechos Humanos. Según el documento, se le da nuevas órdenes tanto tácticas como operacionales a integrantes del Ejército Nacional para proteger a los liderazgos sociales y de defensa de derechos, en armonía con la arquitectura institucional emergente del AFP. No obstante, el Programa Somos Defensores (2018) manifestó preocupación por la forma como esta circular ordena a las secciones de inteligencia de Unidades Operativas Mayores, Menores y Unidades Tácticas la "georreferenciación" de líderes sociales que se encuentren en su área de operaciones.

Luego, con la llegada de Iván Duque al gobierno se impuso un modelo de seguridad democrática 2.0, a través de un crecimiento inusitado de la fuerza pública en los territorios con mayor presencia de conflictividad armada y la conformación de las denominadas "Zonas Futuro". No obstante, y contrario a lo esperado, dicha presencia no contribuyó a disminuir los escenarios de violencia. Un escenario documentado por el PSD (2021) corresponde a la costa pacífica nariñense, donde ocho de sus municipios fueron catalogados como "Zona Futuro", pero en el 2020 hubo un incremento en los desplazamientos derivados de las confrontaciones entre los diferentes actores armados presentes en el territorio como el ELN, el Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, Columna Móvil Franco Benavides-EMC, Los Contadores y el Clan del Golfo, en una zona en donde se encuentran la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules. Producto de este escenario de violencia, el número de agresiones a liderazgos en estos municipios pasó de 16 en 2019 a 58 en el 2020; un aumento del 263 % en el número de agresiones. Es decir, los dispositivos de seguridad y protección de la Fuerza Pública en el Pacífico Nariñense no lograron contrarrestar las acciones y avances de los grupos armados ilegales, ni prevenir el riesgo y las vulneraciones a los derechos humanos.



Luego, en 2022, se conocen dos escándalos al interior del Ejército Nacional, los cuales refuerzan la tesis de connivencias de esta institución con grupos armados.

Por un lado, se expone la participación del General (retirado) Leonardo Barrero, junto con otros dos militares, en la conformación y dinamización de un grupo adscrito al Clan del Golfo denominado "La Cordillera" en la región norte de Nariño desde el año 2019. Por otro lado, la revista Cambio detalló cómo el entonces comandante de la Sexta División del Ejército, Mayor General Hernando Herrera Díaz, reveló en una reunión con sus subordinados la existencia de conversaciones y acuerdos con la banda denominada Los Pocillos para combatir al Frente Carlos Patiño-EMC, de manera conjunta con el ELN y el Frente Diómer Cortes-SM, en el municipio de Argelia (Cauca) (Gómez, 2022). De igual manera, en el mes de marzo del mismo año ocurrió en Putumayo la masacre de la vereda Alto Remanso, municipio de Puerto Leguizamo, donde el Ejército asesina a once civiles acusados, según las fuentes oficiales, de pertenecer a las disidencias de las FARC-EP, versión que es rechazada por las comunidades del territorio (Programa Somos Defensores, 2023).

Luego, con la llegada al gobierno de Gustavo Petro se vislumbró una expectativa frente a su relacionamiento con la fuerza pública, dado su pasado insurgente y de denuncia de corrupción al interior de dicha institucionalidad. Al inicio, se promovió un posicionamiento en el concepto de "seguridad humana", en teoría, diferente al principio contrainsurgente de "seguridad nacional", así como un reacomodo en las Fuerzas Militares bajo una depuración de setenta generales y coroneles del Ejército y de la Policía removidos de sus cargos, muchos de ellos bajo acusaciones por cometer diferentes delitos (Pardo, 2022). No obstante, las dificultades que ha mostrado el gobierno para consolidar la "Paz Total" con los diferentes actores armados ha provocado cambios en la dinámica castrense.

En el Suroccidente colombiano se encuentran dos ejemplos sobre la "Paz Total". El primero es la denominada "Operación Perseo" en el Cañón del Micay, en el marco de la "Misión Cauca", una iniciativa de intervención integral del territorio caucano que pasa, inicialmente, por la recuperación militar de los territorios ocupados por los actores armados para, luego, promover una transformación social por medio de la construcción de Estado. Esta iniciativa, para Johnson (2024) representa una réplica de la "Estrategia de Consolidación Territorial" de Álvaro Uribe y de las "Zonas Futuro" de Iván Duque, razón por la cual el autor resulta escéptico en términos de resultados positivos



para la población civil que habita en el territorio. Por otro lado, debido a la escalada de ataques proferidos por el Frente Jaime Martínez en los municipios de Jamundí y Santiago de Cali, ha existido un debate entre la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, con el gobierno nacional sobre la cantidad de fuerza pública y de recursos requeridos para la protección del área metropolitana de la capital vallecaucana. No obstante, se tejen puentes de diálogo entre las partes, al aprobarse la construcción de un nuevo batallón de alta montaña en la zona rural de Jamundí, que se llamará "Coraza" (Mesa, 2025).

Este nuevo batallón da pistas sobre una posible deriva militarista dentro del actual gobierno y un llamado de atención a las organizaciones defensoras de derechos humanos de la región ante lo que esto representa.

REFERENCIAS

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (2025). *Informe anual 2024.* https://nasaacin.org/wp-content/uploads/2025/02/INFORME-ANUAL-2024-observatorio.pdf

Barreto, M. (2009). El Laboratorio de Paz del Cauca y Nariño: ¿Una salida indígena para la paz en Colombia? En J. Restrepo & D. Aponte (Eds.), *Guerra y violencias en Colombia: Herramientas e interpretaciones* (pp. 545–585).Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2014). *"Patrones" y campesinos: Tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960–2012)*. Imprenta Nacional.

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2015). *Buenaventura, un puerto sin comunidad.* CNMH.

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. (2021, 19 de agosto). *El conflicto armado en la Universidad de Nariño: Reencuentros, luchas y resistencias* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SQeY0qboK00&t=10060s

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2018). *Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018: Necesidades básicas insatisfechas (NBI)* [Base de datos en Excel]. https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-NBI.xlsx

Defensoría del Pueblo. (2021, 29 de enero). *Alerta Temprana de Inminencia 003-21*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/003-21.pdf

Defensorías del Pueblo – Colombia y Ecuador. (2023, 07 de marzo) *Alerta Temprana Binacional Colombia-Ecuador N.° 001-23.* https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/008-23.pdf

Defensoría del Pueblo. (2024, 26 de marzo). *Alerta Temprana de Inminencia 008-24*. Sistema de Alertas Tempranas. https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/008-24.pdf

Defensoría del Pueblo. (2025a). *Cauca: voces que resisten 2024–2025.*https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3499940/Informe_Cauca-Voces-que-resisten-2024-2025.pdf

Defensoría del Pueblo. (2025, 26 de mayo). *La Defensoría del Pueblo rechaza la judicialización de líderes campesinos y defensores del ambiente en Jericó*. https://www.defensoria.gov.co/-/rechaza-la-lideres-campesinos-y-defensores-del-ambiente-jerico

Defensoría del Pueblo. (2025, 25 de junio). *Panorama de las violencias de género en*

Colombia: Enero a mayo de 2025. https://www.defensoria.gov.co/-/panorama-de-las-violencias-de-genero-en-colombia-enero-a-mayo-de-2025

Fundación Paz y Reconciliación. (2025). *¿Plomo es lo que viene? Balance y retos de la política de Paz Total 2022–2024.* https://www.pares.com.co/plomo-es-lo-que-viene-dos-anos-de-balance-y-retos-de-la-paz-total/#flipbook-df_51615/6/

Gómez, I. (2022, 11 de febrero). *"Esta es la puta guerra": General reconoce alianza con narcotraficantes para enfrentar disidencias de las Farc.* Revista Cambio. https://cambiocolombia.com/articulo/conflicto/esta-es-la-puta-guerra-general-reconoce-alianza-con-narcotraficantes-para

Grupo de Memoria Histórica (GMH). (2008). *La masacre de Trujillo: una tragedia que no cesa*. Taurus.

Gutiérrez, J. A. & Voyvodic, C. (2025). Gone with the rebels: Reshaping local orders in post-peace agreement Colombia. *Latin American Politics and Society*, 67 (3), 1–25. https://doi.org/10.1017/lap.2024.58

Gutiérrez-Sanín, F. (2025). *¿Qué sabemos sobre el tercer ciclo de violencia en Colombia?* CAPAZ.

Johnson, K. (2024, 20 de octubre). La intervención en El Plateado: ¿Consolidación a la Petro? *Razón Pública.* https://razonpublica.com/la-intervencion-plateado-consolidacion-la-petro/

Macías, J. (2024). En Nariño, las disidencias construyeron vías para sacar oro y coca. *Vorágine.* https://voragine.co/historias/reportaje/en-narino-las-disidencias-construyeron-vias-para-sacar-oro-y-coca/

Medina-Gallego, C. (2011). *FARC-EP: Flujos y reflujos: La guerra en las regiones.* Universidad Nacional de Colombia.

Mesa, A. (2025, 25 de junio). *Batallón de alta montaña tendrá sede en zona rural de Jamundí*. Caracol Radio. https://caracol.com.co/2025/06/25/batallon-de-alta-montana-tendra-sede-en-zona-rural-de-jamundi/

Pardo, D. (2022, 6 de septiembre). *La purga de la cúpula militar y otras tres inéditas medidas con las que Petro sacude las Fuerzas Armadas de Colombia.* BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62761489

Programa Somos Defensores (PSD). (2018). *Piedra en el zapato: Informe 2017. Sistema de información sobre agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos en Colombia*. https://drive.google.com/file/d/1MGBf1SCmcy-PmBPu5Sbapd6TJIV5wHtk/view

Programa Somos Defensores (PSD). (2021). *La mala hora: Informe 2020. Sistema de información sobre agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos en Colom-*

bia. https://drive.google.com/file/d/1mUWg4lw_zHjHDdQbmN4O1J4SY42B_d1x/view

Programa Somos Defensores (PSD). (2023). *Interludio: Informe 2022. Sistema de información sobre agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos en Colombia.* https://drive.google.com/file/d/190iZsmta5_hQwtO0kFZp9CPwWnV2dbQx/view

Programa Somos Defensores. (2025). *Sin protección: Informe 2024. Sistema de información sobre agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos en Colombia*. https://www.colectivodeabogados.org/wp-content/uploads/2025/04/informe-anual-PSD-2024-Sin-Proteccion-.pdf

Ramírez, M. C. (2022). Reconfiguración del conflicto armado en coyunturas de transición. *Maguaré,* 36(2), 161-204. https://doi.org/10.15446/mag.v36n2.102864

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. (2023, diciembre). *El Cauca: 2023, un año más de violación de derechos humanos* [Informe anual]. https://redporlavida-cauca.com/wp-content/uploads/2023/12/Informe-final-2023.pdf

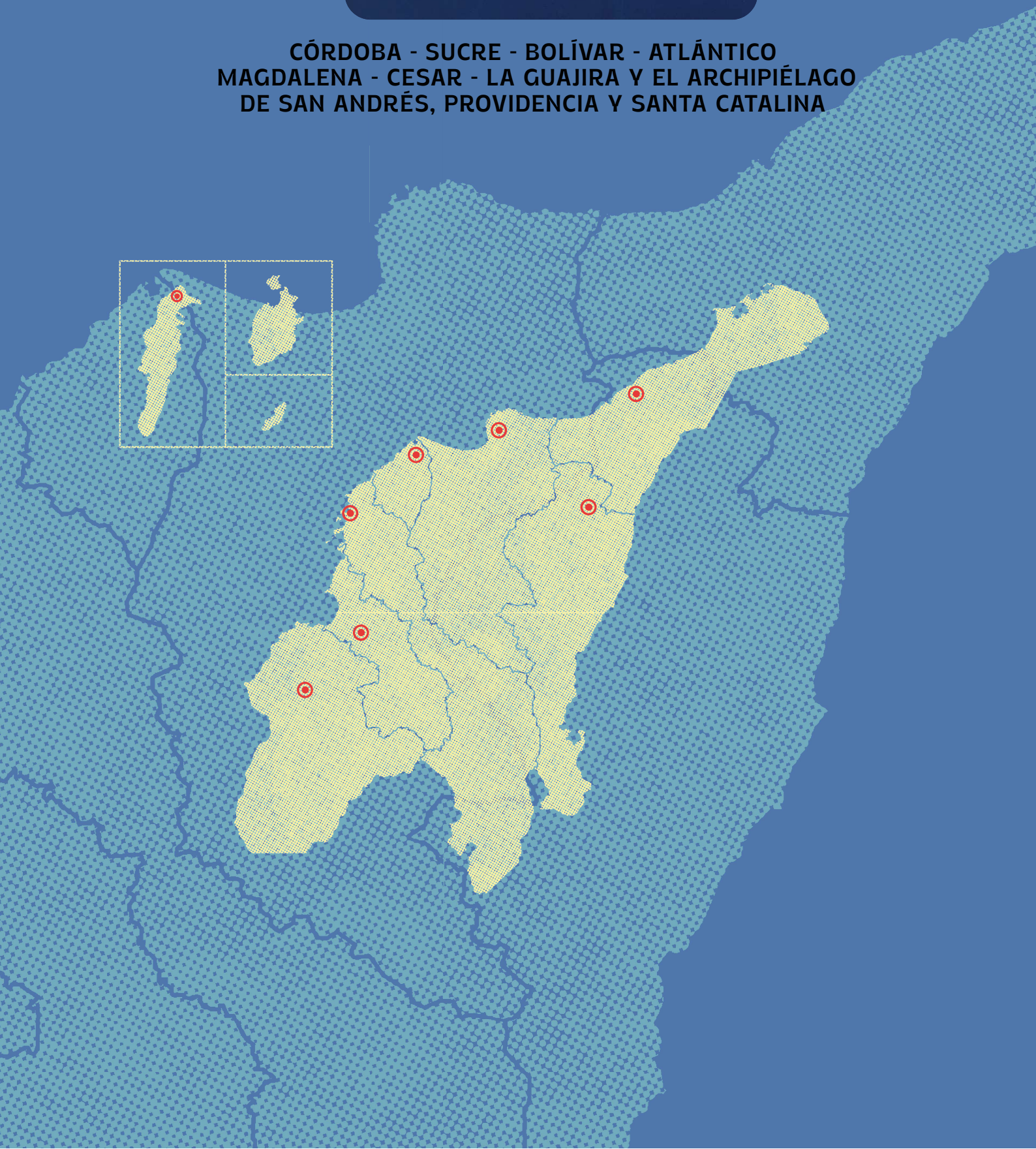
Sánchez, N. (2024). El oscuro grupo de autodefensa que opaca los diálogos de paz en Nariño. *Vorágine.* https://voragine.co/historias/reportaje/el-oscuro-grupo-de-autodefensa-que-opaca-los-dialogos-de-paz-en-narino/

Trejos Rosero, L. F. (2023, noviembre). *¿De qué manera intervienen los grupos armados en las dinámicas político-electorales?* Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol). https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/20759.pdf

Verdad Abierta. (2009, 19 de octubre). *Miembros del Ejército señalaban víctimas a los paras: Sevillano.* https://verdadabierta.com/miembros-del-ejercito-senalaban-victimas-a-los-paras-sevillano/

CARIBE

CÓRDOBA - SUCRE - BOLÍVAR - ATLÁNTICO
MAGDALENA - CESAR - LA GUAJIRA Y EL ARCHIPIÉLAGO
DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA



CARIBE

El Caribe colombiano está conformado por ocho departamentos: Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, La Guajira y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La región se encuentra localizada en el extremo norte del país y comprende una amplia diversidad de paisajes, ecosistemas, dinámicas poblacionales y actividades económicas. Su ubicación estratégica frente al mar Caribe le ha otorgado históricamente una importante conexión con las dinámicas comerciales, migratorias y culturales.

La región constituye un espacio heterogéneo en el que confluyen extensas zonas costeras y marítimas, sistemas montañosos como la Sierra Nevada de Santa Marta, valles y sabanas dedicados a actividades agropecuarias, zonas de humedales y ciénagas, así como territorios de características semiáridas y desérticas, particularmente en el departamento de la Guajira. Esta diversidad geográfica se expresa también en diferentes formas de poblamiento y de relación de las comunidades con el territorio (ver figura 1). El Caribe colombiano agrupa diferentes subregiones productivas como la Alta Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Canal del Dique y La Mojana, evidenciando la existencia de dinámicas territoriales diferenciadas (Viloria de la Hoz, 2010).

La región cuenta con una amplia diversidad cultural y étnica, con población indígena, afrodescendiente, campesina, pescadores y poblaciones urbanas, cuyas formas de vida y economías se encuentran ligadas a los recursos naturales y las condiciones particulares de cada territorio. Un ejemplo de ello es la presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, mientras que en La Guajira se encuentra una importante población indígena Wayúu. Esta diversidad constituye un elemento fundamental para comprender las distintas formas de apropiación, defensa y protección del territorio que se presentan en la región.

Figura 1. Regiones de la Costa Caribe de Colombia



Fuente: Elaboración propia con herramientas de inteligencia artificial.

Los principales centros urbanos de la costa son Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería y Sincelejo. Estos centros cumplen la función de articulación comercial, administrativa y económica con sus respectivas áreas de influencia. Paralelamente, persisten amplias zonas rurales y territorios con dificultades de conectividad y acceso a bienes y servicios públicos, lo que genera marcadas diferencias al interior de la región. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (Dane, 2012) señala que la población Caribe presenta una fuerte concentración en las ciudades costeras y reconoce diferencias significativas en los patrones de poblamiento regional.

Estas particularidades resultan relevantes para el análisis de la situación de derechos humanos y del conflicto armado, debido a

que las afectaciones no se distribuyen de manera uniforme en el territorio. La ruralidad dispersa y alejada de los centros urbanos, así como la presencia y actuación de diferentes actores armados ilegales y estructuras criminales, configuran **escenarios diferenciados de riesgo para las poblaciones y para quienes ejercen labores de defensa de los derechos humanos.** Por ello, para efectos de este informe, el Caribe colombiano no debe entenderse únicamente como una unidad geográfica o administrativa, sino como un conjunto de territorios con dinámicas sociales, económicas, culturales, ambientales y de violencia diferenciadas, pero interconectadas.

GOBERNANZA DELEGADA Y COGOBIERNO CRIMINAL: UNA REALIDAD CARIBEÑA

El control social violento de comunidades y liderazgos sociales se ha consolidado desde hace más de tres décadas, con el proceso de posicionamiento territorial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a finales de la década de los noventa y, en los últimos años, su transformación en la red paramilitar Clan del Golfo, que se autodenomina como Ejército Gaitanista de Colombia. En años más recientes, en los departamentos de Magdalena, Guajira y Cesar, el dominio territorial ha sido disputado por las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) o Pachencas, organización paramilitar descendiente de las estructuras de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada. De igual forma, hacia el sur de la región Caribe, en límites con el nordeste de Antioquia y Sur de Bolívar, mantienen disputas con estructuras del ELN y grupos de las disidencias de las FARC (línea Calarcá), confrontación que ha conllevado riesgos y agresiones persistentes contra los liderazgos sociales en la región.

Luz María Wills (2026), integrante de la Comisión de la Verdad, constata cómo desde la década de los noventa el paramilitarismo se alzó con el control de la región, imponiendo un orden de terror y obediencia, el cual continúan imponiendo y consolidando hasta el día de hoy. La obstrucción a los cambios sociales y la reacción contra el orden prometido por la Constitución Política de 1991 fue el ámbito en el cual se consolidó su dominio, apoyado eficientemente por el Estado y algunos mandos de las Fuerzas Militares, formados en el anticomunismo y la doctrina del enemigo interno, el mismo que hoy anuncia el nuevo gobierno.

De este modo, a pesar de que formalmente la Constitución Polí-



tica de Colombia, concebida como un pacto para la convivencia y la garantía universal de derechos, ha tenido vigencia durante las tres últimas décadas, en esta región ha convivido un régimen en el que el paramilitarismo no solo ha mantenido el control territorial y el tutelaje sobre la población y los gobiernos locales, sino que también ha usurpado la representación política y el control de la autoridad del Estado, primero a través del proceso conocido como la "parapolítica" y luego mediante el control de clanes políticos con fuertes vínculos con la ilegalidad y las estructuras de control armado en los territorios.

Dada la connivencia de gran parte de las autoridades, élites políticas, sectores empresariales y mandos militares con esta situación se ha configurado, desde hace casi 30 años, **un orden de facto paraestatal al margen del orden constitucional democrático.** Esta situación se trató de mitigar en la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, con la creación de las curules de paz para empoderar a las víctimas, sin embargo éstas terminaron siendo controladas en gran medida por liderazgos afines a estructuras de control paramilitar, entre ellos por el hijo del ex jefe paramilitar "Jorge 40" que impuso su terror armado en gran parte de la región y ha sido responsable de gran parte de las masacres, desplazamientos y homicidios con que impuso su control armado a dichos territorios.

La continuidad de dicho control paramilitar de la representación política, sobre todo en los escenarios rurales, se constata en el hecho de que recientemente

se ha conocido que 11 de los representantes de estas curules de paz expresaron públicamente su adhesión al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella (La Silla Vacía, 2026), sobre quien se conocen relaciones de proximidad y declaraciones de simpatía con el accionar de estos grupos (Caracol Noticias, 2026).

No obstante, el Caribe también ha sido un importante escenario de resistencia civil representada por importantes movimientos políticos, sociales y campesinos que han contribuido al sostenimiento de las comunidades en sus territorios a lo largo de los años y como forma de oposición a la violencia impuesta y desatada en épocas de mayor control del paramilitarismo. Aquí es destacable la presencia que en Córdoba y en la región de Montes de María que tuvo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), desarrollando luchas por la reforma agraria y la permanencia del campesinado en el territorio.

El sociólogo Orlando Fals Borda (2002) analiza que la experiencia de organización y lucha del campesinado constituye un vértice fundamental para comprender las dinámicas sociales y políticas de la región Caribe, permitiéndose destacar que la capacidad de resistencia y permanencia del campesinado en la tierra frente a condiciones adversas y a relaciones históricas de poder, así como el papel desempeñado por organizaciones la ANUC en las luchas por el acceso y la defensa de la tierra fueron relevantes para el contexto de conflicto armado de la época. En este sentido, Fals Borda dedica un apartado de su obra a lo que denomina *El resistente ethos del campesino*, expresión que sintetiza la persistencia de formas de organización, identidad y resistencia campesina frente a las transformaciones y conflictos que han atravesado el territorio.

Este talante y capacidad de resistencia sigue constituyendo un baluarte para la persistencia de los movimientos sociales y su capacidad de resiliencia frente al control autoritario de territorios por élites políticas y empresariales que, sin apoyos en la violencia paramilitar, no podrían garantizar el predominio de la representación política. Es en esta fortaleza que se funda la capacidad de denuncia y de agencia activa en la defensa de derechos de las personas que defienden los derechos humanos en esta región

En este sentido, la expansión y consolidación de la violencia paramilitar en los últimos años, sobre todo con posteridad a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, **ha tenido un impacto que ha trascendido la victimización in-**



dividual y ha terminado afectando de manera profunda el tejido social, organizativo y democrático de los territorios. Movimientos campesinos como la ANUC, organizaciones sindicales como Sintraproaceites y expresiones políticas como Causa Común y la Unión Patriótica fueron objeto de asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos, estigmatización y otras formas de violencia, que con el tiempo contribuyeron al debilitamiento y en algunos casos a su desaparición total o parcial.

Nuevamente, en territorios como los Montes de María y el Cesar, estas agresiones estuvieron estrechamente relacionadas con disputas por la tierra, el control territorial, los derechos laborales y la posibilidad de construir alternativas políticas y sociales frente a los poderes económicos y políticos tradicionales que hoy siguen vigentes y con sus crímenes en la impunidad.

Esta tradición histórica del conflicto armado y la presencia del paramilitarismo en la región Caribe, han hecho que a lo largos de los años se haya creado una sensación de no retorno. Por momentos la violencia en la región se reactiva con extrema preocupación por las formas y la crudeza con la cual se desarrolla y los impactos en el tejido social y en la población. **Hoy el paramilitarismo en todo el Caribe es una realidad que implica confrontaciones armadas por la disputa y el control territorial**, desde la presencia de estructuras ilegales con presencia nacional, hasta estructuras de crimen urbano en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Riohacha o Maicao.

DINÁMICAS Y PRESENCIA DE ACTORES ARMADOS

Durante el 2025 **el actor armado ilegal que logra acentuarse con fuerza en toda la región Caribe es el Clan del Golfo**. Su presencia y capacidad de crecimiento y expansión es evidente. Se logra identificar que tiene diversas estructuras armadas en los ocho departamentos de la región. Esto implica que se ha consolidado a lo largo de los años un poder de facto por parte del Clan del Golfo en donde no solo logra imponerse en la disputa armada con otras

organizaciones ilegales por el control territorial, sino que controla economías lícitas e ilícitas, logra permear el poder político y las decisiones públicas y administrativas en los entes del poder local y regional a tal punto que en la mayor parte de municipios y departamentos están bajo su control. Estos grupos establecen corredores de movilidad estratégicos en territorios clave que les sirven de avanzada en sus planes de expansión y control territorial. La presencia del Clan del Golfo es fuerte, dado que ha logrado el desplazamiento o cooptación de grupos más pequeños, ejerciendo violencia como medio de regulación social.

Bolívar

El proceso de expansión del Clan del Golfo encuentra en algunas zonas fuerte resistencia por parte de otros grupos armados. Durante el 2025 se presentaron enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y frentes de disidencias del ala de Calarcá en el Sur de Bolívar, territorio de histórica presencia de estas guerrillas y que hoy es el centro de una guerra por su control territorial y lo que representa en términos de ser un enclave importante para las economías de guerra y la extracción de rentas de la minería.

Principalmente en municipios como San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Arenal y Norosí los cuales hacen parte de los 15 enclaves cocaleros del país, produciendo al menos 7.200 hectáreas de coca al año. Esta zona en disputa es atractiva por la serranía de San Lucas, conformada por los mismos municipios y otros como Cantagallo, Morales, Montecristo, los que logran tener conexión estratégica con el departamento de Antioquia y la Serranía de San Lucas, reconocida por su alta ex-



plotación de oro, que produce una riqueza de alrededor de 100 toneladas al año que los actores armados se disputan en acciones de despojo a las organizaciones y cooperativas mineras (Montaño, 2025).

En Simití, en el marco de las confrontaciones armadas, se evidencia con preocupación la utilización de armas no convencionales y prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario como es el uso de minas antipersonal como estrategia de contención territorial y de sometimiento a las comunidades y sus liderazgo, tanto por parte del ELN como por el Clan del Golfo. Estos artefactos explosivos representan un riesgo para las comunidades campesinas y los animales, toda vez que se encuentran dispersos en caminos veredales de los Montes de María, especialmente en los municipios de San Jacinto, El Carmen de Bolívar y Zambrano.

Todo lo anterior mientras existe un alto componente y presencia de las Fuerzas Militares en municipios como Malagana, Cartagena, Santa Rosa del Sur y del Norte, Magangué, entre Arenal y Villanueva. Esta presencia genera preocupaciones en cuanto a la efectividad en el desarrollo de las operaciones militares para combatir y desmantelar las estructuras armadas ilegales, toda vez que persisten los escenarios de riesgo y la crisis humanitaria producto de la imposición de medidas coercitivas de control por parte de los actores armados ilegales, lo que constituye uno de los escenarios actuales de victimización de los liderazgos comunitarios y comunales.

La región Caribe, por su conexión al mar y los puertos existentes a través de los cuales se surte el tráfico de narcóticos e ingreso de insumos y armamentos, constituye un corredor en el que se ha constatado un proceso de **connivencia respecto al control y tráfico aduanero** entre funcionarios del Puerto Marítimo de Cartagena, la Dirección General Marítima (Dimar), la Policía aduanera y grupos transnacionales como el Cartel de Sinaloa, con oficina en Cartagena, que favorecen el control de cultivos, la circulación de la coca y la trata de personas, como lo denunció Gustavo Petro, como presidente de la República, al exigir a la Fuerza Pública un estricto control sobre los puertos ya que “han sido cooptados por los narcotraficantes” (El Espectador, 2025).

Este control opera de igual manera, en zonas como el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y en las zonas insulares de Cartagena, incluso con el gran porcentaje de contrabando que se mueve

en los puertos. En general, gran parte de la expansión y aumento de las disputas entre estructuras armadas organizadas como los Pepes, los Costeños y otros, en las principales ciudades de la región Caribe, y especialmente en Riohacha, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta se originan en la voluntad de grupos armados ilegales y del narcotráfico que controlan a través de las fiducias de estos grupos, los territorios y muelles cercanos a dichos centro urbanos para **garantizar la salida del comercio ilegal de narcóticos y contrabando** (Grautoff, 2025).

En una investigación desarrollada por la Fiscalía General de la Nación, mandos de la Policía Nacional han denunciado y aceptado que en la policía fiscal y aduanera de Cartagena recibían dinero para omitir sus funciones, pues de lo contrario serían desvinculados o trasladados como una forma de represalia (Noticias Uno, 2025). Incluso, en ocasiones la policía acompañaba los camiones de contrabando para la salida a otros departamentos (Infobae, 2025b). Se mencionó que mandos de la policía fiscal y aduanera se reunían con alias "Papá Pitufo" para definir las operaciones en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y San Andrés por orientaciones de altos mandos, que incluía al jefe de Sijin y a políticos de la región (Caracol Radio, 2025).

A pesar de la amplia presencia de grupos en la región, es el Clan del Golfo el que ha expandido su presencia desde el Canal del Dique, Cartagena, Turbaco, Turbana, Arjona, Santa Catalina, San Cristóbal, Villanueva hasta la zona Las Lobas (Hatillo y San Martín de Loba).

Este departamento incluso ha sufrido cambios en el uso del suelo en algunos territorios, como la que se presenta en los límites del municipio de Santa Catalina donde la construcción de viviendas de las clases con mayor capacidad adquisitiva ha impactado en los ecosistemas de bajamar. De igual forma, la construcción del nuevo aeropuerto entre Bayunca y Santa Rosa afecta directamente a las comunidades pescadoras dado a que esta es una zona desagüe de caudales.



Esta realidad también se ve reflejada hacía los municipios de María La Baja, Malagana, Playón, El Biso, San Juan, San Jacinto donde el uso del suelo ha sido reemplazado por la presencia de monocultivos de palma que también es una renta para las organizaciones armadas presentes en el territorio.

En el departamento, **se identifica una usurpación de la voz social**, dado a que existe una cooptación total de los medios de comunicación local que son utilizados incluso para dañar el buen nombre de individuos causando estigma y discriminación. Esto se convierte en un limitante a la hora de impulsar acciones de incidencia dado a que estos medios no son un aliado de las organizaciones sociales y no existen conductos de diálogo efectivo con las autoridades distritales y departamentales.

Córdoba y Sucre

Estos departamentos tienen corredor estratégico por su salida al mar Caribe en Tolú, San Onofre y Coveñas. Hacia el sur se ubica lo que conocemos como la depresión momposina donde se hayan grandes vías hídricas como arroyos, ciénagas y caños que conectan el río San Jorge, Magdalena y el Cauca. Esta diversidad consolida la región como una ruta estratégica para el desplazamiento de grupos armados, donde antiguamente operaba el Bloque Majagual de las AUC.

La presencia de grupos armados en Sucre se ve particularmente copada por el **Clan del Golfo**, quien ha evolucionado en sus formas de relacionamiento con las comunidades, sofisticando de alguna manera sus mecanismos de **cooptación social y territorial y apelando tanto a la intimidación como a estrategias de "benefactor social"**. Este grupo armado tiene gran incidencia en la región del San Jorge, específicamente en los sectores urbanos y rurales de San Marcos, San Benito Abad, La Unión y Caimito, por ser la más productiva en el sector agrícola donde se consolidan las rentas de extorsión.

Otra ruta del narcotráfico inicia en San Jacinto del Cauca (Bolívar) y pasa por San Benito Abad, buscando la salida al mar cruza las sabanas hasta llegar al Golfo de Morrosquillo en San Onofre, clave por su salida marítima y conexión con Montes de María, a su vez, cuenta con playas, sistemas fluviomarinos y de manglares propicios para el embarque y desembarque de drogas y otras mercancías ilegales (Trejos y Badillo, 2021).

También identifican la presencia transitoria del ELN, principalmente en los municipios de San Onofre, San Benito Abad, Guaranda y Majagual, generando riesgo a la población si se niegan a prestar los servicios que solicitan. En esta zona de tránsito gestan acciones de reclutamiento forzado de jóvenes para el robustecimiento de sus filas, lo cual es anunciado por la Defensoría del Pueblo (2020).

El problema de las tierras se da principalmente en el sur del departamento, en municipios de San Marcos, San Benito Abad, Majagual, Guaranda y Sucre, los cuales integran las subregiones del San Jorge y La Mojana, respectivamente. El territorio permanece rodeado de agua, pero en verano cuando las ciénagas, caños y ríos se secan, quedan territorios fértiles para los cultivos de pancoger, los cuales son catalogados como baldíos, es decir, extensiones de tierra no tituladas, consideradas bienes públicos de la nación. Esta particularidad del territorio ha generado despojo de tierras a comunidades campesinas e indígenas por parte de actores armados, lo cual convierte al liderazgo de reclamantes de tierras en el más riesgoso en este departamento.

Ahora bien, **los paramilitares que actúan en La Mojana han sido particularmente violentos contra los educadores del territorio**. Las amenazas y vulneraciones en contra de este sector ha sido documentada por la Defensoría del Pueblo (2020) a través de distintos informes de riesgo. La Mojana tiene una particularidad y es que se encuentra alejada de los principales ejes viales de la región Caribe y lejos de los centros administrativos y políticos del departamento de Sucre, lo que favorece la presencia permanente de los grupos armados. Además, no está claro quién tiene como responsabilidad garantizar la seguridad la zona; el Ejército dice que es la Brigada de la Infantería, mientras que ésta considera que está a cargo de la Brigada 11 del Ejercito (Infobae, 2025a).

Los grupos armados en Sucre han desarrollado distintas formas de interacción con las comunidades, especialmente en zonas rurales y periurbanas donde el Estado tiene una presencia débil o ausente. **Usan el microtráfico como mecanismo de enganche para reclutar jóvenes y adultos** en esta dinámica, como una forma rápida de ingreso económico a través de la distribución y venta de estupefacientes, consolidando redes barriales y puntos de venta bajo su control. Algunas de las estrategias son:



• Cooptación emocional y afectiva: en algunas zonas se reporta que los grupos promueven relaciones personales o sentimentales con jóvenes líderes o integrantes de organizaciones sociales, como una forma de ganar influencia dentro de las estructuras comunitarias.

• Infiltración y manipulación de organizaciones sociales: se ganan la confianza de los integrantes para influenciar decisiones dentro de juntas de acción comunal, asociaciones campesinas o colectivos juveniles, con el fin de imponer sus intereses políticos o económicos.

• Reuniones comunitarias y entrega de ayudas: en algunos corregimientos, los grupos armados organizan reuniones informales con líderes locales o pobladores, distribuyen útiles escolares, mercados u otros insumos, buscando generar una imagen de "protección" o "autoridad alternativa".

• Intimidación silenciosa y vigilancia social: aunque no siempre es explícita, la presencia armada genera miedo y autocensura. Las comunidades muchas veces acceden a estas relaciones por temor a represalias.

Por su parte, el departamento de Córdoba ha sido escenario de disputas entre ELN, el Clan del Golfo y otros grupos disidentes que buscan controlar rutas estratégicas. En enero de 2026, la ONG Cordoberxia denunció la alianza entre el ELN y el extinto Frente Virgilio Peralta, también conocido como "Los Caparros", para recuperar el control territorial sobre esta zona disputándolo directamente con el Clan del Golfo en municipios como Tierralta, Planeta Rica y Sahagún.

La expansión del Clan del Golfo va desde Montería, Cereté y Planeta Rica copando subregiones del medio Sinú y Sabanas con el

fin de consolidar un corredor de movilidad que une este territorio con el Bajo Cauca antioqueño y La Mojana con el Golfo de Morrosquillo.

Una de las principales formas de operación en este departamento es **ofertar seguridad contra grupos de delincuencia organizada, quienes utilizan este territorio como tránsito, refugio y obtención de rentas ilícitas**. Su radio de acción se ubica en Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento, razón por la cual la Defensoría del Pueblo (2024) emitió una alerta temprana.

El sur de Córdoba está conformado por cinco municipios: Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré. Este territorio sirve como corredor de movilidad entre la costa Caribe, el Bajo Cauca, el norte de Antioquia y Urabá (antioqueño y chocoano). Tiene como atractivo para su control el Parque Nacional Paramillo con las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, que por su red de conexiones terrestres y fluviales que permite desde el acopio y producción de clorhidrato de cocaína, hasta las rutas de transporte y exportación al norte del departamento. Además, tiene tierras planas como los valles de los ríos Sinú, Verde y San Jorge.

Cinco de estos municipios tienen circunscripciones de paz que la Defensoría del Pueblo (2022) denunció por la intención del Clan del Golfo de financiar estas campañas para obtener representación en ellas, generando amenazas e intimidaciones sobre los líderes que se oponían a esta dinámica.

El desplazamiento es todavía una de las afectaciones más profundas para la población, sobre todo el fenómeno denominado como "desplazamiento silencioso" que tiene que ver con recurrentes situaciones de **desplazamientos individuales o familiares dentro de la misma región, usualmente luego de algún asesinato selectivo**, principalmente los que se han ejecutado sobre la población indígena Zenú en la región del Alto San Jorge.

En el año 2023, Cordoberxia denunció la incursión de tres frentes de las disidencias de las FARC (4, 36 y 18), desde el norte y noroccidente de Antioquia están en plan retoma del sur de Córdoba para disputarse el territorio con el Clan del Golfo.

El grupo se asentó en el nudo de Paramillo, corredor donde se cruzan los caminos al Urabá, Córdoba y el Bajo Cauca, que antes fue guarida paramilitar.

La Guajira

Después del 2016, en este departamento ha habido presencia del Clan del Golfo, las ACSN, las disidencias de Calarcá e Iván Mordisco, el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. El ELN ejerce su poderío en territorio cercano a la frontera con Venezuela utilizando la Serranía del Perijá como tránsito. Su concentración es mayormente rural para fines militares, pero han sumado presencia en los cascos urbanos donde realizan inteligencia sobre la población.

El tránsito de actores armados se mueve entre la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá, por el interés de dominar ciertos espacios, aunque su mayor interés es la economía, utilizando la Serranía del Perijá como refugio, lo cual dificulta la persecución, pues cuentan con rutas montañosas, marítimas y fluviales para su movimiento. En la Serranía del Perijá hay cultivos ilícitos y en la zona hay ecoturismo, explotación de gas y petróleo, lo cual es foco de extorsión, secuestro, desplazamiento y violencia sexual.



Las ACSN captan a la juventud, incluso jóvenes Wayúu al norte de La Guajira, para utilizarlos para la circulación de sus economías como las drogas ilegales. Según la Defensoría del Pueblo (2025b), la confrontación entre ACSN y Clan del Golfo pone en riesgo extremo a la población civil de la Sierra Nevada de Santa Marta y municipios de La Guajira, Cesar y Magdalena, con impactos diferenciados sobre comunidades Wayúu y los pueblos de la Sierra.

Otra forma de financiación es el secuestro a extranjeros, los "gota a gota", etc. En Maicao han encontrado formas de legalizar o "lavar" el dinero ilegal.

Estos grupos de autodefensas utilizan uniforme camuflado con distintos brazaletes con siglas AUC, ELN, FARC, a veces cargan pañoletas rojas con letras negras. Además, **subcontratan otros grupos para generar enfrentamientos, su móvil es el negocio**. Muestra de esto es lo sucedido con el secuestro del papá de Luis Díaz.

Los grupos armados paramilitares en la región hacen presencia en los espacios de los liderazgos sociales para escuchar las reuniones y presentar sus grupos e ideologías, pero no existe relacio-

namiento voluntario. **Ha habido asesinatos de líderes sociales y la respuesta comunitaria ha sido permisiva, las iniciativas no tienen mayor convocatoria porque el miedo los consume**.

La Defensoría del Pueblo (2025a) advirtió sobre el riesgo extremo que enfrentan las comunidades de Riohacha, Dibulla y San Juan del Cesar debido a la disputa territorial entre el Clan del Golfo y las ACSN que buscan controlar corredores estratégicos como la Troncal del Caribe y áreas rurales y urbanas de alta relevancia geopolítica, económica y cultural para el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y otras economías ilícitas, aprovechando la cercanía con la frontera venezolana y la salida al mar Caribe. Esta confrontaciones armadas conllevan a homicidios, desplazamientos forzados de comunidades indígenas, confinamientos prolongados, así como reclutamiento forzado y explotación sexual de menores.

La disputa por imponer su autoridad mediante la violencia lleva a establecer normas de conducta como la restricción de la movilidad de las personas, imposición de horarios, cobro de extorsiones y amenazas para ejercer control social.

Cesar

Tras la firma del Acuerdo de Paz, las ACSN, vestigios o presencia residual de Los Rastrojos y Clan del Golfo hicieron presencia en el departamento, además de las disidencias de FARC de Mordisco y Calarcá. Algunos operan en conjunto, por ejemplo, si el Clan del Golfo no tiene personal en Pailitas pero necesita actuar entonces busca un aliado.

En los últimos años se ha dado un aumento en homicidios, hurtos, secuestros y extorsiones. En el sur del Cesar, en municipios como González, debido a su cercanía con la región del Catatumbo, se ha convertido en un punto crítico de desplazamiento forzado y limitaciones para el transporte terrestre.

En la Mesa, Chiriguaná y Pelaya hay enfrentamientos de las ACSN, el ELN y el Clan del Golfo por el dominio del territorio. La Defensoría del Pueblo (2025a) emitió una alerta temprana para Chiriguaná ante la grave situación de violencia derivada de las estrategias de control social. Asimismo, el Frente 41 de las disidencias de las FARC ha tenido interés de establecerse en el territorio, dado que comparte las ecorregiones estratégicas de la Serranía del Perijá con la Jagua de Ibirico y este territorio es de alta atracción para



los intereses ilícitos de los grupos armados ilegales. En este municipio se han presentado asesinatos atribuidos al ELN y al Clan como ejercicio de "limpieza social".

En la actual situación, **las poblaciones más vulnerables son las personas socialmente estigmatizadas: pescadores ancestrales artesanales, el campesinado, afrodescendientes, personas que ejercen liderazgos sociales, defensoras de derechos humanos e integrantes del pueblo indígena Zenú.**

En la zona rural es más común ver a los grupos armados con brazaletes distintivos, aunque hay algunos lugares donde se movilizan de civil pero armados, lo cual dificulta reconocer de qué grupos hacen parte, sobre todo en los lados de Atánquez. Igualmente, es común que porten armas de largo alcance M16 y AK 47 y de corto alcance como el Sig Sauer, así como las minas antipersonal, granadas de fragmentación y los drones explosivos.

El relacionamiento con la comunidad se traduce en sometimiento, es decir, si ellos llegan a determinadas parcelas existe comunicación, pero se deriva en probables problemas con otros actores armados que también hacen presencia. Ahora bien, en ciertas zonas rurales donde no hay presencia del Estado, ellos son la autoridad.

Después del Acuerdo de Paz quedó un vacío de poder entre la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta y, por ende, grupos como las AGC y las ACSN han copado esta zona, en estos territorios se ha presentado reclutamiento de menores, algunos hoy están en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En espacios colectivos no hay garantías de seguridad. Se han presentado casos donde después de asistir a encuentros, los comandantes de estos actores ilegales envían imágenes de su asistencia a los líderes sociales como forma de intimidación, lo que ha fragmentado la confianza en los espacios de encuentro de los líderes y defensores.

Los actores armados tienen interés en estos lugares por el tránsito permanente de comercio legal e ilegal. Puntualmente, por la Guajira entra el comercio ilegal, debido a esto se convierte en un tránsito obligatorio hacia el centro del departamento y del país. Igualmente, el conflicto que se vive entre Pueblo Bello y El Copey se debe a que es un corredor para el narcotráfico por la facilidad de mover y vender la droga. Mientras que en la zona norte hay disputas por el cultivo y la exportación hacía Venezuela y otros países del Caribe. El accionar de estos grupos se da incluso en zonas colindantes a Valledupar, lo que genera zozobra y causa que la población abandone el territorio, causando desplazamiento sobre todo en las zonas rurales.

Respecto a la tenencia de la tierra, persisten los problemas **pues algunos actores sacan a los campesinos de sus tierras.**

Las ACSN tienen presencia en la Zona Bananera, Ciénaga y la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde estos territorios han establecido alianzas con bandas locales que les han permitido ampliar su presencia hacia otros departamentos, entre ellos Cesar, La Guajira y Atlántico, y posiblemente hacia Catatumbo. Esta expansión estaría relacionada con el tránsito por corredores que conectan la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá con Ocaña y la región del Catatumbo.

Otro de los principales actores armados es el Clan del Golfo con presencia en los ocho departamentos de la región Caribe. Algunos de estos grupos también han establecido alianzas con organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, lo que ha contribuido al incremento de los niveles de violencia y al fortalecimiento de las dinámicas de control y circulación de armas.

A estas dinámicas se suman presuntas alianzas con sectores políticos de la región, que facilitarían condiciones de respaldo, presencia y permanencia de los grupos armados en los territorios. Asimismo, se señala una posible connivencia con actores vinculados al corredor minero, en un contexto de enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que ocurrirían con

conocimiento de la Fuerza Pública y sin una respuesta suficiente de disuasión y control.

Pelaya ocupa una ubicación estratégica por su conexión con corredores hacia Santander, Norte de Santander y Bolívar. En este municipio se ha agudizado el contrabando de gasolina, que ha derivado incluso en atentados contra integrantes de la Fuerza Pública. Estas dinámicas económicas y armadas han contribuido a consolidar **formas de gobernanza territorial ejercidas por los grupos armados**, expresadas en medidas como toques de queda, restricciones a la circulación y limitaciones sobre las actividades económicas, lo que evidencia su capacidad de regulación y dominio sobre la vida cotidiana de las comunidades.

Magdalena

En las últimas décadas, el Magdalena ha sido afectado por la actividad de grupos armados ilegales, incluyendo paramilitares y guerrillas. Esta situación ha resultado en altos índices de violencia, desplazamientos forzados y violaciones a los derechos humanos. Según datos de la Unidad para las Víctimas (2025), el Magdalena se encuentra entre los departamentos con mayor número de víctimas reconocidas, reflejando la magnitud del conflicto en la población.

Los Pachencas se han dividido en tres por la disputa interna territorial: el Clan Giraldo se mueve por la troncal del Caribe y por Pueblo Bello; otro sector quedó en cabeza de alias “Camilo”, quien era gestor de paz, quienes tienen como centro de operación en zona bananera, colindando con Guajira; Por último, el Clan de los Castillo, compuesto por alias Pinocho, el menor, quien tiene influencia desde Ciénaga hasta el Atlántico.

En la zona del Atlántico también hay presencia de los Costeños, los Pepes, Rastrojos Costeños, Rastrojos Caleños y es Clan del Golfo quien facilitan su expansión.

Gran parte de su presencia se da en juntas de acción comunales inherentes a veredas o cabeceras municipales, lo que ha generado un copamiento de estas dinámicas en territorios como Ciénaga, Aracataca, Fundación, Zona Bananera, Santa Marta, Valledupar, lo que ha llevado incluso a la cooptación de juntas directivas de esas organizaciones, orientando su dinámica, ampliando su capacidad de gobernanza.



Atlántico

El control territorial se ejerce como una forma de dominación criminal orientada al monopolio de rentas ilegales. Aunque muchas de las prácticas violentas persisten, estas adquieren un carácter cada vez más mercantil, expresado en la extorsión generalizada a comunidades, transportadores, comerciantes, empresas y emprendimientos; el control violento de las rutas del narcotráfico; la cooptación o el desplazamiento de actores locales; y el uso de la violencia como mecanismo de regulación social. A ello se suman las redes de informantes, el fortalecimiento de los frentes de seguridad y las alianzas con empresas de seguridad privada, así como la consolidación de redes económicas ilegales vinculadas al microtráfico y el contrabando, actividades que encuentran condiciones favorables en un departamento caracterizado históricamente por su intensa actividad comercial.

Pese a que las autoridades han presentado operativos con el fin de debilitar la acción violenta de los grupos criminales, con un registro operacional que incluyen más de 4.300 capturados en el área metropolitana y cerca de 2.000 más en el resto del departamento, la crisis de seguridad persiste. En 2023 se registraron 769 homicidios; un incremento considerable se presentó en 2024 alcanzando 947 asesinatos; en 2025 se reportaron 847 homicidios, según cifras de Medicina Legal (El Heraldo, 2026b). Un incremento significativo de violencia homicida ha caracterizado el accionar de los grupos armados en lo corrido del año 2026, en el que solo en el primer semestre se perpetraron 575 víctimas, lo que hace prever que **por primera vez los reportes de homicidios sobrepasarán la tasa con más de mil muertes violentas**, un aumento exponencial en el recrudecimiento de la violencia en el territorio (El Heraldo, 2026).

Esta situación ha permitido, según Melamed (2023), identificar las zonas de riesgo clasificándolas de la siguiente manera:

Zonas críticas: Incluye a Barranquilla, Soledad y Malambo. Hay disputa criminal activa entre tres grupos delincuenciales organizados. Alta incidencia de homicidios y extorsión, presencia de infraestructura estratégica como puertos y redes de transporte. Acumulan 13 de 14 homicidios colectivos registrados en el área metropolitana en los últimos dos años.

Zonas de muy alto riesgo: Está compuesta por Puerto Colombia, Galapa, Santo Tomás, Juan de Acosta y Sabanalarga. Municipios

adyacentes a áreas estratégicas que pueden servir como retaguardia operacional para actores criminales. Reportes de incautaciones de droga en el último año.

Zonas de alto riesgo: Comprende los municipios de Baranoa, Polonuevo, Usiacurí, Palmar de Varela, Sabanagrande y Tubará. Allí hay bajo nivel de violencia, pero limitada presencia institucional y proximidad a zonas críticas, lo que permite el desplazamiento de actores criminales.

Zonas de riesgo intermedio: incluye a Santa Lucía, Manatí, Piojó, Luruaco, Campo de la Cruz, Suan, Candelaria, Ponedera. Estas zonas están dominadas por un solo actor criminal. Presentan vulnerabilidad debido a su ubicación cercana a vías y rutas fluviales utilizadas para el tráfico de drogas y armas.

Según informes de la Defensoría del Pueblo (2023), en el Atlántico operan Los Costeños, Los Papalopez, Los Calamares, el Clan del Golfo, Los Rastrojos Costeños, Nuevo Bloque Costeño, Pepes, el Cartel de Sinaloa, Tren de Aragua, Cartel de los Balcanes (compuesto por exmilitares de Serbia, Croacia y Montenegro) y, desde 2023, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Uno de los problemas más preocupantes es la impunidad. **La ciudadanía denuncia que muchas extorsiones se manejan desde las cárceles**, a pesar de las restricciones tecnológicas. Además, se ha señalado la connivencia de algunas autoridades con estas estructuras criminales, lo que genera desconfianza y subregistro de denuncias.

Uno de los fenómenos más complejos ha sido la disputa territorial entre Los Costeños y Los Pepes, con un recrudecimiento de enfrentamientos en zonas ur-



banas densamente pobladas. En el transcurso de 2024, representantes indirectos de ambas organizaciones han hecho llamados a establecer canales de diálogo con intermediación civil o religiosa, buscando una tregua que reduzca la presión sobre la población civil. Las propuestas han incluido acuerdos de no agresión, corredores humanitarios y el cese de extorsiones en zonas escolares y comerciales. Recientemente se ha reconocido que ha iniciado la caracterización de los miembros de Los Pepes al mando de "Dino" y los Costeños con "Castor", como primer paso a la mesa de diálogo que busca reducir los índices de extorsión y homicidio en el departamento.

En la región del Canal del Dique, la navegación y la economía de la región enfrenta serios desafíos en materia de seguridad. En los últimos años, este corredor ha sido utilizado por grupos criminales para el **tráfico de drogas, el contrabando y la disposición clandestina de cuerpos**. A pesar de los esfuerzos en vigilancia y control, la difícil geografía del canal facilita actividades ilícitas, lo que demanda un refuerzo en las estrategias de seguridad y cooperación interinstitucional para garantizar el orden y la tranquilidad en la zona.

El Cartel de Sinaloa coordina los envíos de droga por los puertos de Santa Marta y de Barranquilla. También sacan la droga en los llamados 'vuelos negros', que salen de pistas clandestinas, y 'vuelos blancos', que transitan por aeropuertos oficiales, en aviones privados y chárter de ejecutivos.

Ahora bien, **el Atlántico rural enfrenta una profunda crisis ambiental, social y económica en gran parte debido a la invisibilización de los campesinos y de los territorios rurales**, dentro de un modelo departamental centrado en la ciudad de Barranquilla.

Uno de los problemas más críticos es el acceso y la tenencia de la tierra. A lo largo de los años, la lucha por el derecho a la tierra ha estado marcada por prácticas violentas como el despojo y los desalojos forzosos, lo que ha generado el desarraigo de numerosas comunidades campesinas. Este fenómeno que se ha acelerado con la expansión de la agroindustria y los proyectos de infraestructura.

La falta de acceso a la tierra limita las posibilidades de las personas campesinas para desarrollar una producción sostenible y autónoma, empujándolas a la marginalidad o al desplazamiento hacia las ciudades en busca de oportunidades. Así, la desconexión entre el campo y la ciudad se profundi-

za, debilitando la seguridad alimentaria regional y erosionando las tradiciones rurales que han sostenido históricamente al Atlántico. A esta problemática se suma la creciente amenaza contra los líderes y lideresas que luchan por el acceso a la tierra.

ACTUACIÓN MEDIANTE ORGANIZACIONES ALIADAS O DE FACHADA

Tanto el Clan del Golfo como los Pachenca asumen el control territorial de manera directa en las zonas rurales de los ocho departamentos del Caribe. Ello les permite proyectar dominio militar a sectores del poder económico y político de la región, con los cuales establecen agendas de control territorial, especialmente sobre organizaciones y liderazgos que perciban como obstáculos a su poder. Asimismo, ejercen poder e infunden terror en las comunidades. Esto les permite ejercer presión de negociación con el Estado.

En zonas urbanas, donde la visibilidad del actuar ilegal es mayor, ambos **grupos paramilitares actúan a través del outsourcing o contratación con grupos armados de delincuencia organizada o directamente con grupos de fachada**, subordinados y sometidos a su control. Estos grupos tienen un papel central en el manejo de rentas provenientes de la extorsión, el microtráfico, negocios de "paga diario", casinos, casas de prostitución y servicios de sicariato o eliminación de adversarios o competidores. De igual forma, son los encargados de asegurar corredores para la salida de cargamentos de narcóticos y el ingreso de cargas de contrabando por decenas de muelles privados o directamente por las zonas portuarias alrededor de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Necoclí o el Golfo de Morrosquillo.

Los grupos fachada también se encargan de "limpiar" la imagen de los grupos paramilitares, cuando deben asumir compromisos de reducción de violencias para solicitar espacios de negociación o directamente como compromiso de desescalamiento del conflicto o buena conducta, una vez instaladas mesas de negociación con el gobierno. A veces, dichos grupos simulan cierta rivalidad o incluso pueden presentarse como "disidencias" que supuestamente el grupo paramilitar no controla. Así, en Sucre se ha denunciado que el Frente Patriotas del Dique se ocupa de control violento, agresiones, homicidios y extorsiones violentas a comercio y familias. En el Magdalena, se ha denunciado que estas labores son llevadas a cargo por parte de otro grupo de fachada denominado "Los Pri-



mos".

En Barranquilla y Cartagena estas estructuras han crecido en los últimos ocho años, asumiendo el control sobre las zonas costeras, los puertos y las principales troncales que conectan las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Rioacha. Los Costeños y los Pepes han sido catalogados como estructuras de crimen organizado de alto impacto y considerados sujetos de negociación por parte de delegados del Gobierno. Aunque mantienen nexos o relaciones de dependencia con estructuras de mayor alcance —como los Costeños con los Pachenca y los Pepes con el Clan del Golfo—, también han establecido, en determinados momentos, alianzas o acuerdos con grupos rivales.

La violencia extrema de estos grupos en los escenarios urbanos constituye un riesgo cotidiano para **las comunidades, organizaciones y liderazgos sociales, que deben mantener un perfil de baja visibilidad para garantizar su sobrevivencia**. Son estos grupos los principales responsables de los elevados niveles de violencia e inseguridad urbana en estas ciudades. Su accionar ha llevado a que durante los últimos tres años la violencia en Barranquilla haya ido al alza.

En el primer semestre de 2026 dicha violencia ha mostrado registros en Barranquilla de **hasta 21 homicidios durante un solo fin de semana** y se han registrado **10 masacres en los últimos 30 meses**. Aunque las investigaciones judiciales por estos casos son deficientes y no abarcan la

mayor parte de los crímenes, a los jefes de estas estructuras se les ha probado una enorme responsabilidad en dicha violencia. Incluso a "Digno Palomino", jefe de Los Pepes, se le revocó medida de prisión domiciliaria por su implicación en 17 homicidios. Del otro lado, a alias "Castor", jefe de los Costeños, se le condenó por responsabilidad en 95 homicidios (El Heraldo, 2026).

EL CONTROL PARAMILITAR EN EL CARIBE Y LAS AGRESIONES Y RIESGOS PARA LAS PERSONAS QUE DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS

El control armado del Clan del Golfo, y parcialmente del ACSN, que se ha extendido por más de tres décadas, ha conllevado una dinámica genocida reiterada en la región Caribe, en la que cientos de lideres y lideresas sociales han sido asesinados, silenciados u obligados a desistir de ejercer su labor. Más recientemente han sido sometidos a la cooptación de sus organizaciones mediante le remoción, desplazamiento o acallamiento de sus líderes y su reemplazo por liderazgos funcionales a la estructura paramilitar o incluso mediante la creación de organizaciones con miembros impuestos por la estructura paramilitar.

Aunque se esperaba que el Acuerdo de Paz con las FARC-EP pusiera fin a los pretextos con los que el paramilitarismo ha venido justificando la eliminación de los liderazgos sociales, en el Caribe la victimización silenciosa o incluso el asesinato directo de los liderazgos sociales ha venido en ascenso.

Desde 2016 hasta fines del 2025, el Programa Somos Defensores registró 161 asesinatos de líderes sociales, 99 de los cuales se perpetraron en solo 3 departamentos: Cesar, Bolívar y Córdoba, donde el dominio del Clan de Golfo es más acentuado (ver tabla 1).

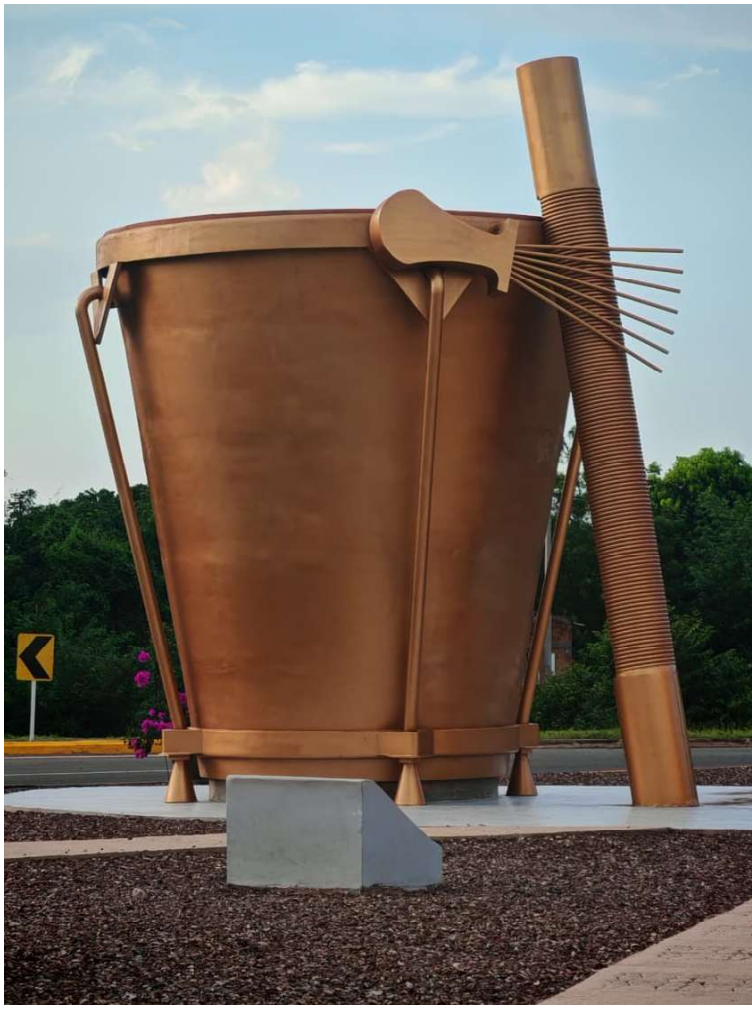


Tabla 1. Asesinatos de líderes sociales en el Caribe (2016 – 2025)

Departamento	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Atlántico	2	2	1	0	0	0	0	1	0	4	10
Bolívar	2	1	1	0	2	4	7	5	7	8	37
Cesar	2	5	2	3	1	2	4	5	2	4	30
Córdoba	4	6	4	1	2	3	4	3	4	1	32
La Guajira	2	2	0	2	1	1	1	1	1	4	15
Magdalena	2	1	1	3	1	2	4	4	5	2	25
San Andrés	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Sucre	0	1	0	1	0	1	2	4	1	1	12
	14	**18**	**9**	**10**	**8**	**13**	**22**	**23**	**20**	**24**	**161**

Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales del Programa Somos Defensores correspondiente al periodo 2016-2025.

Debe notarse que, desde el 7 de agosto de 2022, al inicio del gobierno de Gustavo Petro, **el Clan del Golfo hizo pública una declaración unilateral de cese al fuego**, que luego fue complementada y ratificada en las diversas sesiones de la mesa de negociación. **Esta declaración no parece haber alcanzado para la protección de la vida de los líderes sociales de esta región**. Entre 2018 y 2021 se registraron 40 homicidios de líderes sociales. En el periodo comprendido entre 2022 y 2025, en el cual se expresó el compromiso de cesar la violencia homicida, se incrementó notablemente el asesinato de líderes sociales en el Caribe colombiano, con un aumento del 122.5 % con respecto al cuatrienio anterior, **siendo el 2025 el año con mayor letalidad para el liderazgo social**.

En conclusión, el Caribe es la región del país con mayor presencia y control del paramilitarismo desde hace tres décadas. Fue el territorio donde élites políticas llevaron a cabo el proceso de expansión y control paramilitar de los departamentos situados al norte de los departamentos de Antioquia, Chocó y Santander. Fue allí donde se expandieron las llamadas Convivir desde el departamento de Antioquia, desde mediados de los años noventa, las cuales fueron las base para la expansión de las AUC, contando siempre con connivencia de élites políticas y unidades militares. Luego de desmovilización parcial del paramilitarismo en 2005 se dio un nuevo proceso de reconfiguración paramilitar hasta que en el año 2016 los Urabeños, llamados luego como el Clan del Golfo, llevaron a cabo la reunificación de grupos dispersos que les han permitido control y presencia en más de 400 municipios, la mayoría de ellos en los departamentos de la región Caribe.



Esta presencia se ha ido modificando en el tiempo y, a medida que su control es más hegemónico, ha mutado su forma de control violento sobre las comunidades, en la que los homicidios y los desplazamientos dan lugar a un control mediante amenazas implícitas, presencia armada, subordinación y suplantación de las organizaciones y liderazgos sociales, y cooptación de los espacios de representación política. Sus últimos **esfuerzos han estado dirigidos a simular que son un actor que no ejerce violencia directa, incluso se presentan como protectores de las comunidades frente a otros actores armados. Sin embargo, los homicidios y desplazamientos se hacen explícitos cuando los líderes sociales o las organizaciones que las acompañan se atreven a romper ese orden de silencio** impuesto y denuncian sus crímenes y sus formas de sometimiento y gobernanza criminal.

REFERENCIAS

Caracol Noticias. (2026, 11 de junio). *Cepeda denunció a De la Espriella por supuestos vínculos con paramilitares y este le respondió*. https://www.noticiascaracol.com/colombia/cepeda-denuncio-a-de-la-espriella-por-supuestos-vinculos-con-paramilitares-y-este-le-respondio-rg10

Caracol Radio. (2025, 28 de marzo). *Este es el audio de la reunión de Peter Nocua, excomandante de Polfa Cartagena, con 'Papá Pitufo'*. https://caracol.com.co/2025/03/28/este-es-el-audio-de-la-reunion-de-peter-nocua-excomandante-de-polfa-cartagena-con-papa-pitufo/

Defensoría del Pueblo. (2020, 16 de enero). *Alerta temprana n.º 003-2020*. https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/003-20.pdf

Defensoría del Pueblo de Colombia. (2022, 17 de febrero). *Alerta temprana n.° 004-2022*. https://www.defensoria.gov.co/-/conozca-la-alerta-temprana-n%C2%B0004-de-2022

Defensoría del Pueblo. (2023, 15 de junio). *Alerta temprana n.º 023-2023*. https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/023-23.pdf

Defensoría del Pueblo. (2024, 12 de abril). *Alerta temprana n.º 011-2024*. https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/011-24.pdf

Defensoría del Pueblo. (2025a, 29 de julio). *Alerta temprana n.º 010-2025*. https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/010-25.pdf

Defensoría del Pueblo. (2025b, 02 de diciembre). *Alerta temprana n.º 020-2025*. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91946

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2012). *Atlas estadístico de Colombia: Tomo I. Demográfico*. https://geoportal.dane.gov.co/servicios/atlas-estadistico/src/Tomo_I_Demografico/2.3.2.-población-en-la-región-caribe-e-insular.html

El Espectador. (2025, 5 de mayo). *Presidente pide cambiar control de los puertos: "Han sido cooptados por narcotraficantes"*. https://www.elespectador.com/politica/consejo-de-ministros-y-alocucion-en-vivo-petro-lanza-respuesta-contra-el-plan-pistola-y-crisis-de-seguridad-noticias-hoy/

El Heraldo. (2026, 20 de agosto). *Alerta por homicidios en Barranquilla y Atlántico: en algunos territorios casos superan los de todo 2025*. https://www.elheraldo.co/judicial/2026/08/20/alerta-por-homicidios-en-barranquilla-y-atlantico-en-algunos-territorios-casos-superan-los-de-todo-2025

El Heraldo. (2026b, 18 de julio). *Barranquilla y Soledad: radiografía de la violencia homicida en el Atlántico*. https://www.elheraldo.co/judicial/2026/07/19/barranquilla-y-soledad-concentran-la-violencia-homicida-en-el-atlantico/

Fals Borda, O. (2002). *Historia doble de la Costa: Retorno a la tierra* (2.ª ed.). Universidad Nacional de Colombia; Banco de la República; El Áncora Editores.

Grautoff, M. (2025, 26 de febrero). *Contrabando: El sistema nervioso del crimen organizado en Colombia*. La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-la-paz/mercados-criminales-capacidad-sector-defensa-crimen-organizado/

Infobae. (2025a, 4 de febrero). *Habría presunta alianza criminal para "retomar el control" en distintas partes de Córdoba*. https://www.infobae.com/colombia/2025/02/04/habria-presunta-alianza-criminal-para-retomar-el-control-en-distintas-partes-de-cordoba/

Infobae. (2025b, 1 de julio). *Integrantes de la Policía Aduanera confirmaron que recibían coimas para permitir el paso de mercancía de contrabando: "A uno le dejaban un sobre"*. https://www.infobae.com/colombia/2025/07/01/integrantes-de-las-polfa-confirmaron-que-recibian-coimas-para-permitir-el-paso-de-mercancia-de-contrabando/

La Silla Vacía. (2026, 22 de julio). 1*1 de 16 curules de paz entran a la coalición de Abelardo*. https://www.lasillavacia.com/en-vivo/11-de-16-curules-de-paz-entran-a-la-coalicion-de-abelardo/

Melamed, J. (2023). *Análisis del riesgo situacional en Barranquilla, su área metropolitana y el departamento del Atlántico* [Informe de investigación]. Universidad del Norte, Observatorio de Seguridad Ciudadana. https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/11690

Montaño, J. (2025, 4 de agosto). *La guerra que desangra al sur de Bolívar es por el oro, que emerge de la Serranía de San Lucas como agua: hay 7 mil personas confinadas en Santa Rosa*. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-guerra-que-desangra-al-sur-de-bolivar-es-por-el-oro-que-emerge-de-la-serrania-de-san-lucas-como-agua-hay-7-mil-personas-confinadas-en-santa-rosa-3478318

Noticias Uno. (2025, 3 de julio). *Policías de Cartagena confirman sobornos de contrabandistas en la POLFA* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zixweXTqD5s

Programa Somos Defensores. (2017). *Informe anual 2016: Contra las cuerdas.* https://somosdefensores.org/informe-anual-2016-contra-las-cuerdas/

Programa Somos Defensores. (2018). *Informe anual 2017: Piedra en el zapato*. https://somosdefensores.org/informe-anual-2017-sistema-de-informacion-sobre-agresiones-contra-personas-defensoras-de-dd-hh-en-colombia-siaddhh/

Programa Somos Defensores. (2019). *Informe anual 2018: La naranja mecánica*. https://somosdefensores.org/informe-anual-2018-sistema-de-informacion-sobre-agresiones-contra-personas-defensoras-de-dd-hh-en-colombia-siaddhh/

Programa Somos Defensores. (2020). *Informe anual 2019: La ceguera*. https://somosdefensores.org/informe-anual-2019-sistema-de-informacion-sobre-agresiones-contra-personas-defensoras-de-dd-hh-en-colombia-siaddhh/

Programa Somos Defensores. (2021). *Informe anual 2020: La mala hora*. https://somosdefensores.org/informe-anual-2020-sistema-de-informacion-sobre-agresiones-contra-personas-defensoras-de-dd-hh-en-colombia-siaddhh/

Programa Somos Defensores. (2022). *Informe anual 2021: Teatro de sombras*. https://somosdefensores.org/informe-anual-2021-sistema-de-informacion-sobre-agresiones-contra-personas-defensoras-de-dd-hh-en-colombia-siaddhh/

Programa Somos Defensores. (2023). *Informe anual 2022: Interludio*. https://somosdefensores.org/informe-anual-2022-interludio/

Programa Somos Defensores. (2024). *Informe anual 2023: Puntos suspensivos*. https://somosdefensores.org/informe-anual-puntos-suspensivos/

Programa Somos Defensores. (2025). *Informe anual 2024: Sin protección*. https://somosdefensores.org/informe-anual-2024-sin-proteccion-2/

Programa Somos Defensores. (2026). *Informe anual 2025: Promesas rotas*. https://somosdefensores.org/informe-anual-2025-i-promesas-rotas/

Trejos, L. F., y Badillo, R. (2021, 3 de febrero). *Las guerras de la Sierra Nevada, el sur de Córdoba y el sur de Bolívar*. La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-la-paz/las-guerras-de-la-sierra-nevada-el-sur-de-cordoba-y-el-sur-de-bolivar/

Unidad para las Víctimas. (2025, 26 de agosto). En Colombia hay 10.035.329 personas reconocidas como víctimas, 538.711 de ellas se encuentran en Magdalena [Publicación en X]. https://x.com/UnidadVictimas/status/1960321101642244278

Viloria de la Hoz, J. (Ed.). (2010). *Subregiones productivas del Caribe colombiano*. Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER). https://www.banrep.gov.co/es/node/28951

Wills, M. E. (2026, 20 de junio). *El proyecto paramilitar: ¿legítima defensa?* El Espectador. https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/maria-emma-wills/el-proyecto-paramilitar-legitima-defensa/